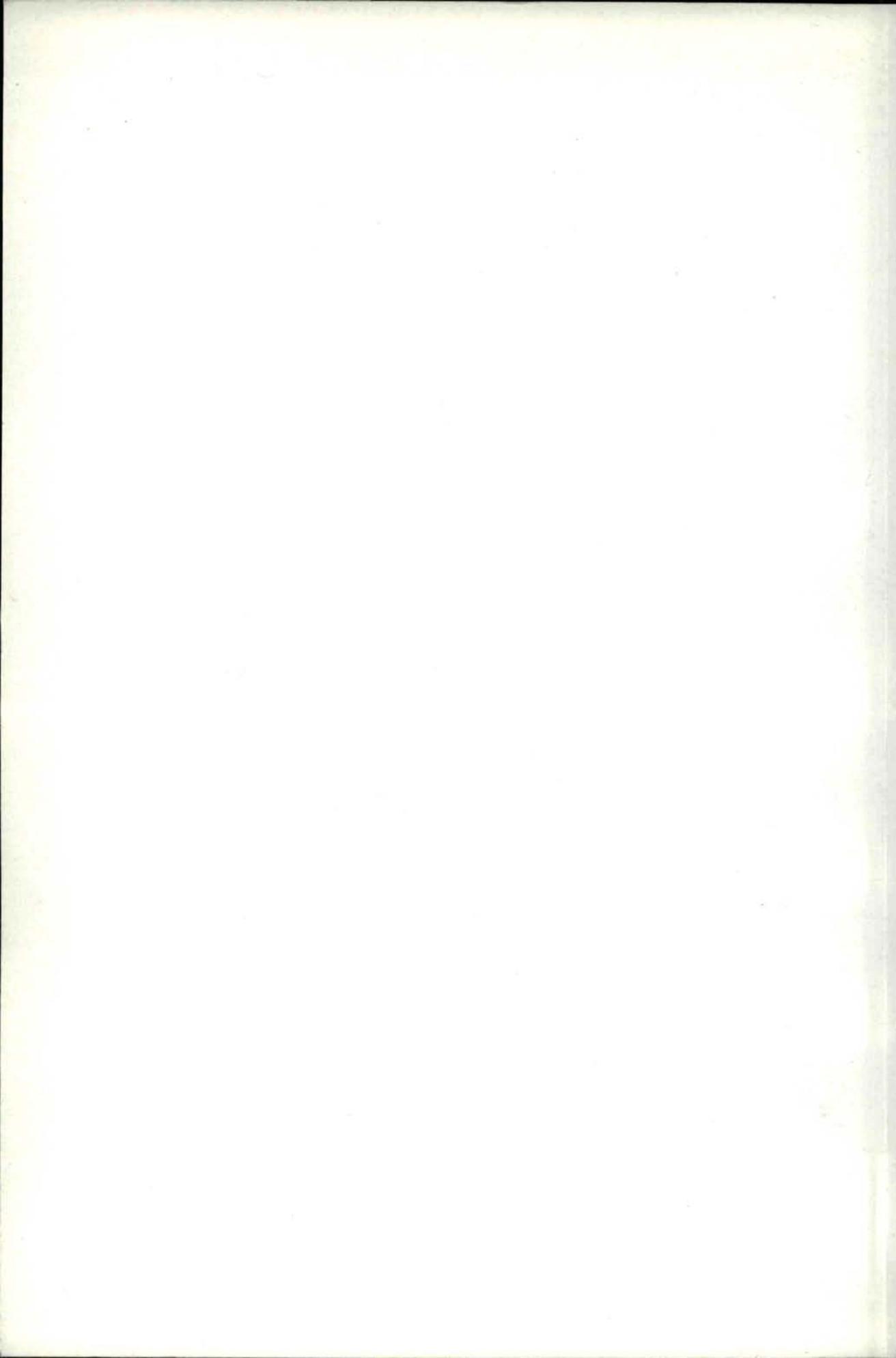


- **Zombi-estalinismos.** G. Buster, A. Buzgalin, R. Clarke, A. Kolganov, J. Malewski, G. Partos
- **1936.** Pierre Broué, Andreu Nin
- **Sahara Occidental. Perspectivas del conflicto.** Isaías Barreñada
- **Italia. ¿Victoria de la izquierda?** Livio Maitán
- **Brasil. "Es necesario continuar construyendo el PT".** Joao Machado
- **China. Estrangular al dragón: la presa de las tres gargantas del Yangtze.** Audrey R. Topping
- **Israel. ¿Por qué ha vencido Netanyahu?: Dos puntos de vista.** M. Warshawski, C. Rossi, J. Clélia



Número 27 / septiembre 1996 / 800 pesetas

agenda

Notas sobre la actualidad política en el Estado español. *Montserrat Cervera, Carlos S. Olmo Bau, ...* **7**

el desorden

Sahara

Perspectivas del conflicto. *Isaías Barreñada* **25**

Italia

¿Victoria de la izquierda?. *Livio Maitan* **31**

Brasil

“Es necesario continuar construyendo el PT”. *Joao Machado* **39**

China

Estrangular al dragón: la presa de las tres gargantas del Yangtze. *Audrey R. Topping* **45**

Israel

¿Por qué ha vencido Netanyahu?: Dos puntos de vista. *Michel Warshawski/ C. Rossi y J. Clélia* **51**

miradas

Desiertos próximos **59**

plural

Zombi-estalinismos

¿Quién teme al poscomunismo?. *Gabriel Partos* **65**

Las elecciones rusas y la izquierda democrática. *A. Buzgalin y A. Kolganov* **73**

Cómo Yeltsin resucitó de entre los muertos. *Renfrey Clarke* **77**

El PCFR se prepara para la derrota. *Moscow News* **81**

Sindicatos y nomenklatura en el giro poscomunista. *G. Buster* **84**

De la “Declaración de Principios” de la Plataforma de Izquierdas del Partido Socialista Húngaro. **93**

Solidarnosc, 15 años más tarde. *Jan Malewski* **95**

1936

El problema de los órganos de poder en la Revolución española. *Andreu Nin* **105**

La dualidad de poderes en la España Republicana a comienzos de la Guerra Civil. *Pierre Broué* **111**

Propuesta gráfica de *Victoria Martos*

Consejo Editorial:

Jesús Albarracín
G. Buster
José Ramón Castaños
Montserrat Cervera
Javier González Pulido
Petxo Idoyaga
José Iriarte "Bikila"
Lourdes Larripa
Miren Llona
Juana López
Gloria Marín
Cristina Monje
Justa Montero
Pedro Montes
Alberto Nadal
Joaquín Nieto
Iñaki Olano
Carlos S. Olmo Bau
Alberte Pagán
Jaime Pastor
Oriol Quart
Daniel Raventós
Miguel Romero
Flora Sáez
Iñaki Uribarri
Enrique Venegas
Begoña Zabala

Diseño:

Jérôme Oudin &
Susanna Shannon

Maqueta:

Escala 7

**Redacción, administración
y suscripciones:**

Apartado de Correos 50.522
28080 - Madrid
c/ Embajadores, 24 - 1ª izda.
28012 - Madrid
Tel.: (91) 530 75 38
Fax: (91) 527 96 52
Correo electrónico: Viensur
@nodo50.gn.apc.org

Imprime:

J. P. Arts Gràfiques

DL: B-7852-92
ISSN: 1133-5637

Precio:

800 pesetas (IVA incluido)

Han colaborado en este número:

Isaías Barreñada

Investigador en cuestiones del Magreb y Oriente Medio. Relacionado con actividades diversas de solidaridad y cooperación con distintas ONG.

Pierre Broue

Historiador, autor de numerosas obras de referencia sobre la Guerra Civil española.

Alexander Buzgalin

Profesor de Economía de la Universidad de Moscú. Antiguo militante crítico del PCUS y uno de los organizadores en su seno de la Plataforma Marxista durante el periodo de Gorbachov.

Renfrey Clarke

Corresponsal en Moscú del semanario *Green Left*, editado por el Democratic Socialist Party (DSP) de Australia

J. Clelia

Miembro de la redacción de *Rouge*.

Andrei Kolganov

Miembro del Partido del Trabajo de Rusia.

Joao Machado

Dirigente nacional del PT brasileño.

Livio Maitan

Miembro del Secretariado Unificado de la IV Internacional. Militante del Partido de la Refundación Comunista.

Jan Malewski

Redactor de *Inprecor*.

Victoria Martos

Licenciada en Bellas Artes. Es pintora e ilustradora.

Gabriel Partos

Analista de Europa Central y Oriental de los servicios internacionales de la BBC.

C. Rossi

Redactor de *Rouge*.

Audrey R. Topping

Periodista y fotógrafo norteamericano especialista en temas chinos.

Michel Warshawski

Responsable del Centro de Información Alternativa de Jerusalén.

El regreso al poder, o a sus inmediaciones, de partidos llamados socialistas, o incluso comunistas, productos de la reconversión de un sector de las derrocadas burocracias estalinistas, es un fenómeno si no generalizado, al menos muy extendido en Europa del Este. Hemos dedicado el *Plural* a estudiar este fenómeno, que hemos llamado “zombiestalinismo” sin ánimo de ofender a nadie, tanto desde un punto de vista general, como a partir de la experiencia de países clave en la región.

Este “regreso” tiene un significado relativamente contradictorio. Por una parte, es claro que estos partidos han sabido recoger buena parte de la decepción política de muy amplios sectores populares, víctimas de la invasión del mercado, y aparecer como sus defensores. Por otra parte, los programas de estos partidos se sitúan, en los mejores casos, en la estela de la actual socialdemocracia europea (a la búsqueda del “capitalismo de rostro humano”), a veces combinada con inquietantes patriotismos y casi siempre ajenos a una autocrítica seria del pasado.

No vemos su capacidad y voluntad real de enfrentarse a los estragos del neoliberalismo salvaje que impera en el Este. Más bien, creemos aquí, hay que admitir con tristeza que de todas las convulsiones políticas y sociales de estos años las fuerzas de izquierda más pujantes sean estos conglomerados, que, por cierto, atraen por estos pagos algunos entusiasmos nostálgicos.

Dos de los artículos que publicamos tienen un enfoque general. **Gabriel Partos**, a partir de un estudio pormenorizado de la experiencia en Lituania, Polonia y Hungría, ha elaborado una tipología política global de las características de estos partidos y las razones de su éxito. Por su parte **G. Buster** analiza la situación del movimiento sindical y, a partir de ella, la configuración de la base social de estas organizaciones, lo que le permite abordar sus perspectivas de evolución.

En un debate de estas características era imprescindible ocuparse de la situación en Rusia. El calendario y los plazos de entrega de colaboraciones nos han jugado una mala pasada en este caso. Publicamos tres colaboraciones escritas en momentos distintos del período que va desde inmediatamente antes de las elecciones hasta la víspera de la 2ª vuelta; no hemos podido contar con un análisis de los resultados finales. Pese a ello, podrá comprobarse que los principales datos estaban correctamente previstos, e incluso destacamos el interés del documento publicado en el **Moscow News** que revela cómo el partido de Ziuganov se preparó para la derrota. En todo caso, tiempo habrá para volver sobre la victoria final de Yeltsin-Lebed y la nueva configuración del poder en Rusia, en la que no hay lugar para el optimismo.

Publicamos también un texto de la Plataforma de Izquierdas del Partido Socialista Húngaro que puede dar una idea del tipo de diferenciaciones que se están produciendo en estos partidos. Y finalmente, nos hemos decidido a incluir un interesante artículo de **Jan Malewski** que hace balance de la historia del sindicato polaco Solidaridad, en el que se encuentran muchas de las grandezas y miserias de la crisis del estalinismo en estos últimos quince años.

Sesenta años de julio de 1936. Las conmemoraciones de la guerra civil van siendo cada vez más rutinarias en la prensa; es mucho más interesante lo que puede verse en los cines, que parece reflejar que la relación de mucha gente con aquellos acontecimientos no está adormecida por la rutina.

Hemos querido replantear alguno de los debates centrales que están asociados a la guerra civil. Para ello hemos podido contar con un colaborador (a quien pedimos disculpas porque no conseguimos encontrar sus señas y, por ello, no hemos podido hacer constar nuestro agradecimiento en la debida forma) que nos envió hace tiempo un artículo inédito de **Andreu Nin**, cuya lectura recomendamos vivamente. Quizás sea el último texto que escribió el gran revolucionario antes de ser vilmente desaparecido, infamado y asesinado por la policía de un estalinismo que vivía entonces momentos de gloria. Está escrito pues después de una derrota tan dura como la de mayo de 1937. Creemos que este contexto debe ser tenido en cuenta para entender la profunda revisión que realiza Nin de sus ideas sobre los órganos de poder en la revolución española. Junto al artículo de Nin publicamos un estudio de **Pierre Broué**, que creemos que está también inédito en castellano, que ayudará a establecer los términos del debate.

Hacía tiempo que no publicábamos textos sobre la situación en Brasil. En cambio se siguen produciendo allí acontecimientos de mucho interés. en el país y en el PT. **Joao Machado**, cuya corriente Democracia Socialista formó parte de la mayoría de la dirección del PT hasta el último Congreso, explica la situación actual y los cambios que se produjeron en ese Congreso.

Las elecciones italianas siguen dando que hablar. A poco que se consolide el gobierno Prodi nos tememos que van a surgir muchos aspirantes a exportarnos el Olivo. Por ello, queremos seguirla de cerca. En esta ocasión, **Livio Maitán** analiza a fondo los resultados electorales. Junto con estos artículos, publicamos diversos trabajos sobre la situación en el Sahara, para el que hemos contado con un nuevo colaborador, **Isaías Barreñada**; un excelente reportaje de **Audrey Topping** sobre un alucinante megaproyecto hidrológico en China y un debate sobre la situación post-electoral en Israel.

El repugnante operativo racista llevado a cabo con el centenar de inmigrantes centroafricanos recluidos en Melilla hubiera merecido un tratamiento amplio en nuestras páginas. Finalmente no ha sido posible y nos hemos tenido que conformar con mostrar nuestra solidaridad simbólica con ellos, reproduciendo un comunicado de la **Asociación pro Derechos Humanos de Melilla**, una buena referencia frente a la indignidad e insolidaridad de que está haciendo gala el Ministerio del Interior.



Desde Catalunya: Jornadas de 20 años de feminismos de las diversidades y la pasión

Montserrat Cervera

"Todo comienza cuando una mujer habla con otra mujer, y ésta acoge su deseo y le da confianza y la seguridad para hacerlo realidad. Y cuando a la una y la otra se unen dos, tres, cuatro, veinte, quinientas, tres mil y muchas más, ya hemos empezado a cambiar el mundo..."

La magia y la música. Jornadas... Nos lo hemos ganado a pulso. Han sido dos años, de encuentros, de citas, de sueños e insomnios, de ganas de vernos, de abrir los ojos, de contar cómo nos va, de sabernos cómplices, de sonreirnos, de hacer renacer la pasión de un joven feminismo maduro, que mira desafiante, pero seguro, en un mundo en el que estamos como mujeres, por voluntad propia, que tiene pasado y que quiere tener futuro...

Tres mil mujeres, el 24, 25 y 26 de mayo nos dimos cita, compartiendo 109 espacios de diversos tonos, intensidades y temas. Espacios de mujeres diversos, en los que recordábamos con emoción las I Jornadas en el Paraninfo de Barcelona, los cambios y los posos que en nosotras y en nuestras vidas habían dejado esto que hemos venido en llamar feminismo..., escuchando las nuevas voces, que se han incorporado más tarde, por edad, o por voluntad propia, añorando a las que faltaban, pero sintiendo el calor de la complicidad.

Han sido las jornadas de la complicidad. Complicidad que quiere y siente en el intercambio, en el compartir el espacio, la fuerza de las acciones de las mujeres... Vínculos de sonoridades que se dan autoridad, que se respetan, se escuchan y se sienten tranquilas y crecidas en la riqueza del desacuerdo, que se reconocen en las vidas y en las acciones de las otras mujeres, que se dan valor desde experiencias diversas, sin precisar la unanimidad para desplegar fuerza y sentirse parte y arte de transformación necesaria y poderosa, capaz de asumir errores y desfacer entuertos...

Hay muchos camino por recorrer desde muchos feminismos, pero estas jornadas han situado el punto de encuentro en el espacio luminoso de unas jornadas. Encuentro donde enhebrar la aguja para tejer con hilos distintos la misma tela de

araña, la misma red de solidaridades, que nos da fuerzas para el intercambio, para el grito, para el baile, para el canto, para el debate enredadas en la fuerza y la radicalidad de los 70 con la experiencia y sabiduría de los 90...

Como experiencia, genial, haberlo vivido ha valido la pena y os la queremos transmitir, por puro gozo y daros sana envidia ya que en vuestros lares miles de mujeres se siguen reconociendo feministas, y el espacio violeta está cada vez más poblado y se adentra y tiñe otros espacios más verdes, o rojos o..., donde las mujeres pueden tirar del mismo hilo para no perderse y contaminar de revolución feminista todo lo alternativo...

Ya hace más de veinte años que veníamos diciendo que la revolución será violeta o no será... No ha sido, pero el violeta ha dejado huella en las sociedades y las mujeres y los hombres de buena fe saben que ya nada será igual ni para las mujeres ni los hombres que buscamos romper el cerco... Hemos encontrado nuestro propio espacio para agujerearlo y nuestra propia red para que no se nos cierre... y nuestra propia voz para decir que el cerco es la muerte y cómo nos gusta vivir libres y multicolores...

Algunas mujeres de fuera de Catalunya nos acompañaron, del País Valencià, de Euskadi, de Madrid, de Andalucía etc... etc... aguantaron nuestra lengua y nuestro pausado hacer de catalanas felices con jornadas nuevas y grandes y les agradecemos tantas complicidades vividas... nuestros deseos de extender las redes más allá de las fronteras, como siempre...

Las letras de las jornadas. Escribimos desde la lúcida resaca, la de las jornadas y la de Sant Joan, transmitiendo sensaciones más que informaciones, pero ya sabéis que los vientos del noroeste son un poco alocados y llenos de *rauxes*... (tramontana, xaloc, ponent).

Pero no os preocupéis; hay testimonios escritos de los trabajos presentados, el dossier de las jornadas, un catálogo de los XX años y la voluntad de recoger todo en un libro que oportunamente nos podéis pedir a *Ca la Dona*, sede de las jornadas (*Caspe 38 pral, 08036 Barcelona*), además de siete boletines informativos de todo el proceso previo, y una exposición gráfica.

Los 109 espacios estaban divididos en 7 ámbitos: Cuerpo y Salud; Relaciones afectivas; Trabajo y Tiempo; Creatividad; Educación y Comunicación; Política; Violencia patriarcal y el inevitable saco de *diversos*.

Y tres maneras de expresarlo. Desde la propia experiencia: Cómo vivimos y sentimos; desde la reflexión: cómo pensamos, y desde la acción: cómo actuamos.

A pesar de lo arbitrario de las divisiones, y sin pretender haber acertado del todo en el reparto de los ámbitos y los espacios, fue una buena idea dejar un espacio en que se expresaran diferentes experiencias de mujeres, experiencias ricas y diversas de 20 años de estar juntas, revueltas, oprimidas, organizadas o en cambio permanente y descifrar desde nosotras mismas cómo nos sentimos.

En cada ámbito lo más destacable ha sido la participación plural y diversa de enfoques y planteamientos de grupos y de mujeres que trabajan en un mismo tema y la voluntad de establecer redes y contactos para el futuro, de no aumentar la dispersión sino de reducirla.

En el espacio "Cuerpo y Salud" los grandes temas pendientes: el derecho a decidir de las mujeres, la situación de los planings, la relación con el sistema

sanitario. Pero también nuevas maneras de enfocar la maternidad y el parto desde la salud, el sida y la denuncia de la utilización del cuerpo de las mujeres, ya no sólo con los anticonceptivos sino en el tema de la menopausia... junto con talleres de ejercicios contra el dolor de espalda, danza, autoestima. Se echó en falta algún tema más directamente relacionado con la sexualidad, con la prostitución...

En "Relaciones Afectivas" los ejes centrales fueron de nuevo maternidad, madres solas, revisión de los conceptos de familia, recuperar la autoestima... lesbianismo. A partir de aquí aún ha sido posible que mujeres nuevas en el movimiento encontraran un espacio y un lugar para seguir avanzando.

Todos los grupos de lesbianas en este proceso han preparado ponencias y artículos y preparado los actos del 28 de Junio. Algunas mujeres han encontrado a faltar un ámbito específico de mujeres lesbianas. Es un tema para seguir debatiendo cómo lo situamos.

"Creatividad". Este sí ha sido un ámbito nuevo en relación a otras jornadas si lo entendemos como un espacio propio. Música, danzas, artes plásticas, la concepción del arte, literatura, recuperación del imaginario femenino. Se echó en falta cine y teatro... pero los 12 espacios de este ámbito, han puesto de manifiesto aspectos nuevos y ha posibilitado la incorporación de nuevas mujeres con nuevas miradas. También se ha creado un espacio permanente para seguir con el tema.

"Violencia patriarcal". Este es un viejo tema pero en estas jornadas, se ha puesto el acento no tanto en el análisis de la violencia, sino en evidenciar todas las dificultades en que se encuentran las mujeres que sufren violencia familiar cuando quieren salir de esta situación. Y aquí participaron muy activamente mujeres agredidas, que están en grupos de autoayuda, profesionales relacionadas con el tema, abogadas... Es un ámbito en que las propuestas concretas de acción siguen siendo muy numerosas, incluyendo, por ejemplo, un llamamiento a los movimientos pacifistas a considerar la violencia familiar contra las mujeres como un elemento más en su lucha.

En el ámbito de "Política" muchísimos espacios, desde las mujeres *no standard*, que hace poco se han incorporado como mujeres discapacitadas que reclaman un espacio propio y específico, la situación de las mujeres presas, tema en que el movimiento ha acumulado ya muchas experiencias y en el que es capaz de hacer y llevar adelante muchas propuestas, el nuevo Código Penal, Maastricht, políticas demográficas, hasta la presentación de candidatura al Parlamento Europeo.

Líneas de pensamiento. A nivel teórico las líneas de pensamiento se han centrado en poder y autoridad femenina. construcción socio-política de la maternidad, en la naturalización del discurso patriarcal y la importancia de la mediación femenina para significar las mujeres en el mundo.

Y una voluntad de reemprender la denuncia radical de las instituciones, de propuestas de resistencia a la política actual europea, y la explicitación del deseo de afirmación y proyección de las relaciones de mujeres.

"Nuestra política se podría empezar a dibujar como práctica de unas relaciones sentidas, pensadas y realizadas en libertad en un marco de respeto a todas las diferencias que no son ni jerarquizables, ni competitivas ni evaluables si no es por nosotras mismas. Diferencias enriquecedoras y transformadoras del mundo, profundamente revolucionarias", se pudo escuchar en el plenario de este ámbito.

En el ámbito "Educación y Comunicación" se constató que la coeducación continúa siendo el reto de futuro, ya que ahora después de veinte años sabemos de qué estamos hablando y de las dificultades y necesidades que comporta. Esto no nos lleva a defender una escuela segregada, al menos de forma generalizada, pero se reconoce la necesidad de ofrecer a las chicas espacios para poder actuar y reflexionar sin la presión de la presencia masculina. "Nuestro objetivo para los próximos 20 años es transformar la coeducación en educación".

En "Comunicación", espacios de mujeres haciendo un periódico, explicando cómo funcionan las radios libres con programas específicos, denunciando la comunicación oficial, y expresando la necesidad de redes informáticas y de todo tipo para mantenernos informadas, así como la necesidad de potenciar y crear nuevos medios propios en radios, prensa, publicaciones y en divulgar más las que ya existen.

El ámbito "Trabajo", tuvo un aire nuevo, expresando los cambios en este tema. Se insistió en el mismo concepto de trabajo, y que partiendo de la definición de trabajo "como actividad humana para obtener los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la población" hay que contemplar además del trabajo asalariado, el trabajo reproductivo, el voluntariado, el rural, el trabajo en lucha contra el racismo, el sexismo... en el que las mujeres tenemos mucha presencia.

Y a partir de aquí mucho debate y propuestas diferentes sobre el reparto del trabajo: estrategias para medir y valorar los trabajos no asalariados en las cuentas nacionales, tema para el que ya existe una red internacional; propuestas de cómo repartir el trabajo doméstico, el salario universal garantizado...

Fue un ámbito tan animado y que venía muy preparado en el proceso que los distintos grupos decidieron seguir debatiendo y preparar unas jornadas para más adelante.

En el espacio de los *restantes* muchas cosas importantes como para tener entidad propia a pesar de que sólo de momento se hubiera planteado un espacio: tema de las mujeres inmigrantes, cada vez más próximas a las autóctonas a pesar de que bromeaban diciendo que a pesar de todo han quedado en el ámbito de "diversos"... y siguen necesitando más relación con las autóctonas en la vida cotidiana.

Difícil sintonía. Otro aspecto novedoso (no en vano han pasado por nuestros cuerpos 20 años) es el espacio y las ganas de ser visibles de las mujeres mayores, las de más de cuarenta que tuvieron un espacio lúdico, las mujeres del 36, las de más de 60 que pedían su reconocimiento, y reivindicaban el derecho a pensión de vejez y de invalidez no contributiva para las mujeres de más de 65 años.

Las mujeres jóvenes destacaban que la ausencia de mujeres jóvenes de manera masiva reflejaba una dificultad de sincronía entre la óptica adulta y la joven, tanto a nivel vivencial como organizativo... Es un debate en el que hay opiniones muy diversas y que seguirá planeando.

La solidaridad, las mujeres contra la guerra, ex-Yugoslavia, las mujeres en la iglesia, qué pasa con los espacios de mujeres, pensamiento, teóricas feministas..., derecho... y muchas cosas más...

El día 24, Día de las mujeres por la paz y el desarme, una lúcida manifestación con brujas dio presencia en la calle de las mujeres feministas catalanas, que hablan, discuten, se manifiestan y bailan muy a menudo pero en esta ocasión de

celebración... de seguir existiendo, de haber aprendido cosas nuevas y de sentirnos llenas de fuerzas en el amplio espectro del mundo alternativo...

Hemos quedado citadas. Este podría ser el resumen del futuro inmediato. Pero es algo más concreto. Ha quedado en pie el compromiso en todos los sectores, o espacios o corrientes del movimiento de seguir en conexión. Para ello en Octubre discutiremos de cómo establecer esta red... Cómo conseguir fondos para al menos tener un boletín, un pequeño núcleo y espacio para seguir conectadas, también red informática si es posible... para conocernos, apoyarnos y relacionarnos.

Para hacer del vínculo entre las mujeres un espacio diverso, plural con voluntad de modificar el mundo. Desde Catalunya que queremos plural, multiétnica sin opresión ni explotación, feminismo adelante...

¿A qué debe responder una futura ley de izquierdas de Cooperación Internacional para el Desarrollo?

José Luis Nieto Pereira, Carlos Gómez Gil, Andrés Sanz, Fernando Harto de Vera, Rafael Cascante

La demanda de una ley de cooperación internacional para el desarrollo, o que con cualquier otro nombre, regule fundamentalmente la Cooperación Pública para el Desarrollo (CPD) financiada mediante los Presupuestos Generales del Estado, así como sus relaciones con la otra CPD que lleva a cabo las administraciones locales y autonómicas –llamada usualmente “descentralizada”– y con la gestionada por las entidades privadas, muy especialmente la referida a entidades privadas sin ánimo de lucro –conocidas habitualmente como Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD)–, ha pasado durante el pasado año 1994 de ser una reivindicación circunscrita básicamente a los colectivos ciudadanos más directamente implicados en la cooperación para el desarrollo –ONGD, profesionales de esta cooperación, junto con lo reflejado por algunos actos parlamentarios sin eficacia inmediata– a ser reclamada por un amplio movimiento social, que consideraba la ley como un elemento fundamental para el incremento cualitativo y cuantitativo de la cooperación para el desarrollo española. En efecto, tras las movilizaciones y los posteriores acuerdos del citado año de 1994, 1995 debería haber sido un año clave para avanzar en un profundo cambio en la política española de cooperación y ayuda al desarrollo mediante un incremento de la calidad, garantizando la eficacia, mejorando la gestión y aumentando la calidad de nuestros recursos destinados a los países y sectores sociales más necesitados.

La CPD –al igual que cualquier otra faceta de la vida pública, de la política o de la toma de decisiones en materia de gasto y de gestión pública– no es neutral respecto a las concepciones ideológicas. Tradicionalmente ha sido la izquierda la que ha

reivindicado la cooperación para el desarrollo como un elemento identificador de su concepción sobre las relaciones internacionales, basada en el principio de la solidaridad entre los pueblos. La derecha ha enmarcado históricamente su concepto de cooperación en el principio de la libertad de mercado, entendiéndola como un instrumento más al servicio de sus intereses comerciales y económicos. En este sentido, la derecha española está desembarcando en la CPD tratando con todas las fuerzas de introducir como criterio directriz el logro de *retornos*; es decir, ¿en qué medida las empresas —españolas o de otros países de nuestro entorno— se beneficiarán de la CPD? Suplantando a los verdaderos beneficiarios: los habitantes del mundo que viven en situaciones de pobreza o miseria.

La definición de los objetivos, instrumentos, modelo organizativo y procedimiento será, por tanto, muy distinta desde una visión política de izquierda o de derecha. Esta diversidad sobre la gestión que debe reflejar una Ley de Cooperación Pública para el Desarrollo propuesta por Izquierda Unida (IU) debe ser una concreción de los valores y concepciones de la izquierda.

El movimiento social que tuvo lugar en 1995 llevó al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a comprometerse pública y reiteradamente a presentar un proyecto de ley antes de la finalización del curso legislativo 1994-1995; es decir antes de junio de 1995. Este compromiso fue apoyado por todas las fuerzas parlamentarias. El incumplimiento de esta promesa hace aún más imprescindible para toda la izquierda el asumir la tarea de avanzar hacia un proyecto de ley que sirva de base a una discusión de todos los que estimen que la cooperación para el desarrollo —y por tanto su regulación— no es un tema neutral políticamente; por lo que es de radical importancia que la izquierda española —y en concreto IU, en colaboración con la izquierda de los otros países desarrollados y subdesarrollados— asuma un papel protagonista en la definición del marco en que se gestionara la CPD —es decir, la realizada con los recursos recabados de los ciudadanos vía impuestos— española, en permanente diálogo con el resto de los colectivos políticos y sociales que se interesen en el tema, sin menoscabo de la independencia y autonomía de todos ellos.

La urgencia de asumir un papel hegemónico para la izquierda ha sido ratificada por los hechos con el conocimiento del Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo —que lleva la fecha de tres de agosto de 1995— elaborado por el Gobierno y que viene a mantener, cuando no a empeorar, casi todos los aspectos —y desde luego, en la mayoría de los más relevantes— un *statu quo* calificado casi unánimemente como insatisfactorio, si no insostenible; incluyendo en esta opinión al Parlamento que lo hizo patente en el Informe de la ponencia de estudio sobre la política española de cooperación para el desarrollo, elaborada por el Senado en 1994, y en el Informe sobre los objetivos y líneas generales de la política española de cooperación y ayuda al desarrollo, elaborada por el Congreso de Diputados en 1992.

Resulta significativo para la valoración de las ideas gubernamentales expresadas en el citado Anteproyecto de Ley, que la representación de las ONGD presentes en el Consejo de Cooperación al Desarrollo votaron en contra de él al considerar según exponen en su voto particular al dictamen del Consejo de Cooperación sobre el Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo— que el anteproyecto:

“1. [...] no recoge suficientemente la prioridad del desarrollo integral y sostenible de los pueblos del Sur y mantiene, por tanto el carácter excesivamente comercial de la cooperación española al desarrollo.”

“2. [...] no corrige el problema de la dispersión administrativa y de la falta de unidad de gestión, así como del liderazgo “político de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo).”

“3. [...] no garantiza, de forma efectiva, la participación social en la cooperación para el desarrollo.”

De esta manera una política tan necesitada del máximo consenso social y político, como es la cooperación y ayuda al desarrollo, —que además ha mostrado contar con un notable respaldo ciudadano— se ha tratado de hacer de espaldas a la ciudadanía, faltando a los compromisos parlamentarios y, desde luego, no enfrentado las insuficiencias que la actual política padece.

¿Qué puede y debe plantearse una Ley de Cooperación para el Desarrollo?

Un acto normativo, como es el caso de una ley, no puede plantearse como el único instrumento para solucionar todas las insuficiencias o carencias del asunto sobre el que versa; en este caso, como ya se ha dicho, la CPD de la nación española. Debe centrarse en los aspectos donde pueda ejercer una pauta cierta en el asunto que nos ocupa: fines; prioridades; instrumentos; estructura; y procedimientos de gestión.

Siendo los fines el núcleo conceptual de la ley, es decir lo que hará, si se quiere una norma coherente, que el resto de los aspectos sean diseñados de una manera u otra, es evidente que una ley sobre la CPD que —explícita o implícitamente— se plantee como finalidad el fomento de las exportaciones de empresas españolas no podrá tener el mismo desarrollo que si toma como criterio sustantivo el colaborar con los pueblos y grupos subdesarrollados para que alcancen el desarrollo pleno, considerando éste como el resultado de una concatenación de aspectos culturales, sociales, económicos y políticos tendentes a superar la opresión y explotación que las actuales estructuras de dominación mundial reproducen y amplían.

En este sentido, parecería adecuado que la solidaridad del pueblo español expresada a través de organismos y presupuestos públicos, es decir que deben representar las decisiones e intereses de la mayoría de los españoles, se den en un marco diferenciado de las relaciones internacionales —que son entendidas de Estado a Estado o por la mediación de organismos supranacionales e internacionales— y que sin sustraerse —es más reforzando el control político y social del pueblo español— se defina como un campo específico: el campo de la Cooperación para el Desarrollo.

Así mismo, tampoco debe confundirse la Cooperación para el Desarrollo —una tarea sustantiva— con la cooperación internacional, que es un instrumento para llevar adelante cualquier labor —una guerra, un tratado comercial, la lucha contra el narcotráfico,...— en el que se impliquen dos o más naciones.

En definitiva, los fines de la CPD debe ser el reflejo articulado del sistema de valores que representa los puntos de vista de la izquierda, con el propósito de que éstos puedan ser asumidos como propios tras su difusión, discusión y eventual transformación por la mayoría del pueblo español. Esto implica forzosamente

superar la tentación de construir el concepto de CPD española sobre la copia del de ayuda oficial al desarrollo (AOD), el cual es, en definitiva, la aplicación de unos criterios de contabilización para los países donantes de cooperación para el desarrollo establecido por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Lógicamente los criterios del CAD en cuanto a la definición de AOD o sobre cualquier otro criterio relacionado con la gestión de la cooperación para el desarrollo son útiles y de obligado conocimiento para realizar una buena gestión de la cooperación, pero no pueden sustituir a unos criterios sustanciales.

A este respecto, no debemos olvidar que la OCDE, que entra en vigor con el Convenio de París de 14 de diciembre de 1961, agrupaba los países capitalistas desarrollados y, en concreto, al CAD pertenecen los principales países capitalistas de AOD; por lo que están excluidos de ella los países receptores. Es fácil suponer que si estos países subdesarrollados, o más precisamente sus pueblos, pudieran hacer oír en pie de igualdad sus opiniones, los criterios del CAD serían muy diferentes.

Además, como no podía ser de otra manera, sus conceptualización y sus categoría de contabilización no son inocentes. Como ejemplo se puede citar que Francia contabiliza dentro de su AOD —de acuerdo con los criterios del CAD— los recursos destinados al desarrollo de algunos de sus Territorios de Ultramar (TOM) o de sus Departamentos de Ultramar (DOM); el Reino Unido también lo hace con los recursos dedicados a algunas de sus colonias —Gibraltar, Hong-Kong, Malvinas...—, lo mismo sucede con los Países Bajos y las Antillas Neerlandesas. Por otra parte, países como Arabia Saudí, Israel, República de Corea —entre otros de similares características— son considerados como susceptibles de ser receptores de AOD. También Japón tiene en Panamá uno de sus principales receptores de su AOD, debido a los importantísimos intereses económicos nipones existentes en ese país; o el peculiar procedimiento de gestionar que tiene Luxemburgo, a través de una empresa privada —*Lux Development*— cuyas actuaciones son más que cuestionables.

La definición de los fines que, independientemente de cómo se expresen en el texto de la ley, deben corresponder a una solidaridad activa con los oprimidos y explotados de los países subdesarrollados, de manera de que estas personas y colectivos puedan diseñar y llevar a cabo sus propias alternativas liberadoras, debe ser acompañada y desarrollada por aspectos que aseguren la pertinencia —la elección de actuaciones cuyo resultado favorable tengan una incidencia significativa en las condiciones de vida de los desfavorecidos—; la eficacia —capacidad de lograr los objetivos propuestos—; la eficiencia —capacidad de obtener el mejor rendimiento a los recursos empleados—; la equidad —la realización de una distribución justa de los recursos (la Constitución española (artículo 31) dice: “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los principios de eficiencia y economía”); y transparencia —capacidad de suministrar información tempestiva y significativa para que un cabal conocimiento de lo que se lleva adelante permita a los ciudadanos utilizar adecuadamente sus capacidades de control y decisión—. Dentro del

concepto de eficacia ocupa un lugar relevante el sostenibilidad o viabilidad –la capacidad de que perduren los efectos positivos logrados– siendo un instrumento privilegiado para el logro de aquélla la consideración de la evaluación como un instrumento básico de la gestión.

Reflejo de los principios en los otros contenidos de la Ley.

Partiendo de la conceptualización esbozada más arriba no parece adecuado incorporar la entidad gestora de la Cooperación para el Desarrollo a la estructura de la administración general, haciéndola depender de cualquier Ministerio –las opciones más obvias serían el Ministerio de Asuntos Exteriores o el Ministerio de Comercio y Turismo como correspondería a una actuación cualquiera de la administración.

Si se decidiera la incorporación de la citada entidad supondría supeditar explícitamente la cooperación española a sus intereses comerciales –en el caso del Ministerio de Comercio y Turismo– y a la política exterior –en el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores– lo que no parece una alternativa concorde con los objetivos de una cooperación para el desarrollo de la izquierda. Además, en el último caso citado, la adscripción al Ministerio de Asuntos Exteriores, y por tanto su obligada supeditación a la política exterior de España, supondría deslegitimar e ilegalizar la CPD que realizan otras entidades públicas –comunidades autónomas, diputaciones o municipios–, ya que al considerar la Cooperación para el Desarrollo como una parte de la política exterior de España –y por ende, de sus relaciones internacionales– constitucionalmente la exclusiva de esta competencia corresponde al Estado (Constitución española, artículo 149, 1, 3ª).

Asimismo, el diseño, capacidad de gestión y cultura organizativa de ambos ministerios –Comercio y Turismo y Asuntos Exteriores–, se ha configurado en función de los dos fines citados. De igual manera en el resto de los ministerios y organismos autónomos existentes su organización administrativa corresponde a fines concretos. La especificidad de los gastos de la CPD no sólo no se pueden incardinar en la práctica de las tareas actuales de un solo organismo del Estado, sino que las estructuras administrativas diseñadas hasta el momento no son óptimas para la gestión de dichos gastos.

Una alternativa atrevida, pero atrevidas son las cosas que en ocasiones hay que hacer para enfrentar a los grandes problemas, es hacer depender a la entidad responsable de la gestión de la CPD española directamente del Parlamento –configurando la futura Agencia como un Ente Público–, de modo que el legislativo dirija, supervise y controle su gestión al mismo tiempo que incorpora a su Comité de Dirección personas provenientes de la sociedad civil –ONGD, sindicatos, ...– y de otras administraciones públicas. Este procedimiento, además de garantizar la decisión y el control democrático por la presencia constante y sin intermediarios del Parlamento, da entrada en la gestión a gran pluralidad de sujetos sociales. También permitiría un tratamiento presupuestario específico, ya que las propuestas presupuestarias serían elaboradas e incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado directamente en el Parlamento; obviando la intervención gubernamental, permitiendo respetar y cumplir los compromisos adquiridos y llevar a cabo programaciones plurianuales.

La necesidad de un consenso social y político sobre la cuantía y destino de los fondos públicos que deseamos dedicar a la CPD dentro de los Presupuestos Generales del Estado y el hecho diferencial de que el objetivo de estos fondos no es la producción de bienes o servicios que beneficien a los ciudadanos españoles, sino que son la expresión de un sentimiento de solidaridad hacia las naciones y pueblos más desfavorecidos, debe tener su reflejo en el proceso presupuestario de los gastos.

En lo que respecta a la estructura de la esta Agencia única para todos los tipos de cooperación –tema en que no se entra debido al general consenso de que una cooperación con un mínimo de calidad no puede gestionarse de otra manera– debe partirse de lo que se consideran sus tareas.

Estas tareas, definidas de un modo general, son el suministro de bienes y servicios en términos concesionales –es decir, gratuitamente o en condiciones más favorables que las establecidas por el mercado– a poblaciones de los países subdesarrollados. Lo anterior diseña un panorama único dentro de las actividades públicas: los receptores de los bienes y servicios son personas físicas y jurídicas –privadas y públicas– no españolas y con residencia fuera de nuestras fronteras, y los bienes y servicios suministrados cubren prácticamente todo el espectro imaginable: créditos blandos, formación en los más diversos temas, asistencia sanitaria, regadíos, ayuda de emergencia, obra civil, fortalecimiento institucional, dinamización social, apoyo a movimientos sociales,... Estas tareas exigen que la futura Agencia, que no debe confundirse con la actual Agencia Española de Cooperación Internacional, que ha mostrado ser un organismo inadecuado, con patentes insuficientes y unas limitaciones que merman extraordinariamente el logro de los objetivos que debe perseguir, debido a su actual adscripción –el Ministerio de Asuntos Exteriores–, status jurídico, personal disponible y “saber hacer” institucional, exigen de ésta que pueda comprar y vender todo tipo de bienes y servicios; crear, participar o poseer empresas; otorgar créditos y cobrar intereses fuera de nuestras fronteras; contratar al personal preciso para desarrollar sus tareas donde éste exista –tanto español como extranjero– y en la forma más conveniente: contratos laborales –indefinidos y con duración cierta– y mercantiles y de acuerdo con las más variadas legislaciones nacionales,... A lo cual hay que añadir mecanismos de control y evaluación que actúen en la realidad y claramente definidos.

Los mecanismos actuales de control y evaluación (¿?) existentes, por su carácter administrativo –pensados para instituciones que actúan en España para residentes en España– provoca grandes distorsiones en la CPD ya que por un lado limitan sus herramientas –al final se hace lo que el ordenamiento permite hacer y no lo que es necesario hacer–, por el otro producen un pseudocontrol debido a su intrínseca inadecuación. Si en otras áreas de la gestión pública los mecanismos de control basados en la legalidad pueden tener alguna razón de ser porque se trata de aspectos eminentemente administrativos de la actuación del sector público, en el caso de los gastos, se dirigen a una población no española y expresan el principio de solidaridad, de la CPD éstos no se corresponden a ninguna de las funciones clásicas del Estado. Aun cuando la legalidad es un elemento básico de la gestión de los gastos de CPD; los principios que aseguran su impacto –pertinencia, eficacia, eficiencia, equidad y transparencia– se convierten en los más relevantes para su evaluación, debiéndose adecuar esta a los distintos marcos sociales,

políticos, económicos y geográficos en que se da; para lo que se hace imprescindible establecer procedimientos y criterios específicos.

En definitiva, es necesario un status jurídico para la futura Agencia Pública que se base en el derecho privado tanto en sus relaciones externas como con su personal. Esto último le permitiría dotarse del mejor personal posible –tanto proveniente del actualmente existente en las administraciones públicas como de fuera de ellas– y, lo que no es menos importante, darle la permanencia adecuada a sus responsabilidades; para ello todo su personal permanente se debería regir por el derecho laboral español o por los equivalente, en su caso, de otros países.

Es necesario añadir a lo anterior la posibilidad de gestionar los presupuestos con un horizonte temporal superior al año fiscal y fijar los mecanismos para permitir que la unidad de gestión –presupuestaria y real– fuera cada intervención.

Así mismo, y no menos importante, se deben prever los mecanismos formales ad hoc para el control, seguimiento, evaluación y procedimientos de difusión que permitan el conocimiento público de lo que se hace y cómo se gestiona. Uno de los mecanismos que pueden ayudar a garantizar la transparencia y buena gestión en este campo sería la inclusión en Ley de la exigencia de un informe anual de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la actuación de la Agencia en el que –y de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas–, además del análisis de la legalidad en la ejecución del gasto, se propusieran las medidas a adoptar para la mejora para la gestión económica y financiera.

Sólo una entidad –la futura Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo– que cumpliera las condiciones expuestas podría hacer frente con garantías de éxito a su papel de entidad gestora única de la CPD con garantías de éxito de acuerdo con los objetivos de pertinencia, eficacia, eficiencia y transparencia que el pueblo español requiere y los oprimidos y explotados de los países subdesarrollados necesitan para colaborar en su desarrollo. IU debe afrontar este compromiso, colaborando con las fuerzas políticas y los movimientos sociales que compartan los fines citados al comienzo de este escrito y que deseen contribuir a la urgente e inmediata reforma de la CPD española.

Por una absolución de la Insumisión

Carlos S. Olmo Bau

Como es poco el tiempo que tenemos, iré directamente al grano y me centraré en la cuestión que nos ocupa: insumisión y nuevo Código Penal. Pido de antemano perdón por lo tajante de las afirmaciones; otro habrá de ser el momento para los matices, como otro habrá de ser el momento de profundizar en las coordenadas en que se mueve mi exposición. Por citar una, la idea de que, en lo sustancial, el Código Penal es continuista. Es por eso que en mi injerencia no irá más acompañado del adjetivo *nuevo*.

Voy, como decía, al grano: La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal, el Código Penal pomposamente llamado *Código de la Democracia*, aunque loable y positivo en algunos aspectos, es manifiestamente injusto, manifiestamente inmoral, manifiestamente inconstitucional,... en otros. El tratamiento que de los delitos "contra el deber de prestar del Servicio Militar" y contra "el deber de cumplimiento de la Prestación Sustitutoria" se hace en este Código, es uno de esos aspectos, por decir algo, poco democráticos.

Delitos, hay que señalar, que no sólo cometemos los insumisos, pero cuya penalización, en lo que a la forma que adopta se refiere, obedece sin duda a la intención de suprimir esta disidencia política. Probablemente, de no existir esta dinámica de desobediencia civil que es la insumisión, el delito estaría castigado de otra manera.

Pero existe, pese a quien pese, y el castigo es el que es. En el primero de los casos, penas de seis a dos años de prisión y de diez a catorce años de inhabilitación (en tiempo de paz); en el segundo, inhabilitación de ocho a diez años y multas de 12 a 24 meses. No es que el Código Penal sea incapaz de alcanzar el objetivo de resocialización que la Constitución le asigna. Es que, en este caso, no hay pretensión de alcanzarlo. Detrás de semejante pena no puede haber voluntad de reinserción de ningún tipo sino ánimo de escarmiento, de venganza, un intento más disimulado que la prisión, pero no menos salvaje, de doblegar una oposición a unas leyes consideradas injustas, inmorales o ilegítimas (y me refiero a las relativas al propio Servicio Militar y su sustituto).

Y movido con semejante ánimo de revancha, los y las legisladores han traspasado los límites que han de configurar un Código Penal en sociedades democráticas. Entre estos, junto al ya citado principio de resocialización, el de humanidad, el de intervención mínima, el de proporcionalidad o el de necesidad. Esta transgresión de límites convierte en tiránica a la norma.

No es, en todo caso, una situación nueva. De la anterior pena, los dos años cuatro meses y un día, pedidos a los insumisos al Servicio Militar obligatorio, por ejemplo, cabe decir lo mismo. No resocializa, es inhumana, es innecesaria, es desproporcionada y permite comparaciones vergonzosas (es superior a la que el Código Penal establecía para el delito de lesiones, el de estupro o el de infanticidio).

Las nuevas penas tienen el agravante de su mayor duración y amplitud y, con la increíble e hipócrita excusa de un trato más humano a los insumisos, amplía la limitación de derechos y profundiza en la retirada de la protección pública del penado, convirtiéndose así en un ataque aún más ilegítimo si cabe de la dignidad de la persona.

No parece, y menos ahora que, prometen, va a desaparecer, que los deberes de servidumbre militar o la servidumbre que lo sustituye penalizando la objeción, sean de tal entidad como para justificar semejantes medidas. Tampoco parece tal la dañosidad social de la actitud del insumiso como para justificar su expulsión de la comunidad. No hay manera de casar el bien jurídico protegido y la entidad de la lesión con las penas previstas por el legislador, salvo que las pensemos desde el parámetro citado de venganza, de escarmiento, de eliminación de la disidencia.

Máxime si además pensamos que el Servicio Militar y su sustituto constituyen, hablando a las claras, un período de detención prolongado en el que los detenidos son obligados, bajo amenazas a realizar una serie de trabajos no debidamente remunerados. Una suerte de esclavitud temporal que atenta contra derechos fundamentales de un determinado sector de la sociedad. Eso y no otra cosa es.

Se da aquí la paradoja de que el Código Penal protege una figura lesiva hacia valores y derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la dignidad de la persona, la integridad moral,... y condena a la privación de libertad y a la muerte civil a quienes no hacen sino lo que debía hacer el legislador y no hace: adaptar al Código Penal esos valores, proteger esos bienes jurídicos presentes a fin de cuentas en la Constitución.

Hace siete años se inició una dinámica de desobediencia cuyo fin es saldar una deuda que nuestra sociedad tiene con la democracia misma: la erradicación del reclutamiento forzoso. En ese camino hemos ido encontrado otras deudas pendientes. Algunas son viejas y estaban ocultas, otras son de nuevo cuño y se han adquirido para evita el pago de las anteriores. La modificación del Código Penal de 1995 es de éstas últimas. Una deuda que tenemos que saldar con la democracia misma.

[Carlos acaba de ser condenado por el Juzgado de los Penal nº 2 de Murcia a 2 años, 4 meses y 1 día de prisión. Vaya desde aquí nuestra solidaridad frente a esta "inhumana" condena]



Un Código póstumo *

A pesar de las manifestaciones políticas de autocelebración que la aprobación del nuevo Código Penal ha generado, la promulgación de un código de penas y castigos nunca puede ser un motivo de alegría, por razones de sensibilidad y de simple estética. Tampoco puede ser un motivo de satisfacción política, cuando ese nuevo Código Penal no supone un avance en la dirección de limitar los castigos con que los ciudadanos se ven conminados desde el Estado, o de buscar nuevas fórmulas, fuera del "derecho a castigar", para la salvaguardia de los bienes jurídicos más dignos de protección en una sociedad.

El Código Penal encargado de definir los delitos y las penas en España a partir del día 25 de mayo es una decepción en ese sentido, surgida en medio de una indiferencia social e intelectual que contrasta con el debate que produjeron en el pasado otras leyes como la del divorcio, la del aborto o la de objeción de conciencia. Sin embargo, estos mismos temas y otros muchos que afectarán a la vida de todos los españoles, sean culpables o víctimas, testigos o jurados, protagonistas o espectadores, se ventilan en este nuevo Código, que se aprobó ya en el final sombrío de la anterior legislatura. Muchas disposiciones ominosas de este Código Penal se han colado en silencio, mientras que otras novedades del mismo se han recibido con más alharacas de las que se merecen.

Las urgencias políticas han influido en esta ley quizás en exceso, sembrándola de guiños oportunistas para disimular viejas lacras represivas que no se ha querido o no se ha podido superar. Cuando la población penitenciaria actual alcanza una cifra que multiplica por tres la de hace diez años y las cárceles se pueblan por el

robo y la droga, ninguna propuesta alternativa se ofrece para estos problemas: la prisión seguirá siendo la pena reina del sistema, y la aparente criminalización de otras conductas antisociales no nos consuela del fracaso de todo el sistema de rehabilitación social que sirve de justificación a las penas privativas de libertad.

Mientras toda la polémica era si el nuevo Código va a suponer o no la excarcelación de 15.000 presos, nada se ha debatido sobre la cuestión esencial: qué va a ser de los que no resultarán excarcelados, de su tratamiento y de la clase de respuesta penal que van a recibir por su conducta desviada. Arrastrada una vez más al terreno de la polémica que le interesa a la derecha política, la izquierda en el gobierno no fue capaz de plantear el verdadero debate: qué penas, para qué conductas, con qué resultados y qué alternativas. Instalada en esa impotencia, la iniciativa legisladora se ha querido justificar con algunas pocas pinceladas progresistas, por las que además ha pagado su peaje.

Así, se alardea de la nueva tipificación penal para los delitos de los administradores de sociedades o para los delitos contra el medio ambiente, pero se pasa de puntillas sobre algunos regalos que el nuevo Código hace a la delincuencia económica, como son la despenalización de la usura, del cheque sin fondos y de las falsedades documentales más corrientes en el tráfico mercantil. Se airean las nuevas clases de penas más modernas -como los arrestos de fin de semana o los trabajos comunitarios-, pero se reservan para conductas que antes tampoco eran de cárcel efectiva.

Como se sabe, los legisladores no se han atrevido a afrontar de una vez la despenalización del aborto y parece difícil que encuentren mejor ocasión. Tampoco han sido capaces de despenalizar la insumisión al servicio militar, y los jóvenes insumisos siguen recibiendo una respuesta penal bien clásica -prisión e inhabilitación absoluta- cuando ya se contempla la supresión del servicio militar obligatorio. Cabe preguntarse si mientras el ministro Serra y sus técnicos encuentran la fórmula económica y administrativa para implantar un Ejército profesional se va a seguir condenando a los jóvenes que hayan cometido el delito de no haber nacido dos años más tarde.

Otro grupo de gente joven que tampoco se somete a ciertas normas ha entrado silenciosamente en este nuevo Código: los *okupas*. Para estos colectivos se ha creado un delito nuevo: "La usurpación de vivienda ajena que no constituya morada". Este es uno de los varios ejemplos de expansión indeseable del derecho penal que ofrece el nuevo Código y que la opinión pública ignora: la criminalización de dos contingentes importantes de jóvenes, precisamente de los más combativos y menos dispuestos a aceptar las cargas injustas que la sociedad les impone.

Especial trascendencia negativa en el derecho de defensa y en el derecho a la información va a tener otro nuevo delito: el de revelación de "secretos procesales" por los abogados, que hasta ahora constituía una mera falta disciplinaria y el Código nuevo eleva a la categoría penal, castigándolo con inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Esta figura delictiva, que pretende hacer de los abogados cómplices de un ocultismo judicial y terminar de paso con la principal fuente de información sobre procesos famosos, indica hasta qué punto las posibles

preocupaciones coyunturales partidistas se han introducido subrepticamente en las decisiones de los legisladores. Pero estas veleidades autoritarias o de compadraje no son socialmente lo más preocupante de la nueva ley.

Como principio general, todo el mundo debe saber que la dureza de las penas previstas para los delitos más comunes, las que llenan las cárceles de nuestro país, no se aminora en absoluto; los jueces y fiscales que proceden en estos días a la revisión de las condenas anteriores pueden dar fe del número ínfimo de presos que ven su situación favorecida con el nuevo Código. La desaparición de la redención de penas, que suponía en la práctica la reducción en un tercio o en la mitad de las penas del Código antiguo, hace que en el cómputo final las penas nuevas duren igual (caso de los robos) o incluso más (caso las drogas) que antes, con la particularidad de que el horizonte temporal de cada preso deja de presentar estímulo alguno para reducir la condena con conducta. Esta circunstancia, además del componente de crueldad añadida que supone cerrar el tiempo a la vez que el espacio, será un factor nuevo de disciplina en los centros penitenciarios. Esto es un temor extendido entre el personal de prisiones, desde los jueces de vigilancia hasta el último celador, de modo que el traslado de los asuntos penitenciarios a la competencia del Ministerio del Interior es una decisión que se encuadra desde esa perspectiva, al margen de episodios de terrorismo coadyuvantes que, una vez más, prestan la oportuna coartada política.

El Código Penal que ahora entra en vigor se aparta decididamente de las tendencias criminológicas más modernas al mantener la reincidencia como agravante de la pena y como circunstancia que impiden la sustitución de las penas privativas de libertad, reforzando así esa figura arcaica del derecho penal, basada en el estigma, que en la práctica sólo sirve para agravar y amplificar la marginación social de unos colectivos sociales ya de por sí marginales.

De igual manera que en las prisiones el terrorismo ha sido la gran excusa para legitimar el aislamiento como sistema generalizado de tratamiento penitenciario, vemos ahora que otras figuras penales excepcionales que se implantaron para los casos de terrorismo salen del ámbito de estos delitos y se establecen en otros.

Así ocurre con la odiosa figura del premio a la delación de los llamados "arrepentidos", que el nuevo Código extiende a otros delitos, de tal modo que no sólo los implicados en hechos de terrorismo, sino también los de narcotráfico, o incluso los de cohecho, verán sustancialmente reducidas sus penas si delatan a sus compañeros. Esta indigna posposición de los principios del derecho penal en beneficio de criterios de eficacia policial, cuando no de puro montaje, ha sido aprobada con la aquiescencia pacata de todos los grupos parlamentarios, sin que semejante innovación antijurídica haya suscitado la más leve polémica.

La extensión de la figura del "arrepentido" coincide con la implantación de los llamados "testigos sin rostro", que se han introducido en la legislación procesal al socaire de una preocupación por la protección de los testigos en los procesos penales, pero que va componiendo un elenco de testigos de la Corona frente a los cuales la defensa del acusado se ve en inferioridad.

Cuando la justicia penal se ha convertido en un espectáculo cotidiano en la

televisión o en la principal fuente de noticias de prensa, las leyes no pueden contribuir a una versión maniquea de un mundo de buenos y malos donde apremia llegar al resultado feliz. La conducta humana tiene siempre demasiados matices para ser juzgada con estereotipos, éste es el fracaso permanente del derecho penal. Pero mientras juzgar y condenar sea inevitable para la sociedad, la elección de los hechos considerados punibles y de su castigo, implica una opción política fundamental que no se puede dar por sentada y que en este caso no diferencia sustancialmente al Código nuevo del Código viejo.

(*) *Fernando Álvarez Uría, Elena Arzobialde, Bernardo Ayuso, Alfonso de Isidro Vázquez, Cristina del Barrio, Julio Falconi, María Fuentetaja, Antonio Gómez Movellán, Enrique González Duro, José Manuel Martín Medem, Francisco Martínez, Gonzalo Martínez Fresneda, Amparo Moreno Hernández, Javier Muguerza, Enrique Olivas Cabanilles, Raquel Osborne, Luis Otero Fernández, Carlos París, Jaime Pastor, Jorge Pleite Sánchez, Manuel Revuelta, José M^a Ripalda, Concepción Selgas, Paz Serrano Gassent, Ana I. Silva, Pilar Soto Rodríguez, Ángel Sordo López, Juan Tabares, Juan Enrique Torres Pérez, Pedro Trinidad Fernández, Julia Varela.*

[Por un involuntario error, EL PAÍS publicó el 8 de junio una versión de este escrito anterior a la considerada definitiva por sus autores, que es la que publicamos aquí"]



Melilla: una agresión racista del Ministerio del Interior

[Meses atrás publicábamos en nuestras páginas una colaboración en relación con los acontecimientos acaecidos en octubre de 1995 en Ceuta entre un grupo de inmigrantes solicitantes de asilo, población local y policía. No era difícil prever que aquello era sólo el inicio de toda una serie de incidentes ocasionados por problemas que vienen de atrás y a los que nunca se les ha querido dar solución, y menos aún canalizar ésta desde la óptica de los derechos humanos. Todo lo contrario. Hemos sido espectadores de actuaciones por parte del actual Gobierno, que burlan su propia ley (una Ley que denunciarnos: la de Extranjería), bajo el más absoluto secreto y la brutalidad más absoluta.

Lo sucedido en Melilla, los anteriores sucesos de Ceuta, y tantos otros... no hacen más que indicar las desigualdades que este Primer Mundo está generando, pero sobre todo la prepotencia y absoluto desprecio con que enfoca los derechos humanos más elementales. Como símbolo de nuestra solidaridad reproducimos uno de los comunicados que nos ha enviado la APDH de Melilla].

“En relación con los incidentes acaecidos durante la pasada madrugada en el patio del antiguo Hospital de la Cruz Roja, que acoge a más de un centenar de inmigrantes centroafricanos, queremos manifestar nuestra preocupación por los mismos, así como nuestra exigencia de que estas personas tengan un trato digno por parte de las autoridades locales.

Es de recordar que estos centroafricanos fueron introducidos en el citado patio

en virtud de una orden del Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla dictada por motivos de imagen, sin el consentimiento de los legítimos propietarios del lugar, y contra la oposición manifestada por diversas organizaciones no gubernamentales que preveían cómo ese hacinamiento, de personas con idiomas distintos, países diversos, a veces enfrentados entre ellos, podía dar lugar a conflictos que finalmente han sucedido.

Ante esto pedimos al Consejo de Gobierno de la Ciudad una actitud responsable y sensible con este problema, alejada de la demagogia, y tendente a dar una solución definitiva del mismo. Asimismo pedimos a los responsables de la Administración del Estado la máxima urgencia en la tramitación de la documentación a estos hombres y mujeres, a fin de que puedan regularizar su situación.

No podemos olvidar que la injusticia y las desigualdades entre los distintos mundos es el origen de este tipo de problemas, que sólo se solucionarán con la cooperación internacional para el desarrollo, a través de iniciativas como la del 0,7% del PIB, etc.

José Alonso Sánchez. Presidente APDH Melilla



VMARTOS

2 el desorden internacional

Sahara Occidental

Perspectivas del conflicto

Isaías Barreñada

Han transcurrido más de veinte años desde que los últimos soldados españoles se retiraron del territorio de la ex colonia del Sahara Occidental, y el pueblo saharauí todavía no ha podido pronunciarse libremente sobre su destino. Desgraciadamente los últimos acontecimientos en torno al plan para la resolución del conflicto auguran más atrasos.

A principios de mayo de 1996, el secretario general de las Naciones Unidas, Butros Butros-Gali, dio a conocer su último informe sobre la situación en el Sahara Occidental en el que prácticamente se renunciaba a seguir preparando el referéndum ante las dificultades para llevar a cabo la identificación de los votantes. Unos días más tarde el Consejo de Seguridad adoptaba por unanimidad la Resolución 1056 por la que se suspendía el proceso de identificación hasta que hubiera "pruebas concretas y convincentes" de la voluntad de las partes y llamaba a que hicieran prueba de cooperación y flexibilidad para posibilitar la reanudación de la identificación y llevar a cabo el referéndum. Por otro lado, se anunciaba la retirada casi total,

de los funcionarios civiles de la misión de las Naciones Unidas (MINURSO) y la reducción en un 20%, dejando el contingente en unos 280 hombres, de la misión militar que vigila el alto el fuego, desde 12 puestos y mediante patrullaje. Asimismo se prorrogaba el mandato de la misión por otros seis meses, hasta el 30 de noviembre de 1996. En el caso de que en esta fecha no se hubieran dado avances, las Naciones Unidas plantearían otras medidas, incluidas nuevas reducciones de los efectivos de la misión. A pesar de todo ello, la organización no reconocía un fracaso definitivo y subrayaba el éxito de haber mantenido el alto el fuego.

Para poder abordar las perspectivas que se abren en este momento al conflicto es necesario recapitular y entender, en primer lugar, por qué y cómo se llega al plan de paz iniciado en 1991 y se acuerda el alto el fuego, y en segundo lugar, conocer algunos detalles del bloqueo sobre el asunto fundamental del censo.

El Plan de Paz

A finales de los 80, más de 13 años de guerra entre las Fuerzas Armadas marroquíes y el Ejército saharauí habían llevado a una situación de virtual empate cualitativo.

Por un lado, se daba el equilibrio, difícil de alterar sustancialmente, entre la ocupación consumada marroquí de una gran parte del territorio del Sahara Occidental, controlando las ciudades, la costa y los fosfatos; y la singular realidad de la República Árabe Saharaui Democrática, nacida en la resistencia y el exilio. En el plano militar, el Ejército de Marruecos a pesar de su superioridad humana y técnica y de la consolidación física de su ocupación mediante la construcción de sucesivos muros defensivos, no había logrado imponer la solución final al conflicto. Por su parte, la RASD tampoco había ganado la guerra pero controlaba claramente una porción del territorio y era capaz de realizar importantes escaramuzas que debilitaban las líneas enemigas. En el plano económico, Marruecos había realizado un ingente esfuerzo económico tanto para financiar la guerra como en materia de inversiones para ganarse el apoyo de la población de las zonas ocupadas. Frente a ello la RASD había organizado las zonas liberadas y creado un *microestado* en los campos del exilio del sudeste argelino donde viven hoy unos 140.000 civiles, en gran parte gracias a la ayuda de Argelia y de la ayuda humanitaria de la Unión Europea, así como de una multiforme la solidaridad internacional. En lo político y diplomático, Marruecos, a pesar de ser un socio privilegiado de las potencias occidentales, no había logrado que ninguna resolución internacional apoyase sus reclamos de marroquinidad del Sahara, mientras que más de 70 países habían reconocido a la RASD. Y, hecho cualitativamente importante, cada vez más la república saharauí y el Frente Polisario eran el referente político de la población en las zonas ocupadas, especialmente de los jóvenes.

Junto a esa situación de empate, se daba en esos años una coyuntura internacional y regional magrebí que propiciaba encontrar una solución negociada al conflicto, tal como habían recomendado las Naciones Unidas desde 1984.

En tal contexto se inscribió la disposición de las dos partes a los buenos oficios del entonces secretario general de las Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar, y el esbozo de lo que iría tomando cuerpo como un plan para la resolución del conflicto. En Enero de 1989, tuvo lugar un hecho decisivo, una delegación de alto nivel del:

Frente Polisario se reunió con el rey Hassan II en Marrakesh. Y en junio de 1990 Pérez de Cuéllar, hacía público un Plan de Paz, que el Consejo de Seguridad aprobaría tras la Guerra del Golfo el 29 de mayo de 1991. El Plan se componía de tres elementos indisociables: negociaciones directas entre los beligerantes, alto el fuego, y referéndum de autodeterminación para la población saharauí.

Inicialmente se previó un período de 36 semanas para la ejecución del conjunto de las actividades consideradas en el Plan: la preparación de las listas electorales en base al único referente fiable disponible, el censo español de 1974; el despliegue gradual de una fuerza multinacional de las Naciones Unidas (MINURSO) compuesta por personal civil y militar; un alto el fuego, intercambio de prisioneros, y la reducción y el acuartelamiento de las fuerzas armadas marroquíes; asimismo tras la identificación se preveía la repatriación de los refugiados y la realización del referéndum. En cumplimiento del Plan, el 6 de septiembre de 1991 entró en vigor el alto el fuego y el acantonamiento de las tropas.

Sin embargo pronto se vislumbró que dos temas serían especialmente delicados de tratar: la definición del cuerpo electoral, es decir quiénes tenían derecho a voto; y la ubicación de las mesas electorales. La segunda cuestión fue resuelta en breve; el Frente Polisario terminó aceptando que sólo se podía realizar la votación en territorio saharauí, incluso en las zonas bajo su control pero habitadas de manera permanente, lo que supondría la repatriación de los refugiados antes del referéndum e independientemente de su resultado.

Sin embargo la primera cuestión mucho más compleja no se resolvió. El problema central del referéndum reside en esta cuestión del censo electoral. Marruecos ha argumentado que dada la naturaleza históricamente trashumante de la población del territorio, muchos saharauís no se encontraban allí cuando los españoles realizaron el censo en 1974, por ello éste debía ser ampliado con varias decenas de miles de personas que tendrían derecho a ello; el número de demandantes de inscripción, supuestamente saharauís, que se encuentran en territorio marroquí es 98 veces mayor que el que corresponde por el censo español. El Frente Polisario ve en ello la voluntad del gobierno marroquí de introducir en el censo una gran cantidad de no saharauís anexionistas y reclama que el cuerpo electoral se base lo más posible en el censo español. Las posturas son irreconciliables: Marruecos sólo vería confirmada la marroquinidad del Sahara si lo amplía, y el Frente Polisario cree que ello distorsiona el proceso y falsea los resultados. En tales circunstancias el proceso se ha bloqueado.

El callejón sin salida del Plan de Paz

Pero más allá de lo irreconciliable de dos posturas sobre el cuerpo electoral, la suspensión del proceso de identificación y la reducción de los efectivos de la misión de las Naciones Unidas es el resultado de un proceso deteriorado. Desde el principio se han dado retrasos y dificultades, alargando los plazos de la misión; de hecho el proceso de identificación sólo se puso en marcha en agosto de 1994.

Si algo caracterizó la actuación del Frente Polisario ha sido su confianza en la autoridad moral y política de las Naciones Unidas, lo que se tradujo en una flexibilidad difícilmente aceptable en otros casos. Lo más significativo ha sido su aceptación de que durante el proceso permaneciera un importante contingente de

tropas marroquíes en las zonas ocupadas. Sin embargo la MINURSO mostró, tal como lo denunció Frank Rudy ex-asesor del Gobierno norteamericano sobre el Sahara, una flagrante falta de firmeza, rayana a la complacencia, respecto a las actuaciones de Marruecos a lo largo de estos cinco años. Desde los primeros meses Marruecos puso trabas al trabajo de la MINURSO; ha instalado decenas de miles de colonos marroquíes en las zonas ocupadas; ha intentado un fraude a gran escala en el proceso de identificación; ha recrudecido la represión ante toda muestra de simpatía o de adhesión a la causa independentista; se ha negado rotundamente a publicitar los primeros resultados del proceso de identificación (a pesar de la transparencia solicitada por Butros-Gali en su Informe de enero 1996). En suma Marruecos sólo está dispuesto a un referéndum *confirmativo*, para reafirmar y legitimar la marroquinidad del territorio.

Por otro lado, la suspensión del proceso de identificación en mayo de 1996 responde a un situación de debilidad de las Naciones Unidas que es aprovechada por una de las partes en conflicto, y no hay ninguna potencia o grupo de países que pueda hacer valer, política y económicamente, mediante presión, la prosecución del proceso en los términos iniciales. De esta forma, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas es incapaz en su informe ni siquiera de identificar claramente a la parte que incumple el proceso.

Para la parte saharauí, una retirada parcial de la MINURSO dejando únicamente su componente militar, es la expresión más clara del doblegamiento de la Organización a los deseos de Marruecos. Hasta ahora el componente militar de la misión tenía la función de velar por el mantenimiento del alto el fuego, en el marco del Plan de Paz y a la espera de poderse realizar el referéndum. Pero ante las imposiciones que pretende Marruecos y la falta de disposición a la transparencia en el proceso, es imposible organizar un referéndum justo y libre, y el mantenimiento de un alto el fuego sin perspectivas de referéndum, solo sirve para dar una caución internacional a la ocupación ilegal del territorio, hecho que conllevaría a una inversión radical de la responsabilidad descolonizadora de la ONU. El alto el fuego sin referéndum prolonga el status quo del que se aprovecha la fuerza ocupante, y se corre el peligro de enquistar la situación, preservar un alto el fuego sin solución política, al modo de lo ocurrido en Chipre.

Por ello el Frente Polisario repite que para evitar una total ruptura del proceso, con las consecuencias imprevisibles que pueda conllevar, es imprescindible una decidida actuación internacional que considere en primer lugar que el problema es un asunto de descolonización ante cuya resolución la comunidad internacional tiene una responsabilidad imprescriptible; que el proceso de identificación de votantes ha de reiniciarse y llevarse a cabo con la transparencia requerida, lo que es la garantía de su credibilidad; y llama a establecer negociaciones directas entre las partes.

¿Qué perspectivas se abren ahora?

Se pueden apuntar varios escenarios a la situación que crea la suspensión del proceso referendario.

1. El primer escenario es el que se deriva de la suspensión parcial del Plan de Paz. La parte saharauí se niega a un plan mutilado en el que sólo esté vigente el alto el

fuego y no se lleve a cabo el referéndum. Y, tal como ha señalado en repetidas ocasiones, esto la aboca a reconsiderar el Plan, revisar su compromiso de alto el fuego, y probablemente entablar de nuevo hostilidades. Esta opción, no deseada por nadie, no tiene aparentes visos de éxito militar directo pero sí tendría importantes consecuencias indirectas. El Ejército saharauí, experimentado en técnicas de guerra irregular podría provocar una situación de desgaste muy costosa para Marruecos. La reanudación de las hostilidades, por un lado, agudizaría las relaciones entre Marruecos y Argelia, históricamente tensas, en las cuales no faltan argumentos de todo tipo para reiniciar fricciones. Por otro lado, en el contexto de crisis económica que ha recogido de manera muy clara el último informe del Banco Mundial y social de Marruecos, el reinicio de la guerra con el desvío de recursos y las presumibles pérdidas humanas puede hacer del Sahara no ya un elemento integrador para el régimen, sino tener efectos contrarios.

De ser utilizada por los saharauis la opción militar apuntaría a explotar la delicada situación de Marruecos: la incertidumbre sobre la sucesión del rey; la crisis social y económica interna; el papel del Ejército en una situación de crisis. La guerra precipitaría un estallido social interno y una definición de los intereses de los países en la región.

2. En cambio la reactivación del Plan de Paz en sus términos iniciales supondría al menos dos conjuntos de requisitos previos. El primero de orden material y político: la disponibilidad de recursos para la prolongación de la misión onusiana y la voluntad política para hacerlo. El segundo tiene que ver con las partes. Habría que abordar frontalmente los criterios de ampliación del censo —y aquí es muy probable la negativa marroquí a hacer concesiones que no confirmen la marroquinidad del Sahara— así como asegurar la transparencia en el proceso, es decir la publicación de los primeros resultados del proceso de identificación de votantes.

Para tal reactivación del proceso se debería contar probablemente con la intermediación de un elemento externo con suficiente peso para actuar en los dos planos, ante la Comunidad Internacional y ante las partes. Quizás sólo Estados Unidos cuente hoy día con esa capacidad.

3. Un tercer escenario posible es la búsqueda de “soluciones parciales” fuera del Plan de Paz. Desde los primeros contactos directos entre el Frente Polisario y el gobierno marroquí en 1989, algunas voces del exterior han planteado que dada la situación de hecho, las soluciones parciales eran las únicas factibles, entendiendo por ello la búsqueda de fórmulas de autonomía o de régimen especial del Sahara en el marco del Reino marroquí.

Estas propuestas tienen voceros en España. Javier Valenzuela, analista de *El País* planteaba el 17 de mayo que la paz requería concesiones de ambas partes, aunque la solución fuera parcial e injusta. Más explícito era Javier Rupérez (*El Mundo*, 13 de junio) defendiendo la búsqueda de una fórmula por la que se legalizara la ocupación de hecho —“(Marruecos) necesita la consagración jurídica internacional de lo que hasta ahora no es más que el desempeño de una función administradora”—, pero esto no mediante el trucaje del referéndum, sino mediante un acuerdo negociado con los saharauis y los países del entorno. Para ello también se necesitaría que el Frente Polisario rebajara sus pretensiones ideales. En suma, supondría consagrar la anexión mediante una negociación.

¿Pero el hecho de que no haya ninguna potencia capaz o con voluntad de presionar realmente al responsable del bloqueo del Plan de Paz, puede acaso convertir un acto ilegal como la ocupación de un territorio en fuente de derecho internacional?

Es cierto que esta fórmula sería muy interesante para los socios europeos de Marruecos, quienes tendrían muchas dificultades para encarar la desestabilización interna en este país magrebí si perdiera sus provincias del Sur. Sin embargo estas posturas intermedias no son admitidas abiertamente hoy en día por las partes, y responden más a una visión externa del problema que a una asunción por los actores directos. Además ¿acaso está Marruecos preparado para aceptar una entidad con elevado nivel de autogobierno en su seno?, ¿podría llegar a sintonizar esta fórmula con los proyectos de regionalización que se discuten hoy en Marruecos?

España tiene desde 1975 una deuda con el pueblo saharauí. En los Acuerdos Tripartitos de Madrid (octubre de 1975) España no transfirió soberanía sino la administración sobre el territorio, quedando pendiente su cualificación internacional definitiva de un proceso de autodeterminación.

Hasta ahora la postura española ha sido de no renunciar a los principios de Naciones Unidas en materia de descolonización, pero sin estorbar soluciones que surjan y se conformen en la región u en otras partes. Sin embargo esta postura ha servido más bien para escudarse en la ONU (en palabras del ex-ministro Morán: "toda acción española debe ser respuesta a una petición de la ONU") y ha resultado una fórmula muy cómoda para excluir de la agenda hispano-marroquí y euro-marroquí esta cuestión. España debería ser un elemento mucho más activo para la realización de los derechos inalienables del pueblo saharauí, y eso sin descuidar la situación interna de Marruecos.

Durante mucho tiempo Marruecos ha recibido un vasto apoyo occidental explotando su aparente imagen de baluarte contra el islamismo en el Magreb. Sin embargo con su intransigencia en la resolución de la cuestión saharauí está demostrando ser un elemento perturbador en la región. ¿Habrá entonces que esperar a que Marruecos se democratice para que se resuelva de la manera más justa posible la cuestión del Sahara? ¿o quizás, como plantea el Frente Polisario, la resolución justa de la cuestión del Sahara, al romper necesariamente el status quo construido con la ocupación, contribuirá a la democratización de Marruecos?

¿Victoria de la izquierda?

Livio Maitan

Los resultados de las elecciones del 21 de abril de 1996 han inspirado, en Italia y en otras partes, comentarios que ponen el acento en su alcance innovador. En un artículo aparecido en el periódico del Partido Democrático de la Izquierda (PDS), el historiador Lucio Villari ha llegado a señalar que "el valor de una elección que se puede definir como el verdadero giro histórico en la historia política de Italia desde 1861. A lo largo de 150 años de historia unitaria, no había ocurrido nunca que fuerzas y movimientos políticos moderados eligieran con una convicción absoluta a la izquierda como aliada electoral y gubernamental" (L'Unita, 23 de abril). El mismo Financial Times, sin embargo bastante sobrio en otros comentarios, ha utilizado la expresión "historic outcome" (salida histórica) (23 de abril). Por su parte, Alain Touraine, en un comentario aparecido en el periódico de la patronal italiana, ha escrito que "la reconstrucción política de Europa recomienza justamente desde Italia" (Il Sole-24 ore, 25 de abril). Mucha gente ha establecido un paralelo con la victoria de Mitterrand y del Partido Socialista francés en 1981.

Sin embargo, tales comentarios son francamente impresionistas, y no reflejan sino muy parcialmente la realidad de las cosas. De hecho, se ha producido una diferencia evidente entre los resultados según se observen bajo el ángulo del reparto de los escaños o el de los votos obtenidos. Una ley electoral, basada en gran parte (75%) en un escrutinio uninominal, que en marzo de 1994 había favorecido a la derecha, esta vez —como consecuencia principalmente de la participación independiente de la Liga del Norte,— ha permitido al centro-izquierda obtener una mayoría de los escaños. Por otra parte, si se consideran los cambios acaecidos en el espacio de dos años en el tablero de las fuerzas políticas —entre ellos la ruptura de la Liga del Norte con el Polo, la escisión del Partido Popular Italiano (PPI), independiente en 1994 y ahora integrado en el Olivo, la alianza entre el centro-izquierda y el primer ministro Lamberto Dini— una comparación estricta entre los datos de hoy y los de las últimas legislativas no sería muy pertinente.

Un sistema electoral desconcertante

Para comprender las orientaciones reales del electorado, está claro que hay que basarse esencialmente en los votos obtenidos, teniendo en cuenta el hecho de que para el escrutinio uninominal a la Cámara de diputados y la elección al Senado había sido realizado entre el Olivo y el Partido de la Refundación Comunista (PRC) un acuerdo de desistimiento. En lo que se refiere a la elección a la Cámara —que es la más significativa, ya que los jóvenes de menos de 25 años no pueden votar para el Senado—, por la cuota proporcional, el Olivo, teniendo en cuenta todas las componentes, ha conseguido 13.017.001 votos (34,7%) y el PRC 3.215.960 (8,6%), osea un total de 16.232.961 (43,3%), mientras que el llamado Polo de las libertades ha obtenido 15.780.752 votos (42,1%) y 16.448.785 (44%) si se añaden los votos de

la lista Pannella-Sgarbi (701.033=1.9%) **1**, con la que había realizado un acuerdo parcial. En lo que se refiere a la cuota uninominal, el Olivo ha tenido 15.729.124 votos (42,16%) y el PRC 1.000.244 (2,68%) en las circunscripciones en las que, como consecuencia del acuerdo de desistimiento, ha presentado sus propios candidatos, es decir 16.729.368 votos (44,8%) en total, mientras que el Polo ha tenido 15.028.275 votos (40%) y 15.098.220 (40,4%) incluyendo los votos del reagrupamiento Pannella-Sgarbi. Hay que añadir que el Polo ha perdido escaños a causa de la presencia de candidatos del Movimiento Social Italiano (MSI), es decir del sector de la antigua formación neofascista que no había aceptado la transformación en Alianza Nacional (AN). Éste no ha obtenido por la cuota proporcional, a nivel nacional, mas que el 0,9% de los votos, pero en la circunscripciones en las que ha presentado sus propios candidatos, ha alcanzado a menudo el 4% y a veces incluso más. Finalmente, la Liga del norte, dirigida por Umberto Bossi e independiente tanto del Olivo como del Polo, ha conseguido un éxito importante, cuyo alcance no hay que minimizar: 3.777.786 votos (10,1 %) frente a 3.396.0122 (8,6%) en 1994 a pesar de la disminución de los votos efectivos, y se ha afirmado como el primer partido en regiones como Venecia y el Friul y en una parte de Lombardía.

En conclusión, es cierto que la derecha ha encajado una derrota, al no conseguir alcanzar una mayoría parlamentaria y que sus dos principales componentes, Forza Italia (FI) y AN pueden hacer un balance negativo **2**. Pero es sin embargo indudable que entre los electores, no hay una mayoría de centro-izquierda, ni de centro-izquierda más Refundación Comunista. El reparto de los escaños —el Olivo dispone de su propia mayoría en la Cámara y de una mayoría con el PCR en el Senado— no puede borrar esta constatación esencia.

Por tratar ahora sobre las relaciones a nivel socio-político, señalemos en primer lugar que tras unos conflictos internos y oscilaciones múltiples, ha sido un sector mayoritario de las capas burguesas hegemónicas durante los últimos decenios, quien ha optado finalmente por el centro-izquierda. Explican esta opción la desconfianza hacia Berlusconi, juzgado como el representante demasiado directo de intereses sectoriales y políticamente poco experimentado, y a menudo torpe; las reservas persistentes hacia la AN, a pesar de la habilidad y de la flexibilidad de su líder, Gianfranco Fini, las tomas de posición desmesuradas de portavoces de Berlusconi, por ejemplo, a propósito de veredictos recientes de la magistratura, y los vaivenes de algunos representantes del Polo a propósito de los criterios y de los plazos de Maastricht. La inspiración centrista moderada de la plataforma del Olivo

1/ Pannella es desde hace decenios el líder del Partido Radical. Ha llevado a cabo, sobre todo en lo años 70, luchas democráticas importantes, antes de convertirse en un verdadero charlatán de la política que defiende las causas más extravagantes y más reaccionarias y un partidario llamativo de Berlusconi en 1994. Sgarbi es un intelectual que comenzó como "socialista", luego fue candidato del Partido Liberal y finalmente se unió al movimiento de Berlusconi. En las elecciones de abril estaba entre los candidatos de este movimiento, a la vez que había dado su nombre a un reagrupamiento exterior a Forza Italia.

2/ FI ha pasado de 8.119.287 (21%) a 7.715.342 (20,6%): su mejor resultado había sido el de las elecciones europeas de junio de 1994: 10.123.990 votos (30,6%). AN ha pasado de 5.202.698 (13,5 %) a 5.875.391 (15,7%). Pero, basándose en sucesivos sondeos, esperaba un crecimiento mucho más consistente. Por otra parte, se ha registrado una baja del número de votantes (-4%). Las papeletas en blanco y los votos nulos son el 8%.

y el papel de líder jugado en su seno por Romano Prodi, católico practicante, durante mucho tiempo miembro de la Democracia Cristiana (DC) y uno de los principales dirigentes del sector económico bajo control del Estado, han contribuido a ello. Esto tanto más en la medida que, en su escalada de desplazamientos hacia el centro, el PDS se ha integrado perfectamente en este marco y que el primer ministro saliente Lamberto Dini ha aportado su apoyo. Añadamos que, sobre todo tras la experiencia del conflicto sobre la reforma de las jubilaciones, reforma que había tropezado con una movilización masiva de los trabajadores para ser adoptada luego sobre la base de un compromiso con los burócratas sindicales, una garantía suplementaria a los ojos de amplias fracciones de la patronal estaba en el hecho de que los dirigentes de las tres grandes centrales –Confederación general italiana del trabajo (CGIL), Confederación italiana de sindicatos libres (CISL), Unión italiana del trabajo (UIL)– se habían unido a la coalición. Los famosos *mercados* parecían ser de la misma opinión ya antes del escrutinio: lo confirmaron implícitamente por sus reacciones decididamente positivas tras el voto **/3**.

Se puede pues concluir que la coalición que ha ganado y el nuevo gobierno –en el que un papel importante ha sido concedido a personalidades conservadoras, entre ellas los antiguos primeros ministros Dini y Ciampi y el juez Di Pietro–, que va a formar, representan una alianza o una convergencia de fuerzas sociales y políticas diferentes: sectores hegemónicos de la burguesía, que habían apoyado siempre tanto los gobiernos centristas dominados por la DC como los gobiernos de coalición DC-PS, amplias capas pequeño burguesas, clientela tradicional de los partidos de centro, del centro-izquierda e incluso de centro-derecha, y capas populares, que constituyen aún, mayoritariamente, el electorado del PDS. Aceptan de forma completamente natural el conjunto de opciones económicas y sociales fijado por el Tratado de Maastricht, la *filosofía* de las privatizaciones y el marco de alianzas internacionales simbolizado por la OTAN.

Fracaso de la derecha y límites del éxito del centro izquierda

Todo esto difícilmente puede ser puesto en duda, si se quiere observar de frente la realidad. Pero sigue siendo cierto que el alivio, incluso la satisfacción que mucha gente ha sentido tras el anuncio de los resultados, son completamente legítimos. En efecto, si la derecha hubiera alcanzado su objetivo arrancando una mayoría en el Parlamento, habríamos visto un gobierno con orientaciones socio-económicas ultraliberales, más duramente agresivo hacia la clase obrera y sus conquistas y que favorecería un deslizamiento institucional presidencialista. El marco de un gobierno de centro-izquierda, incluso sensiblemente desplazado hacia el centro, debería mostrarse, en principio, más favorable al movimiento obrero, al menos asegurarle un respiro que le permitiera recomponer sus filas y crear mejores condiciones para un relanzamiento. Además, la derrota encajada por la derecha marca el fracaso de la tentativa de la construcción de una nueva dirección burguesa que Berlusconi y

3/ Es significativo también que el presidente Clinton haya sentido la necesidad de subrayar que los EEUU colaborarían con un gobierno del Olivo igual que con cualquier otro gobierno.

sus aliados habían emprendido desde 1993 para llenar el vacío que le habían dejado la crisis del antiguo *establishment* y el hundimiento de la Democracia Cristiana. Así pues, una estabilización del régimen –bien bajo viejas formas parcialmente retocadas, bien mediante una “renovación” a la Berlusconi, bien por la reedición de un bonapartismo tecnocrático rampante del tipo Dini –no está al orden del día en el momento actual y no lo estará en un futuro próximo.

Es cierto que tras el 21 de abril, se han elevado voces optimistas en el campo de los vencedores: si se les escucha, sería ya posible formar un gobierno estable para cinco años. A guisa de contrapunto, algunos portavoces de los perdedores han exhortados a los suyos a prepararse para cinco años de oposición.

En un contexto tan problemático y contradictorio, no vamos a lanzarnos a hacer pronósticos. Pero lo menos que se puede decir es que el gobierno Prodi no tendrá la vida fácil y conocerá desde el comienzo vicisitudes de todo tipo. Como ya hemos visto, es en gran medida el producto de un sistema electoral muy particular y no de la victoria de una fuerza sobre otra en el marco del sistema bipartito que habían soñado los partidarios de la abolición del sistema proporcional. Por utilizar un eufemismo, la recomposición política no ha simplificado mucho las cosas hasta ahora y es difícil de creer que el panorama pueda cambiar radicalmente en lo inmediato. Es más probable que nuevas rupturas y nuevas convergencias se produzcan sobre un fondo de diferenciaciones y de conflictos persistentes. Podría incluso haber gobiernos que sobrevivieran bastante, incluso con el mismo presidente del Consejo, pero, por así decirlo, de geometría variable, es decir con mayorías parlamentarias cambiables y tomas de posición cambiantes.

En efecto, la mayoría parlamentaria está lejos de ser clara y sólida. El gobierno Prodi, al menos la Cámara de diputados, tiene necesidad de los votos del PRC, que ha llevado a cabo su campaña electoral bajo la base de un programa divergente del planteado por el Olivo en casi todos los puntos importantes. Salvo si el PRC opera un brusco giro hacia la derecha y claudica de forma escandalosa, su apoyo no será sino raramente dado de antemano. Podrá ser reemplazado, si se da el caso, por el apoyo de otros grupos parlamentarios, bien de centro-derecha (por ejemplo, de los antiguos demócrata-cristianos) incluso de la Liga del Norte y de fracciones de la berlusconiana Forza Italia. Pero eso será, en cualquier caso, un apoyo puntual y precario, al menos por todo un período.

Por otra parte, el propio Olivo está compuesto de una gama de partidos y reagrupamientos, que no solo tienen historias muy diversas, sino que hoy mismo guardan concepciones y orientaciones sensiblemente diferentes, incluso, sobre ciertos puntos, opuestas **4**. Es cierto que el PDS **5** es de lejos la formación más fuerte y mejor organizada. Pero, incluso haciendo abstracción del PRC, debe tener en cuenta que, si bien tiene la mayoría relativa, no representa sino el 21,1% de los electores mientras que sus aliados representan el 13,6%. Además, a causa del acuerdo según el cual un lugar importante en las circunscripciones de escrutinio uninominal había sido atribuida a formaciones menores, si bien tiene una mayoría entre los senadores de la

4/ Por ejemplo, en materia de reformas institucionales.

5/ En 1994 el PDS había obtenido el 20,4%. Ha ganado en cifras absolutas 40.000 votos, pero hay que considerar que esta vez estaban incluidos en sus listas para el escrutinio proporcional algunos pequeños partidos.

coalición, sólo tiene en la Cámara 140 diputados mientras que sus aliados tienen 146 (el PRC tiene 35) **6**. Hay que preguntarse sobre el papel que puede jugar la Liga del Norte, cuyo éxito, hay que recordarlo, no había previsto nadie.

El proyecto del Bossi

Nosotros hemos planteado la hipótesis basada en declaraciones de su propio líder, de que la Liga podría en ciertas ocasiones, por ejemplo, en materia de privatizaciones, ir en auxilio de la mayoría. Pero, más generalmente, la formación de Bossi no podrá renunciar a su ofensiva federalista, plagada de amenazas de secesión de lo que llama ya la Padania, es decir, el conjunto de las regiones del valle del Po. Es cierto que el Olivo se quiere también federalista. No podrá apaciguar a Bossi y compañía con simples proclamas o concesiones menores. De hecho, la Liga tiene un apoyo social bastante amplio y sólido en el que se encuentran pequeños y medios empresarios, comerciantes, artesanos, fracciones de la pequeña burguesía campesina así como capas populares, en parte incluso obreras **7**. Está particularmente enraizada en este norte que, mientras que el resto del país se estancaba, ha conocido un crecimiento económico espectacular, estableciendo múltiples lazos con la Mitteleuropa y en primer lugar con ciertas regiones de Alemania. ¡Estas son las muy concretas raíces de las aspiraciones secesionistas en ascenso!

Tras las elecciones, Umberto Bossi no ha ocultado su intención de radicalizar más la actitud de su movimiento. Ha denunciado las declaraciones profederalistas de otros partidos y coaliciones como puramente declamatorias e hipócritas y ha puesto el acento con más fuerza en una variante secesionista (entre otras cosas rebautizando su *parlamento*, que se reúne en Mantua, que se llamará en adelante parlamento de la Padania), proyectando la formación de una especie de gobierno alternativo y de un Comité de Liberación de Padania e incluso milicias llamadas *verdes*. En una entrevista al *Corriere della Sera* (3 de mayo), ha declarado: “El problema es completamente diferente. El Norte y el Sur deben tener cajas separadas de las que sacar, mientras que el federalismo implica que la caja sigue siendo única. Existe ya en Italia una economía dual: la economía del Norte y la economía del Sur. si se separan las cajas tanto el Norte como el Sur se verán beneficiados. El Sur podría convertirse en el Taiwan del Mediterráneo. Ciertamente, entre las dos cajas se podría establecer una conexión.

No ha habido cambios importantes desde entonces: el nuevo gobierno –cuya orientación fundamental en materia económica no será cualitativamente diferente de la de los gobiernos Amato, Ciampi y Dini– no conocerá ningún alivio en el frente del paro y deberá tomar medidas bastante drásticas, antipopulares, para abordar en el espíritu de Maastricht los problemas del déficit presupuestario y más generalmente el endeudamiento del Estado.

6. Algunos ejemplos ilustran los efectos extravagantes del sistema electoral: el movimiento del primer ministro saliente, Dini, que ha tenido en la proporcional 4,3%, obtiene en la Cámara 27 escaños mientras que el PRC (8,6%) obtiene 35; en el Senado, los Verdes (2,5% a la proporcional) tienen 14 electos y el PRC 11. El PPI –5% aproximadamente– tiene 54 diputados y 26 senadores.

7. El secretario de la CGIL, Cofferati, ha hablado de un peligro “liguista” en las filas de su central. Según testimonios dignos de confianza, en uno de los mitines de Bertinotti en Venecia, algunos obreros se declaraban de acuerdo con el PRC en las reivindicaciones sociales, a la vez que se declaraban votantes de la Liga.

Ciertamente, tras la gran ola del otoño de 1994, ha habido más bien una calma social: el año 1995 ha registrado la tasa de conflictos más baja desde hace decenas de años. Es posible que el estado de espíritu que se ha esbozado en las capas populares tras la derrota de la derecha y la espera de medidas que tiendan a mejorar aunque fuera un poco su condición, den al nuevo gobierno un respiro. Pero tal actitud no puede ser duradera en ausencia de resultados tangibles y hay pocas posibilidades de que esos resultados se produzcan si el Olivo mantiene las orientaciones planteadas en su programa electoral, que se inscriben, repitámoslo, en una gran continuidad con las orientaciones de los gobiernos precedentes (incluso, al menos sobre algunos problemas, las del gobierno Berlusconi). No será una tarea fácil tampoco para el Olivo progresar efectivamente hacia las reformas institucionales de las que se ha hablado mucho, incluso tras el 21 de abril, pero sobre las que existen desacuerdos en la coalición misma (por ejemplo, el PDS no descarta, en principio, una solución presidencialista o semipresidencialista mientras que el PPI la rechaza).

El PRC ante un decisión difícil

Tras la salida de la corriente derechista **8**, hubo un amplio consenso en las instancias dirigentes del PRC, incluso si a veces —por ejemplo, a propósito del desistimiento— ha habido voces en contra y abstenciones tanto en la Dirección como en el Comité Político nacional. Tras el 21 de abril la situación no ha cambiado por el momento: ha sido confirmada por la decisión de permitir la formación del gobierno Prodiri, a la vez que no se adquiría ningún compromiso para con él y no se buscaba ningún acuerdo a medio y largo plazo. Posteriormente, la actitud del partido será fijada en función de lo que el gobierno proponga en el parlamento y sea capaz de realizar.

Ello no impide que el PRC pueda entrar en una zona de tormentas. Ha llevado a cabo una campaña electoral centrada en las 35 horas sin reducción de salario, la reintroducción de un mecanismo de escala móvil, una reforma fiscal radical, el restablecimiento de un sistema proporcional, la oposición a toda solución presidencialista, el derecho de voto administrativo para los inmigrantes, la oposición a Maastricht y la OTAN, una crítica severa a las orientaciones de las confederaciones sindicales. En definitiva, ha planteado un proyecto de alternativa cualitativamente diferente del proyecto de alternancia predicado por el PDS y el Olivo. La dificultad reside ahora en que, si se coloca en la oposición desde la apertura del nuevo parlamento, el gobierno de centro-izquierda podría no tener una mayoría o verse obligado a buscar desde el comienzo alianzas a su derecha pagando por ello probablemente un precio bastante elevado. Un nuevo recurso a elecciones no podría, por otra parte, contemplarse como una solución practicable. Así, el PRC corre el riesgo de aparecer como el enterrador de un gobierno que promete una renovación —por ilusoria que sea— y el responsable de una crisis de dinámica incontrolable. Corre el riesgo igualmente de comprometer sus posibilidades, reales, de crecimiento ulterior y de llevar en condiciones mucho más difíciles la batalla por la hegemonía en el movimiento obrero y popular de la que ha hablado en varias ocasiones su secretario.

8/ Esta corriente había llevado con ella un número importante de diputados y de miembros de la dirección del partido pero con efectos casi nulos en sus filas.

Si no fuera mas que una formación minoritaria, podría legítimamente optar por el terreno de la propaganda reafirmando su identidad y apostando por efectos positivos a medio y largo plazo. Ello no es posible para un partido que tiene ya una implantación muy amplia y, a pesar de sus debilidades y sus contradicciones, es reconocido como el representante de sus intereses y de sus exigencias por sectores radicalizados de la sociedad italiana. Debe tener la preocupación de acompañar la experiencia de las capas de trabajadores que tienen aún confianza en otros partidos, principalmente el PDS y dar prueba de su capacidad de arrancar o contribuir a arrancar conquistas parciales, por modestas que sean. Debe pues esforzarse, en cada etapa, por indicar soluciones posibles incluso a corto plazo, diferenciarse concretamente no dando la impresión de hacerlo a priori, en su interés particular. Le es preciso llevar a cabo luchas contando no solo con sus propias fuerzas, sino sobre todo con los lazos establecidos con movimientos de masas que no se pueden construir solo con propaganda. Es por ello que la actitud adoptada nos parece como la única posible en el momento actual.

Sin embargo, los peligros son muy serios, tanto más en la medida que se va a ejercer una presión enorme sobre el partido a todos los niveles. Ya hay una presión (que se acentuará) en un doble sentido: alternarán ofensivas de seducción con propuestas más o menos tentadoras de participación en el gobierno o en la gestión político-económica del sector público ⁹ y ataques virulentos para desacreditar y aislar Rifundazione con la esperanza de sembrar la confusión entre sus electores e incluso en sus propias filas.

La situación, repitémoslo, es indudablemente difícil. Es difícil evitar los reflejos de fortaleza asediada no dejándose caer por una pendiente resbaladiza. La preocupación de no asumir la responsabilidad de un fracaso inmediato del gobierno de centro-izquierda es perfectamente legítima y debe, con razón, inspirar las decisiones tácticas del PCR durante la primera fase de la nueva legislatura. Incluso a continuación, podrá darse un apoyo si se trata de permitir la adopción de medidas favorables a los trabajadores o de afirmar derechos democráticos. Pero no es posible ningún acuerdo desde el punto de vista estratégico con el Olivo y el gobierno Prodi, y el PRC no podrá avalar medidas gubernamentales que golpeen el nivel de vida de los trabajadores, leyes presupuestarias análogas a las de los gobiernos precedentes, privatizaciones de sectores económicos neurálgicos, compromisos de Italia en aventuras militares de la OTAN.

Ciertamente, es más fácil enunciar unos principios que adoptar en cada momento las decisiones pertinentes. Pero un esfuerzo importante por parte del partido entero por dotarse de tal capacidad es la condición para que subsista la perspectiva de la refundación comunista o, más exactamente, del relanzamiento necesario de esta refundación.

Traducción: A. Nadal

⁹ Por ejemplo, D'Alema, secretario del PDS, ha subrayado los orígenes comunes de su partido y el PRC y un colaborador del *Corriere della Sera* (1 Mayo) ha recordado al PRC la definición que Berlinguer había dado de su partido en los años 70: "partido de oposición y de gobierno". Un editorialista del mismo periódico ha hablado de táctica de "envolvimiento con dulzura", para con el PRC (3 mayo).



Brasil

Joao Machado

"Es necesario continuar construyendo el PT"

Entrevista de Sonia Leith

[Tras la victoria electoral de Fernando Henrique Cardoso se han producido cambios significativos en Brasil y en el PT. Hemos hablado de ellos con Joao Machado, dirigente de la corriente Democracia Socialista].

Sonia Leith: ¿Puedes describirnos la situación económica del Brasil desde la aplicación del plan Real (nota) y la llegada al poder del nuevo presidente Fernando Henrique Cardoso?

Joao Machado: Desde la entrada en vigor de la nueva moneda, el Real, en julio de 1994, Brasil ha conocido dos fases. Inicialmente a partir de julio y durante los primeros meses de 1995, la reforma que gozaba del apoyo de la población, permitió un crecimiento económico así como una cierta recuperación del poder de compra sobre todo para los salarios más bajos.

La gran apertura del país a las importaciones, estipulada por la reforma, arrastró una caída de las exportaciones. El plan Real contaba con financiar el déficit de la balanza comercial por medio de nuevos capitales extranjeros, como México, Argentina y otros países de América Latina. Sin embargo la crisis financiera mexicana limitó el flujo de esos capitales lo que llevó al gobierno a adoptar medidas para frenar el crecimiento. Así, la tasa de cambio fue modificada muy poco y la moneda nacional, el Real, ha permanecido sobrevalorizada. Esta opción condujo a la segunda fase: una recesión muy fuerte a partir del segundo trimestre de 1995 acompañada por una pérdida del poder de compra.

En el momento en que, justamente, la economía entraba en recesión, el gobierno anulaba toda garantía salarial, introduciendo así, de una forma cínica, la libre negociación. En un contexto de recesión, de pérdida de poder de compra y de crecimiento del paro, los trabajadores no tienen a penas los medios para enfrentarse a ello. Señalemos por otra parte, que la reforma, en su primera fase, animaba a pedir créditos, por lo que la población y las empresas que se endeudaron se encuentran hoy obligados a devolver sus deudas con tasas de interés muy elevadas. Consecuentemente, la quiebra acecha hoy a muchas de esas empresas.

Todos estos problemas sentidos por la población no ponen en cuestión su adhesión y su apoyo a la política del gobierno, presentando éste último la recesión como un mal necesario para acabar con la inflación.

S.L: algunos periódicos occidentales han presentado el final del conflicto de los trabajadores del sector del petróleo de junio de 1995 en Brasil como una derrota histórica del movimiento obrero comparable a la infligida por Thatcher a los mineros en Gran Bretaña en 1986. ¿Qué piensas tú de ello y cuál es hoy la situación del movimiento obrero y del movimiento social en general?

J.M: En los últimos meses de 1994, hubo muchas movilizaciones impulsadas por los sindicatos para reivindicar aumentos salariales y la recuperación del poder de compra. Estas movilizaciones tuvieron en general un éxito real, en la medida en que las empresas prefirieron, en un contexto de crecimiento económico, evitar las huelgas y satisfacer las reivindicaciones. A partir del segundo trimestre de 1995 la situación se invirtió radicalmente. Los éxitos de las movilizaciones de los asalariados urbanos se hicieron más difíciles y por ello el movimiento obrero se encontró en una situación muy defensiva. Una de sus ilustraciones más importantes fue, precisamente, la huelga de los trabajadores del sector del petróleo para exigir el respecto de un acuerdo firmado por el ex presidente a finales del año 1994. Esta huelga recibió una derrota importante pero no comparable a la de los mineros británicos. Esto se explica por dos razones: en primer lugar, esta derrota no fue completa en el sentido de que los trabajadores consiguieron arrancar algunas compensaciones incluso si no fueron concedidas en el momento de parar la huelga. Es por lo que no hubo desmoralización ni en el sindicato, ni en el sector. La segunda razón que es mucho más operativa, reside en el hecho de que el sector del petróleo en Brasil no tiene en absoluto la importancia del sector de las minas en Gran Bretaña. Los trabajadores del sector petrolero no constituyen la columna vertebral de la clase obrera en Brasil.

Sin embargo, esta huelga sin ser comparable a la derrota histórica de los trabajadores británicos, refleja bien la situación defensiva del movimiento obrero. El único movimiento popular que desde hace algunos meses toma la ofensiva es el de los campesinos sin tierra. Es forzoso constatar que el paro hace más difíciles las luchas urbanas de los asalariados y por el contrario más fácil la lucha por la ocupación de tierras. Para muchos trabajadores en paro, obligados a buscar alternativas fuera de las ciudades, la tierra sigue siendo lo más accesible.

Las victorias registradas por este movimiento, muy organizado, que moviliza a gente muy pobre y que disfruta del apoyo de toda la población, han tenido un efecto de arrastre.

Contrariamente a la afirmación según la cual la división de la tierra conlleva una caída de la producción agrícola, la producción de las grandes propiedades recuperadas por el movimiento de los campesinos sin tierra ha registrado un claro aumento debido a su precedente subexplotación por los antiguos propietarios.

S.L: ¿Cual es el papel jugado por el PT en este movimiento?

J.M.: La mayor parte de los animadores y de los dirigentes de este movimiento es militante del PT. Esto no quiere decir que el PT como partido esté en la dirección del movimiento. El PT no está ciertamente, detrás de las iniciativas tomadas por este último pero se moviliza de una forma efectiva para apoyar las ocupaciones de tierras. Los diputados del PT han jugado a menudo el papel de mediadores con los gobiernos federales intentando aumentar la presión sobre ellos.

S.L: ¿En qué situación se encuentra hoy el PT tras la derrota de Lula y la celebración de su 10ª Conferencia.

J.M: Hay que comprender la significación de la candidatura de Lula para todos los militantes del PT. Desde 1989, esta candidatura representaba un resumen de las estrategias de las diferentes corrientes del partido. Todo el mundo consideraba

que Lula tenía una oportunidad efectiva de ser elegido. Los más moderados pensaban que un gobierno de Lula llevaría a cabo cambios limitados pero reales en favor del pueblo. Otros, más a la izquierda, pensaban que una victoria de Lula abriría la puerta a un proceso de movilización y de luchas populares en oposición a la burguesía y a las clases poseedoras en general. Así, aún teniendo perspectivas diferentes, todo el mundo contaba con la victoria de Lula como un dato central en el proceso de transformación social en Brasil.

Hoy se impone la revisión de estos planteamientos. Esto no quiere decir que la elección de Lula se haya convertido en algo imposible, pero las últimas elecciones de 1994 han mostrado muy concretamente los recursos de los que dispone la burguesía, su capacidad de conquistar el apoyo de amplias capas medias y de apoyarse muy inteligentemente en los recursos del aparato del estado.

Está claro que una victoria de Lula (o de otro candidato del PT) no será fácil, exigirá una movilización popular y social muy amplia, superando incluso lo que se había conocido en 1989. Por consiguiente, hay que pensar hoy en nuestras tareas sin contar demasiado con una eventual victoria de Lula. Todo esto significa que de una cierta forma existe hoy un vacío estratégico en el seno del PT y que hay que rediscutir las perspectivas. Desgraciadamente, la discusión en la 10ª Conferencia Nacional celebrada en 1995, no trató sobre las cuestiones estratégicas.

Se discutió sobre el carácter del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, de la táctica del partido en la nueva coyuntura de las cuestiones de organización del partido. En la discusión sobre el carácter del gobierno y la táctica no ha habido grandes sorpresas, la posición que ha salido considera que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso es un gobierno claramente neoliberal. Subrayemos que algunos sectores del PT han creído que Cardoso, apoyado por su partido, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), iba a emprender una política social. El balance de un año de poder ha desmentido completamente este análisis.

Esto ha hecho más fácil un acuerdo general sobre esta cuestión clave y ha facilitado la definición de la posición del partido, a saber una oposición muy firme e intransigente hacia el gobierno y sus propuestas de reforma.

Por el contrario, la discusión sobre el carácter del partido y las medidas a adoptar para reforzar su organización y su peso social y electoral ha suscitado muchas polémicas. El debate subyacente sobre esta serie de cuestiones era en efecto de orden estratégico. La mayoría se ha puesto de acuerdo en la necesidad de mantener una oposición muy firme hacia el gobierno, intentar proponer una alternativa estratégica sobre todas las cuestiones clave y continuar a pensar al partido sobretodo como un instrumento electoral e institucional. Es cierto que el compromiso del PT en el movimiento social no suscita ninguna oposición interna, pero para un amplio sector del partido la tarea principal sigue siendo la preparación de las próximas elecciones.

El último congreso ha conocido un cambio de mayoría como consecuencia de una alianza de una parte de la antigua mayoría de izquierda con la corriente de centro derecha. Así, existe un nuevo bloque mayoritario en la dirección. En cuanto a la nueva minoría, está compuesta por las corrientes que han tenido una posición más a la izquierda en el último congreso, sobre todo a lo largo de los debates sobre las prioridades de construcción del partido.

S.L.: ¿Dónde se sitúa la Confederación Unitaria de los Trabajadores (CUT) en todos estos debates?

J.M.: La CUT es una central sindical cuya dirección en un 90% está compuesta de militantes del PT, el resto está constituida de militantes próximos al Partido Comunista del Brasil (PC do B, ex-albanés) y del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU, corriente *morenista* que abandonó el PT en 1982). La CUT sufre plenamente la situación defensiva en la que se encuentra el movimiento de los asalariados urbanos. Ello favorece la adopción de algunas iniciativas no muy afortunadas. Dos ejemplos típicos ilustran lo que acabo de decir. El primero: partiendo de la legítima preocupación de querer presentarse como una central sindical constructiva que no se contenta sólo con rechazar las propuestas del Estado, la dirección de la CUT ha ido muy lejos al aceptar presentar un proyecto común con la Federación de Patronos del Estado de Sao Paulo (FIST) sobre la reforma de las pensiones. Esta posición, concebida sobretodo como una operación de cara a la prensa, no ha suscitado interés en la base de la CUT sino que, al contrario, ha creado una cierta confusión en su seno.

El otro ejemplo se refiere a la discusión sobre la reforma de la Seguridad Social. El gobierno tomó la iniciativa de presentar una propuesta de reforma que, sin eliminar la seguridad social como en Chile, planteaba la disminución de los gastos públicos y el endurecimiento de las exigencias para la jubilación, etc. La propuesta inicial del gobierno había sido muy mal vista por la sociedad, por la prensa e incluso por la mayoría de los diputados favorables al gobierno. Es por lo que este último dio marcha atrás intentando negociar. La CUT aceptó participar en una discusión con otras centrales sindicales de derechas que no tienen ninguna implantación social significativa. En el curso de la negociación, la CUT insistía, en un primer momento, en las tesis planteadas por el movimiento sindical y los diputados de izquierda. Pero, teniendo en cuenta la marcha atrás del gobierno, el presidente de la CUT ha creído oportuno defender la idea de un acuerdo que permitiera, una vez más, consagrar la imagen *constructiva* de la CUT. En el curso de las negociaciones, el presidente de la CUT, Vicentinho, apoyado por la mayoría de la dirección, ha tenido muchas ilusiones sobre la posibilidad de encontrar un acuerdo aceptable conciliando los intereses populares y las propuestas gubernamentales. Además ha demostrado una tendencia muy peligrosa a sacrificar los intereses del conjunto de los trabajadores y sobre todo los del sector *informal* en beneficio del sector *formal* que constituye la base de la CUT y del PT. Es el sentido de la aceptación de no cifrar la retirada a partir del tiempo de trabajo, sino a partir del tiempo de contribución a la Seguridad Social. Sobre esta cuestión, hay que decir que la mayoría de la dirección del PT, incluso casi todos sus diputados, ha tenido una posición correcta.

A pesar de estas iniciativas desafortunadas, la CUT sigue siendo un sindicato combativo que continúa defendiendo los intereses esenciales de la clase.

S.L.: ¿Cuáles son las repercusiones de esta situación sobre la corriente Democracia Socialista (sección brasileña de la Cuarta Internacional)?

J.M.: Democracia Socialista es una corriente, que, desde el comienzo de la formación del PT, ha considerado que la consolidación de un partido de los

trabajadores en una perspectiva de independencia de clase y de construcción de un partido revolucionario es la tarea central de los marxistas y de los revolucionarios en Brasil. Entre 1993 y 1995, cuando la izquierda era mayoritaria en la dirección del PT, nuestra corriente formaba parte de ella. Hoy y desde el último congreso, Democracia socialista forma parte de un bloque de varias corrientes de izquierda que se presenta como alternativa a la actual dirección.

El refuerzo del carácter institucional y electoral del PT ha empujado a nuestra corriente a rediscutir sobre la validez de nuestra forma precedente de actuar en cuanto a la naturaleza de este partido y su papel clave en la perspectiva de construcción de un partido revolucionario. En nuestra conferencia de fines de 1995, hemos llegado de una forma bastante consensuada a revigorizar el planteamiento que habíamos tenido respecto al PT hasta ahora. Es cierto que el camino hacia un partido revolucionario parece hoy más largo y que hay también presiones en el sentido de una adaptación a la lógica electoral e institucional en el seno del PT; sin embargo este partido sigue siendo el marco que representa los intereses esenciales de la clase obrera y de las capas populares en Brasil.

El PT en numerosas ocasiones ha apoyado movimientos y movilizaciones sin ser su iniciador. Ello no le ha impedido organizar algunas campañas importantes a nivel nacional. El último congreso del PT decidió organizar una campaña contra el paro y una campaña por la recuperación de los salarios (sobre todo el salario mínimo garantizado que es ahora de 100 dólares). El congreso definió también como prioridad el apoyo al movimiento de los trabajadores sin tierra. Es cierto que hasta ahora no se ha dotado de los medios para llevar a cabo estas campañas. Eso se explica entre otras cosas por la situación general del movimiento obrero y de la CUT.

Seguramente, el PT no constituye el mejor instrumento que los trabajadores brasileños podrían tener, pero en cambio es imposible hoy dotarse de un instrumento más útil que él. La experiencia de la corriente *morenista* que abandonó el PT en 1992 confirma la existencia de un cierto espacio en el sentido en que esta corriente se mantiene todavía, incluso si está debilitada. El espacio para la construcción de un partido revolucionario en el exterior del PT existe pero es mucho más estrecho que el ofrecido en su seno. Hay sectores de vanguardia de los trabajadores que están decepcionados por el carácter institucional del PT pero la mayoría de la vanguardia obrera y popular en Brasil continúa identificándose con él. Tanto los dirigentes del movimiento de los trabajadores sin tierra como los de la huelga del sector del petróleo son militantes del PT.

Nuestra corriente piensa que es necesario continuar construyendo el PT, a la vez que intenta llevar a cabo debates estratégicos y expresar posiciones propias de nuestra corriente. Hay que reforzar la izquierda intentando mantener su unidad en la perspectiva de desarrollar el lado militante activo y la posición del PT como oposición firme y una alternativa estratégica al gobierno. La nueva mayoría del PT está bastante firmemente opuesta al gobierno, sin embargo, es bastante heterogénea: Democracia Radical, su corriente más moderada, había intentando antes colaborar con el gobierno arguyendo que el partido de Fernando Henrique Cardoso es un aliado estratégico del PT para la formación de un bloque de centro izquierda; Democracia Radical ha decidido en el último congreso callarse sobre este asunto.

S.L.: ¿Cuáles son las propuestas concretas planteadas por nuestra corriente para enfrentarse a la deriva institucional del PT?

J.M.: Hay, como acabo de decir, que reforzar la dimensión militante del partido y no somos los únicos en pensarlo, esta preocupación es compartida por otros sectores de la mayoría. No creemos que la solución resida en una reducción de la participación electoral del PT, ya que eso no tiene ningún sentido en Brasil.

Pienso que, en las próximas elecciones municipales de 1996, el PT será capaz de adoptar una plataforma combativa y clara, sin embargo el único problema que puede plantearse será la cuestión de las alianzas. En efecto, ciertos sectores de la mayoría del PT intentan concluir alianzas no sólo con la izquierda y el Partido Democrático Laborista de Lionel Brizola (PDT, centro izquierda populista), sino también con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, partido salido del MDB que representaba la oposición legal durante la dictadura militar) y algunos sectores del PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Nosotros creemos que el PT tiene interés en hacer alianzas con las izquierda y probablemente en algunos casos con el PDT de Brizola.

No se trata para nosotros hoy de reducir nuestra participación electoral sino de reforzar la organización y la combatividad de nuestro partido.

Ello es posible, como lo prueba la experiencia del partido en el Estado de Rio Grande do Sul. Es uno de los Estados en los que el PT ha obtenido los mejores resultados en las últimas elecciones y donde Lula ha ganado a Fernando Henrique Cardoso. Es también el estado en el que el PT está mejor organizado y es más combativo, donde la izquierda tiene la mayoría y donde nuestra corriente ha tenido siempre fuerza considerable. Es en fin el Estado en el que el movimiento de los campesinos sin tierra es más fuerte. Rio Grande do Sul muestra que no hay ninguna contradicción entre la participación electoral y el esfuerzo por construir un partido más activo, más militante y más organizado.

Traducción: Alberto Nadal

China

Estrangular al dragón: la presa de las tres gargantas del Yangtze

Audrey R. Topping

Según los planes previstos, la República Popular China (RPCh) habrá completado en el año 2009 la presa hidráulica más grande, más cara y quizá más peligrosa del mundo. La superpresa se construye en el centro de China, en el río Yangtze, en el cañón que forma las tres gargantas de Xiling, Wu y Qutang. Gracias a la presa, afirma el Gobierno chino, toda la cuenca del río dispondrá de electricidad barata, se controlarán sus crecidas, se incrementará la producción, se reducirá la contaminación y la emisión de gases que ponen en peligro la capa de ozono.

A pesar de las críticas y los aplazamientos de los últimos años, y de que los planes estaban aún incompletos, el primer ministro Li Peng anunció en diciembre de 1994 el comienzo de las obras. En principio, los beneficios parecen indiscutibles. Pero, ¿valen la pena los costes y los riesgos que implica la presa?

Las dimensiones técnicas y sociales del proyecto son gigantescas. Se creará un embalse de más de 385 millas en el Yangtze, que obligará a desplazar a un millón y medio de personas y sumergirá tierras agrícolas, templos, tesoros arqueológicos, bosques y vida animal, cambiando para siempre la fisonomía del centro de China. La presa ha atraído la atención mundial por los peligros ecológicos que plantea, el desafío técnico que supone y las consecuencias humanas que acarrea, así como el derecho de otras naciones industrializadas de intervenir en los asuntos internos de China. En China, el proyecto ha desatado un feroz debate sobre su factibilidad, conjurando terribles recuerdos de rupturas de presas en el pasado, y en especial la de 62 presas en una misma noche en 1975 en la provincia de Henan. Aquella tragedia se atribuyó a la acción de tres tifones de excepcional fuerza, de los que teóricamente sólo ocurre uno cada 2.000 años, en un mismo mes. Las presas –incluyendo dos de las mayores “presas de hierro” del río Huaihe– sólo aguantaron el diluvio dos días. Cuando cedieron, el *dragón del río* escapó con tal fuerza demoníaca que las olas arrasaron ciudades enteras. Cerca de 230.000 personas murieron, dos millones quedaron atrapadas durante semanas y otros 11 millones fueron víctimas de enfermedades o hambre como consecuencia del desastre, que nunca ha sido reconocido por el Gobierno chino.

Las protestas

El proyecto ha provocado una tormenta política en China. La oposición a la presa ha alcanzado tal nivel que muchos ciudadanos se han visto obligados a desafiar el *mandato del cielo* del régimen por primera vez desde la creación de la RPCh en 1949. Científicos, escritores, funcionarios, refugiados de otros desastres, se han unido en la firma de peticiones que pueden provocar su detención. Cualquiera que sea el destino de la presa, esta oposición pasará a la historia de China como un acto de coraje de importantes sectores de la intelectualidad.

En mayo de 1992, la policía arrestó a 179 miembros del Partido de la Juventud Democrática, en el condado de Kai, acusándoles de actividades contrarrevolu-

lucionarias para sabotear el proyecto de la presa, sin que se conozca cuál ha sido su suerte. Los opositores a la presa creen que si los hidrólogos hubieran podido tener información y debatido el proyecto de las “presas de hierro” que cedieron en 1975, quizá se hubiera podido prevenir el desastre. En el caso de la presa del Yangtze, es imprescindible este debate teniendo en cuenta que la magnitud de los daños que podrían provocar los 36.000 millones de metros cúbicos de agua que se pretenden embalsar, y que supondrían una inundación 40 veces mayor que la provocada por la ruptura de las 62 presas en 1975. Un torrente de 400.000 metros cúbicos por segundo anegaría docenas de ciudades, entre ellas Shashi, Yichang, Wuhan y Changsha, poniendo en peligro a más de 10 millones de personas.

Aunque el primer ministro Li Peng, ingeniero hidroeléctrico de formación, ha reconocido que “China no tiene la tecnología para construir los 26 juegos de turbinas de 700 megawattios que estarán en el centro de la presa”, muchos científicos chinos han sido perseguidos por decir exactamente lo mismo. Li y la facción pro-presa encabezados por el Ministro de Electricidad y Recursos Hidráulicos Qian Zhegting, se niegan a cualquier debate público y han convertido la construcción de la presa en un símbolo de poder y prestigio de la RPCCh. Se trata de un nuevo caso del dogmatismo maoísta que provocó los increíbles desastres del Gran Salto Adelante, la Revolución Cultural y las grandes inundaciones.

Qian ocupaba el mismo cargo en 1975, cuando la ruptura de las “presas de hierro”. En los años 50 denunció y purgó al principal hidrólogo chino, Chen Xing, que advirtió sobre los defectos de las presas y sus consecuencias para el pueblo. Tras los desastres, en una de las autocríticas rituales de la época, Qian asumió todas las responsabilidades, exonerando de paso a los altos dirigentes del país. Continuó en su puesto, y ahora, con 70 años es el principal impulsor de la presa de Yangtze. En 1992, Qian y Li prohibieron la publicación de un estudio crítico de la presa de ocho reconocidos especialistas, todos ellos miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Es como si la historia se estuviera repitiendo de nuevo.

Flotando en un río de mitos

Aunque la controversia está salpicando tanta agua como los rápidos que atraviesan las gargantas, las agencias de turismo de todo el mundo se aprovechan de la situación ofreciendo “la última oportunidad de bajar por el Yangtze”. Yo mismo participé en una de ellas, en agosto de 1994. El río tiene una especial connotación sentimental para mí: dos generaciones de mi familia han vivido en China. Mis abuelos, misioneros, se enamoraron en un junco en el Yangtze y se casaron en Wuhan en día de Navidad de 1981. De niño me fascinaba ver sus viejas fotografías sepia, a bordo de un junco que me arrastraban los culíes chinos con cuerdas desde la orilla, para remontar los rápidos.

Ningún otro río ha afectado la vida de tanta gente. Más de 380 millones de personas, un tercio de la población de China, vive actualmente en sus orillas, y produce la mitad de las cosechas del país. Sus espectaculares gargantas y sus misteriosas rocas, que permiten imaginar un panteón de dioses y animales míticos, ha sido la fuente de inspiración de leyendas, poemas y canciones durante miles de

años. El río simboliza el mito del Viejo Cathay —el dragón de garras de cinco uñas— que era el emblema de los emperadores. Lung Wang —el dragón de garras de cuatro uñas y jefe de los dioses acuáticos— habita en un castillo bajo la Roca de la Cola de la Oca, en la Garganta del Viento.

Empezamos nuestra boga cerca de la presa de Gezouba, construída en un primer intento por guardias rojos durante la Revolución Cultural y demolida más tarde por fallos estructurales. Nuestro barco entró en el dique de elevación, que tras ser llenado de agua, nos levantó 32 metros en 20 minutos, para situarnos al nivel de los rápidos de las Tres Gargantas. La bruma de la mañana se fue disolviendo lentamente, descubriendo un paisaje de terrazas verdes y, más tarde, los acantilados de caliza de la Garganta del Gato Amarillo, que junto a la Garganta de la Lámpara, forman la Garganta de Xiling, de más de 20 kilómetros. Navegamos río abajo, entre pequeños templos y aldeas, mientras las rocas crecen hasta el Pilar del Cielo, una montaña de más de 1.000 metros al borde del agua.

El paisaje se iba extendiendo como un rollo de pintura china. En cada recodo surgían nuevas rocas imposibles, erguidas como un trazo de pincel, que permiten imaginar castillos, órganos y animales. Los rápidos del Nuevo Dragón se formaron en una sola noche en 1896 como consecuencia de un gigantesco corrimiento de tierras que redujo el cauce del río de casi 400 metros a unos 150. El viaje ya no implica los peligros de antes, pero la Puerta del Diablo y los Rápidos del Ataúd aún nos recuerdan lo que suponía bajar por el Yangtze.

Mi padre nació en Xiangfan, igual que 1.700 años antes el General Meng Liang, Primer Ministro de Hubei en la época de los Tres Reinos (221 a 265 d.c.). Liang fue el héroe de su infancia, el autor del libro más completo de estrategia militar, que enterró, junto con su espada, en algún lugar de la Garganta de Xiling para evitar que cayera en manos de un señor de la guerra innoble, que pudiera gracias a él conquistar China.

Estas son dos de las miles de reliquias que los arqueólogos pretenden salvar antes de que sean cubiertas por las aguas para siempre, en un esfuerzo que sólo es comparable al que tuvo lugar en Egipto por la construcción de la presa de Assuan. El coste de las excavaciones es de 180 millones de dólares y se ha solicitado la ayuda de las Naciones Unidas y de donantes extranjeros.

Un riesgo incalculable

Los críticos de la superpresa temen que el ecosistema de la cuenca del Yangtze sea alterado para siempre. Ecologistas americanos y europeos se han sumado a sus colegas chinos en defensa del caimán chino, la marsopa sin aletas, la grulla blanca, el delfín de río y el esturión del Yangtze (un enorme pez que es un fósil viviente de la época de los dinosaurios).

Los sismólogos que han podido estudiar el proyecto también están preocupados por las consecuencias que puede tener en animales y personas. Dicen que el embalse estará justo encima de una falla activa y que el peso del agua puede provocar un terremoto que podría destruir la presa. La fluctuación del nivel de agua en las orillas puede también provocar corrimientos de tierras y olas. El año pasado, la agencia de noticias Xinhua ya advirtió que fuertes lluvias o movimientos de tierras podrían provocar la caída al río de la Roca Huangle, de más de 35 millones de metros

cúbicos, situada a sólo 40 millas río arriba del lugar de la presa, lo que "provocaría olas de más de 100 metros en todo el río".

Los hidrólogos, por su parte, están preocupados por el alto nivel de sedimentación del Yangtze. La presa podría provocar la decantación de los sedimentos, que ahora flotan en el agua, alrededor del puerto que se quiere construir en uno de los extremos de la presa, obstruyendo desagües y tuberías que podrían afectar a la ciudad de Chongging, río arriba, mientras que se cortaría el flujo de materiales imprescindibles para los estuarios sobre los que se levanta Shangai.

Unos costes humanos incalculables

Según los cálculos del Gobierno chino, la presa anegará 13 ciudades, cientos de aldeas, 995 empresas locales y 115.000 acres de ricas tierras de cultivo. Este año comenzará el reasentamiento de los primeros 50.000 residentes afectados, de un total de 1,5 millones de personas, para los que el gobierno ha prometido 4.800 millones de dólares de ayuda y otros 3.200 millones en compensación por la pérdida de tierras y propiedades. Las autoridades hace tiempo que se preparan contra los inevitables conflictos sociales que surgirán. Según un informe de la prefectura de Wanxian, publicado recientemente por Human Rights Watch/Asia, el plan de reasentamiento "crea odio contra el Gobierno y resistencia a los realojos.. La criminalidad ha crecido como consecuencia de la llegada de un gran número de trabajadores para la presa, así como turistas. Organizaciones mafiosas han corrompido a los administradores de las obras, y se han producido manifestaciones, secuestros, asaltos y otros actos criminales." El informe solicita la creación de un mando único de seguridad para la zona, mayor dotación de policía y equipos antidisturbios y el apoyo de unidades de élite, dependientes del Comité Central de Pekín.

Entre las gargantas de las Brujas y la Caja de los Vientos se encuentra el condado de Kai, Sichuan, con sus frutales y campos de arroz al borde del río. El bienestar de miles de campesinos relativamente prósperos será sacrificado a la presa, sin contar previamente con su opinión. Atracamos en Wanxien, una ciudad centenaria de 300.000 habitantes, condenada a desaparecer, a pesar de sus tradicionales moreras e industrias de la seda y su urbanismo tradicional, de acuerdo con las fuerzas del viento y la tierra (feng shui), que debía librarla de los malos espíritus.

Los trabajadores de Wanxian exigen como compensación 12 millones de dólares por sus moreras, pero tienen muy pocas posibilidades de obtenerlos. La aldea de Shibaozhai también desaparecerá bajo las aguas y sólo quedará como una estela funeraria su famosa pagoda, de más de 2.000 años, en la Montaña de Jade.

Luchando y perdiendo

Los críticos extranjeros de la presa han denunciado también la violación masiva de los derechos humanos de los miles de trabajadores emigrados que trabajan en el proyecto. Mucho antes de que se inauguraran oficialmente las obras, 20.000 trabajadores construían ya sus compuertas y pontones, construían carreteras y removían 19,7 millones de metros cúbicos de tierra y rocas. Pudimos verlos, como una legión de hormigas, en Sandouping y la isla de Zhongbao. Según *Human Rights*

Watch/Asia, las provincias de Sichuan y Hubei tienen un enorme número de prisiones políticas y de conciencia en los campos de trabajo (laogai), reclutados como mano de obra forzosa para el proyecto de la presa de las Tres Gargantas.

Quienes se han opuesto desde la administración o las universidades al proyecto han sido denunciados inmediatamente como contrarrevolucionarios. En 1956, el secretario personal de Mao, Li Rui, a su vez vice-ministro de recursos hidráulicos fue purgado por este motivo durante el Gran Salto Adelante. Dos generaciones de científicos y funcionarios han sido humillados por su oposición. Más recientemente, en 1989, el periodista Dai Qing publicó una colección de artículos de científicos contra la presa. Después de los sucesos de Tien An Men, 30.000 copias del libro *¡Yangtze!, ¡Yangtze!* fueron destruidas, Dai encarcelado durante diez meses, el científico Qian Jiaju forzado al exilio y el resto de los autores acusados de "liberalismo burgés".

El debate sobre el tema de la presa se ha convertido más que en una discusión científica, en un pulso político en el que está en juego el poder de sectores importantes de la nomenclatura de la PCCh. En una entrevista con Dai, Huan Shunxing, un miembro del Congreso Nacional Popular, contó su intento de participar en el debate en 1992: "Levanté la mano para hablar, pero fui ignorado por la mesa. Me levanté y entonces escuché a un periodista de Taiwan que gritaba ¡no hay sonido! Después supe que el sistema de sonido había sido desconectado en toda la sala, a excepción del micrófono de la mesa. ¿Cómo podían atreverse a semejante acto para impedir a un delegado del CNP ejercer sus derechos?".

Cuando Li Peng presentó el proyecto de la presa del Yangtze al VII CNP para su aprobación, casi una tercera parte de sus miembros rompió el tradicional protocolo de la unanimidad para votar en contra o abstenerse.

El coste aproximado del proyecto se estima entre 17.300 y 30.000 millones de dólares, de los que unos 8.000 están previstos que sean financiación extranjera. El Banco Mundial, después de un estudio de factibilidad de 9 millones de dólares de la Agencia Canadiense de Desarrollo, se ha negado a contribuir con fondos, también se han retirado Marris Lynch y otros inversores potenciales.

La Administración Busch expresó en principio su apoyo a la presa. En 1992, firmó un acuerdo con el Ministerio de Recursos Hidráulicos de China para proporcionar asistencia técnica. Siete organizaciones ecologistas amenazaron a la Administración con llevarla a los tribunales por violación del Acta de Especies Protegidas, lo que le obligó a denunciar el acuerdo. La Administración Clinton ha intentado, sin embargo, revisar esta decisión. Lo mismo ha hecho el Gobierno canadiense de Jean Chrétien, a la caza de una parte de los contratos.

Lo pequeño es hermoso

Los partidarios de la presa afirman que la economía emergente de China y su población tienen derecho a la prosperidad. Hoy, 180 millones de chinos no tienen aún electricidad. En la cuenca del Yangtze, la energía disponible per capita representa sólo el 1% de la consumida en EE UU. El argumento que al parecer convenció a Deng Xiaoping a apoyar la presa es que elevará el nivel del agua unos 500 pies, mejorando la navegabilidad del río y permitiendo que cargueros de 10.000 Tm puedan llegar hasta Chongging. Ello multiplicará la capacidad de transporte fluvial por cinco y reducirá los costes en un 35%. Además generará el 10% de la energía total

de China, unos 18.200 megawatios, equivalente a diez centrales nucleares.

Los críticos no niegan que China necesita más energía y controlar las inundaciones, pero no quieren poner todos los huevos en la misma canasta. En vez de construir una sola presa gigantesca, su opción es la construcción de pequeñas presas hidráulicas en los afluentes del Yangtze, en los ríos Dadu, Jinsha y Wujian y en el propio Yangtze antes de Chongging, de manera progresiva a las necesidades, con los mismos resultados, pero sin el coste financiero y humano de la superpresa. Ello sin contar que la decantación de sedimentos y la necesidad de mantener un nivel del embalse controlable en verano interferirá con la navegación. Si algún día navegan por el Yangtze cargueros de 10.000 Tm habrá que demoler todos los puentes de Najing y Wuhan para permitir su paso.

Después de años de indecisión, el proyecto de la presa del Yangtze parece ganar actualidad. Sun Yat-Sen propuso la construcción de la presa en 1919, cuando no existía conciencia de las consecuencias medio ambientales de este tipo de obras. Mao resucitó el proyecto, que ahora defiende Li Peng, a pesar de los informes críticos de los científicos chinos y extranjeros. *Human Rights Watch/Asia* advierte que sin debate público "la presa se convertirá, como la Gran Muralla, en el símbolo supremo del poder y el autoritarismo de un Estado represivo".

La Gran Muralla fue construida con trabajo esclavo, incluyendo los mandarines confucianos que se opusieron a la quema de los libros clásicos del Emperador. Miles perecieron en las obras. Sus huesos fueron triturados y utilizados como mortero convirtiendo a la muralla en el "cementerio más largo del mundo". Pero a diferencia de la superpresa del Yangtze, la Gran Muralla no puede romperse y provocar nuevas catástrofes.

Traducción G. Buster

Israel

¿Por qué ha vencido Netanyahu?: Dos puntos de vista

Michel Warshawski/ C. Rossi y J. Clélia

[Los resultados de las elecciones en Israel han conmocionado los frágiles equilibrios establecidos en Oriente Próximo. El análisis de las razones de la victoria de Netanyahu abre numerosas polémicas. En las páginas de Rouge se ha desarrollado un debate de gran interés a partir del artículo de nuestro colaborador Michel Warshawski. Lo publicamos a continuación, seguido por un texto de C. Rossi y J. Clélia que polemizan con él].

La comunidad internacional está sorprendida por el resultado de las elecciones en Israel y asustada por lo que parece ser un rechazo del proceso de paz por la mayoría de la opinión pública israelí. Pero ¿reflejan estas elecciones verdaderamente un rechazo de la paz y los compromisos con los árabes?, ¿dónde está la verdadera sorpresa de estas elecciones? Hay que plantearse estas preguntas si queremos comprender lo que va a hacer el gobierno israelí y cuáles serán las consecuencias para el nuevo orden en Oriente Próximo.

Objetivamente, el gobierno laborista saliente ha servido lealmente y con éxito al Estado de Israel: ha entrado en un proceso de normalización con el mundo árabe en su conjunto, ha firmado un tratado de paz con Jordania, ha iniciado relaciones económicas y casi diplomáticas con otra media de docena de Estados árabes, ha retirado al Ejército israelí del atolladero de Gaza y de casi todas las ciudades palestinas turbulentas, ha obtenido el reconocimiento de la OLP y el fin de la lucha nacional palestina, ha restaurado la imagen de Israel como Estado *pacífico* y *civilizado*, ha atraído a inversores extranjeros, ha reducido el paro a menos del 5% y ha logrado un crecimiento anual del 6,2%.

Muy pocos gobiernos del mundo pueden presentar un balance tan positivo y, sin embargo, los electores israelíes han elegido a Benjamín Betanyahou contra Simon Pérès, personaje internacionalmente respetado. Ahora bien, ¿refleja esta elección un rechazo unilateral del proceso de paz, como piensan muchos observadores? Un análisis detallado de los resultados muestra fácilmente que no es éste el caso.

Una sociedad cuarteada

Estas elecciones son las primeras en las que los electores han participado en dos escrutinios, eligiendo simultáneamente el primer ministro y el Parlamento. El objetivo general de la nueva ley electoral era reducir la influencia de los partidos, el Parlamento era elegido por sistema proporcional, y aliviar al primer ministro del chantaje de los pequeños partidos. En realidad, ha ocurrido lo contrario y mientras la elección del primer ministro muestra que la sociedad israelí está dividida por la mitad, la nueva Knesset (Parlamento) está compuesta de 11 partidos.

La composición de la Knesset da una imagen interesante del cuarteamiento de la sociedad israelí y explica por qué, pese a sus grandes éxitos políticos y

económicos, Pérès no ha obtenido el apoyo de la mayoría de la población.

Nos limitaremos a señalar tres puntos. En primer lugar, los dos principales partidos pierden aproximadamente un 25% de sus escaños (los laboristas pasan de 44 a 34; el Likud de 41 a 32), lo que refleja la voluntad de la población de expresarse fuera del marco de los dos principales programas políticos.

Segundo, si añadimos a esos dos partidos principales la extrema derecha (Modelet, dos escaños), la izquierda (Meretz, 9 escaños) y el partido centrista Tercera Vía (4 escaños), llegamos a 81 escaños sobre un total de 120; las características del tercio restante son el rasgo más significativo de estas elecciones.

Éstos son votos que han ido a partidos *sectoriales*: 7 a las listas de inmigrantes rusos, 10 a la lista Oriental Shass (tan religiosa como oriental), 13 a otros partidos religiosos y 9 a dos listas árabes. Si añadimos que un tercio de los electores de Likud sólo lo han apoyado porque lo perciben como la oposición a la élite laborista occidentalizada, podemos medir el fracaso del sueño de los pioneros sionistas de construir un *Nuevo Israel* a partir de la variedad de comunidades y de culturas de la diáspora.

La sociedad israelí no es homogénea, ni siquiera lo es su componente judía: es un mosaico de comunidades culturales y de grupo étnicos.

Además, estas elecciones confirman que la sociedad judeo-israelí no está solamente cuarteada en subgrupos variados, sino que está profundamente dividida entre dos culturas: una occidentalizada y, habitualmente, satisfecha; otra que vive con el profundo sentimiento de estar oprimida por la primera y amenazada en su

Del lado árabe

Hace sólo tres meses se anunciaba una tasa de participación de la población árabe sin precedentes, superior al 80% tradicional de los judíos israelíes, y su movilización en favor de Pérès. Estas elecciones debían culminar un largo proceso de *israelización* de los palestinos del interior y el final de sus aspiraciones nacionales como parte integrante del pueblo palestino.

Los resultados electorales ponen en cuestión este análisis pesimista. La participación ha sido masiva, pero inferior a los pronósticos. Éste es el resultado directo de los bombardeos del Líbano, que explican también los 10.000 votos en blanco. Si el conjunto de los partidos árabes (exceptuado Abna el Balad, componente del bloque FDPE-AND) ha llamado a votar por el *mal menor*, es decir, por Pérès, y si es cierto que la población palestina se ha movilizado en las tres últimas horas de la votación, no es menos cierto que esta guerra ha desmotivado a una parte no despreciable del electorado.

Cerca del 80% del electorado árabe ha apoyado a Pérès. Así podemos comprender la enormidad de la mala fe racista de los dirigentes laboristas que han acusado a los árabes de ser los responsables de la derrota de Pérès.

Más importantes y más significativos son los resultados de las listas árabes para la Knesset. El 60% de los votos han ido a las dos listas nacionales, el bloque Frente Democrático por la Paz y la Igualdad (PC)- Alianza Nacional

cultura, su identidad, sus tradiciones. Éste es el estado de ánimo mayoritario en las comunidades orientales (los judíos de cultura árabe) y en las comunidades religiosas.

Élite occidental

La derrota de Simon Pérès no se debe a su programa político, sino al rechazo e incluso el odio que estas comunidades tienen hacia la élite *occidental*. Ciertamente, éste no es fenómeno nuevo; fue la raíz de la pérdida del poder por los laboristas entre 1977 y 1992. La excepción fue la victoria de los laboristas y del Meretz en 1992, debida a circunstancias extraordinarias, entre las cuales la popularidad personal de Isaac Rabin.

En otras palabras, el voto a Netanyahu ha sido un voto contra Simon Pérès, contra los laboristas, y no necesariamente un voto por una política alternativa en las relaciones árabe-israelíes. No es casualidad que la campaña de Netanyahu se haya centrado en su apoyo al proceso de paz y su compromiso en respetar los acuerdos firmados por el gobierno laborista. No lo ha hecho solamente porque sabía que no tenía otras opciones; lo ha hecho también porque sentía que la paz es popular, incluso entre sus electores.

Precisamente por estas razones, Benjamín Netanyahu no tendrá ninguna dificultad para formar un nuevo gobierno con una amplia mayoría en la Knesset. Los partidos religiosos piensan que no será un obstáculo a sus aspiraciones a más

Democrática (AND), y la Lista Árabe Unificada (LAU, Partido Democrático Árabe-Movimiento Islamista); el resto se ha dividido entre los diversos partidos judíos, en particular el Partido Laborista, que presentaba tres candidatos árabes en puestos elegibles. El bloque dirigido por el PC ha obtenido más de 120.000 votos y 5 diputados, la LAU más de 60.000 votos y 4 diputados, dos de ellos islamistas. La entrada en liza de la Alianza Democrática ha conmocionado el panorama. Una campaña adormilada se ha convertido en una campaña política y movilizadora. Hemos podido ver mítines de miles de personas, debates ricos y apasionados. Los militantes de la AND ofrecieron al público palestino un nuevo lenguaje: ya no un lenguaje defensivo y apologético, sino una exigencia de reconocimiento, de igualdad, de reivindicación de la identidad árabe y palestina. Su programa radical no escondía ni los derechos de las mujeres ni la puesta en cuestión de las estructuras racistas y discriminatorias del Estado judío. La AND ha duplicado los resultados que obtuvo anteriormente la lista dirigida por el PC; esto nadie, o casi nadie, lo niega.

Hoy la cuestión es saber cómo capitalizar este éxito, tanto desde el punto de vista de la población palestina, como desde el punto de vista del AND. Los próximos meses serán cruciales para la formación de una nueva dirección nacional, democrática y progresista. Aunque los problemas son numerosos, el entusiasmo creado en el curso de esta campaña y después nos permiten ser razonablemente optimistas.

judaísmo y menos americanismo. Los partidos centristas lo ayudarán a moderar a sus propios extremistas, a fin de conservar una política *razonable* en lo que se refiere al proceso de paz. Porque es probable que, en general, el nuevo primer ministro siga el camino del gobierno precedente, tanto sobre la cuestión árabe-israelí, como sobre la cuestión palestino-israelí, quizás con una velocidad aún más lenta en lo referente a la segunda. Esto es lo que quiere la administración americana, es lo que quieren los hombres de negocios israelíes y es lo que quiere la gran mayoría de la opinión pública israelí.

En todo caso, si se detuviera el proceso de negociaciones, todo indica que el nuevo gobierno se vería confrontado a una nueva ola de atentados o a un nuevo alzamiento de masas o a los dos y esto sería una perspectiva suicida tanto para el Gobierno como para la política exterior americana en su conjunto y para la patronal israelí.

Cambios interiores

Los cambios que pueden esperarse tendrán más bien una dimensión interior: más leyes religiosas, menos legislaciones liberales, paralización de las reformas positivas del contenido del sistema educativo y retorno a una discriminación aguda hacia los ciudadanos palestinos de Israel que habían vivido, durante los cuatro últimos años una mejora sustancial de su trato por el Estado judío.

Sin embargo, el principal desafío, tanto para el Likud como para el Partido Laborista será intentar reconstruir un sentido de unidad nacional y una identidad nacional común. Aunque es altamente improbable que la división que separa a las dos partes de la nación judía israelí se transforme en los cuatro próximos años en una verdadera guerra cultural, no hay ninguna duda de que la élite dirigente deberá hacer serios intentos para gestionar ese problema, en el seno y en el exterior de los dos grandes partidos. El porvenir de Israel y de su papel en Oriente Próximo dependen, en amplia medida, de esta capacidad de sus dirigentes políticos, intelectuales y espirituales de calmar esta guerra latente.

Durante los quince últimos años, la dirección laborista ha cerrado los ojos ante este problema y la dirección del Likud ha jugado con fuego. Si no se hace nada para cortar el fuego, tarde o temprano esto explotará, y la izquierda y la derecha sionistas serán sumergidas por un movimiento fundamentalista que significará, no solamente el fin e Israel como Estado moderno occidentalizado, sino también el fin de toda tentativa de normalización en Oriente Próximo.

Si llega ese día, recordaremos con nostalgia el conflicto árabe-israelí, comparado con los horrores de una guerra de religión entre el Islam y fundamentalistas judíos. El miedo a un proceso así puede ser la razón por la cual, de ambos lados del mapa político, pueden oírse los llamamientos a un gobierno de unidad nacional. Aunque esto no parezca realista en un futuro próximo, esta perspectiva no debe en modo alguno ser descartada a medio plazo. Y con toda seguridad, esta perspectiva no debe en modo alguno ser descartada a medio plazo. Y con toda seguridad, ese será el mejor medio con que contará Netanyahu para imponer a sus amigos *halcones* la continuación del proceso de paz abierto por Isaac Rabin y Simon Pèrés.

¿A dónde va la derecha israelí?

C. Rossi y J. Clélia

Pese a toda nuestra estima por Michel Warshawski y por el valor de su combate internacionalista en Israel, no podemos aceptar en silencio los análisis que presenta en el artículo precedente.

Nos parece que nuestro amigo subestima gravemente el peligro que representa la victoria electoral de Benjamín Netanyahu para el porvenir del proceso de paz y el futuro del pueblo palestino. Afirmando que Netanyahu va a imponer “a sus amigos halcones la continuación del proceso político abierto por Isaac Rabin y Simon Pérès”, que seguirá “el camino del precedente gobierno, tanto sobre la cuestión árabe-israelí como sobre la cuestión palestina”, en fin que “los cambios que pueden esperarse tendrán más bien una dimensión interior” (con más leyes religiosas, más discriminación hacia los ciudadanos palestinos de Israel, etc.), Michel Warshawski se va por un camino equivocado. Nos gustaría poder compartir ese (relativo) optimismo pero, desgraciadamente, todo parece indicar lo contrario.

No habrá concesiones

Podemos preguntarnos legítimamente por los límites del proceso de paz inaugurado por el gobierno de Rabin y Pérès. ¿Vamos efectivamente hacia la instauración de un Estado palestino (aunque sea de soberanía limitada)? ¿Veremos a la mayor parte de las tropas de ocupación sionistas abandonar efectivamente la mayor parte de los territorios ocupados? ¿Conseguirá un acuerdo con Siria la restitución del Golan y, en una segunda etapa, el fin de la ocupación en el Sur del Líbano? ¿Desmantelará el gobierno israelí al menos una parte de las colonias en los Territorios? En fin, ¿se atreverá a hacer algunas concesiones (incluso limitadas) sobre Jerusalén?

A nuestro parecer, compartido por la mayor parte de los observadores, es probable que en caso de victoria laborista, se hubieran producido avances sustanciales, al menos sobre algunos de estos puntos, en los próximos años. Ahora podemos tener la certeza de que en cada una de estas cuestiones, el gobierno dirigido por el Likud no hará concesiones significativas.

“El ciclo de la paz ha terminado” ha dicho Hassan Asfur, director general del departamento de *negociaciones* en el equipo de Arafat. Se trata del final, al menos durante cuatro años, del proceso inaugurado en Oslo, no como escribe Michel Warshawski, de que la velocidad del proceso de paz vaya a ser “aún más lenta”; el cambio no afecta a la “velocidad”, sino a la dirección. Dicho en otras palabras; no habrá más avances; peor aun, habrá retrocesos: la escasa autonomía obtenida por los palestinos será vaciada de todo contenido, las tropas israelíes harán incursiones en las grandes ciudades palestinas *persiguiendo terroristas*, las colonias se extenderán por todas partes con el apoyo activo del Gobierno, etc.

Por supuesto, para seguir dándole el pego a la opinión internacional, se continuará *negociando*, continuará el ballet diplomático, pero, como en Madrid, con un solo objetivo (confesado por el propio Shamir): ganar tiempo mientras sobre el terreno nuevas colonias crean situaciones irreversibles. “El reforzamiento, la ampliación y el desarrollo de la colonización judía sobre los Altos del Golan, el Valle del Jordán, Judea, Samaria y Gaza” son consideradas por el nuevo gobierno “un objetivo de interés nacional”, que contará con “los recursos que sean necesarios” (Le Monde, 19.6.96).

Para ganar tiempo

Ciertamente, Netanyahu proclamará constantemente su *deseo de paz*, pero se trata de una *paz* en las condiciones del Likud, es decir, sin concesiones territoriales. Como ese tipo de *paz* no será aceptado ni por los sirios, ni por los libaneses, ni por los palestinos, iremos hacia nuevas guerras y agresiones, aún peores que la reciente invasión del Líbano. Será pues la paz de los cementerios...

¿Qué pasará si se paraliza el proceso de paz? Según Michel, “el nuevo gobierno se enfrentará a una nueva ola de atentados o a un nuevo alzamiento de masas”. Pero cada atentado no hará más que sembrar el odio y agrupar a la población en torno al Gobierno. En cuanto al alzamiento de masas, sería en efecto la única esperanza, a condición de que sea suficientemente poderoso para hacer caer al gobierno del Likud.

Creemos que nuestro camarada subestima el apoyo del electorado de derechas a una política chovinista y expansionista. Para explicar la victoria de Netanyahu, Michel Warshawski se refiere al odio de las comunidades judías orientales hacia la élite *occidental* laborista. Sin duda, esta motivación existe pero, según el propio Warshawski, sólo se aplica a un tercio del electorado del Likud. ¿Y los otros dos tercios...? ¿Son verdaderamente partidarios de la paz con concesiones territoriales?

El verdadero peligro

Curiosamente, Michel Warshawski no menciona un hecho evidente, que ha creado una atmósfera favorable al revanchismo belicista y ha hecho bascular a una buena parte del electorado israelí: los atentados suicidas contra la población civil israelí. Tenían por objetivo explícito empujar a los electores hacia la derecha y hundir así el proceso de paz: ¡éxito total! (otro hecho importante que ha decidido las elecciones es, sin duda, la criminal guerra de agresión de Pérès en el Líbano, que le han hecho perder decenas de miles de votos de árabes -israelíes).

Netanyahu no va a “imponer a sus amigos halcones la continuación del proceso político abierto por Rabin y Pérès” porque él mismo es un halcón de la peor especie. No necesita ni a Ariel Sharon, ni al hijo de Begin para llevar una política de consolidación del *Gran Israel*. Hay que recordar su odiosa campaña contra Rabin (“traidor y vendido a los árabes”) hasta tal punto de que se le ha podido acusar de ser corresponsable del clima que condujo al asesinato del primer ministro por un fanático judío. Y durante la campaña electoral, aún hablando de *paz*, no dejó de acusar a Pérès de querer vender como un saldo la tierra sagrada del *Gran Israel* al enemigo.

Nuestro amigo Michel Warshawski parece preocupado por la visión de “la izquierda y la derecha sionista sumergidas por un movimiento fundamentalista”. Este escenario de política ficción no nos parece realista. Por otra parte, un sector de los religiosos (precisamente, los orientales) son mucho más moderados sobre la cuestión árabe-israelí que el Likud. El verdadero peligro es la derecha sionista *laica*, los discípulos de Jaobotinsky, ese nacional-fascista admirador de Mussolini.

Para concluir, ¿por qué damos tanta importancia al balance electoral? Porque nos parece que subestimando el peligro que significa para la paz árabe-israelí y para los intereses del pueblo palestino la victoria electoral de Benjamín Netanyahu, nos arriesgamos a desmovilizar a los partidarios de la paz (en todo caso, la mitad del electorado israelí) y a los amigos del pueblo palestino, en Israel y fuera de Israel, aunque, sin la menor duda, ésta no sea la intención de Michel Warshawski.

Creemos que hay que hacer sonar la señal de alarma; si no hay movilización, las consecuencias serán dramáticas.

Traducción: M. Morelli

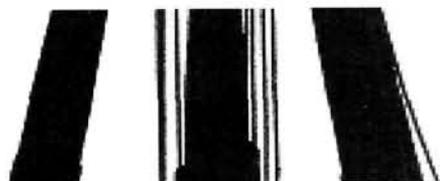


3 miradas voces

Desiertos próximos



Espejismo de vida



Espejismo de muerte



Camino al infierno



Babel

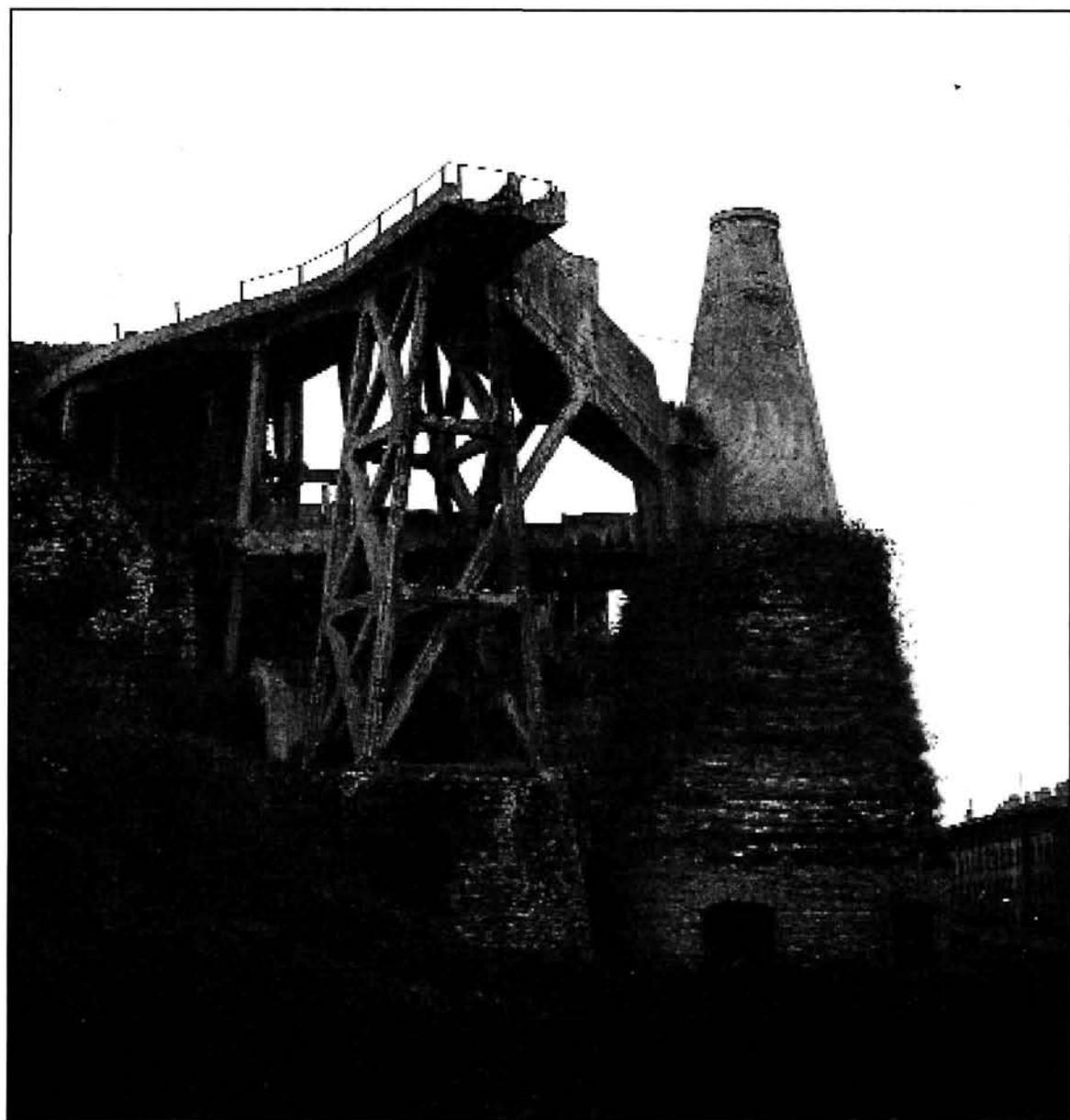


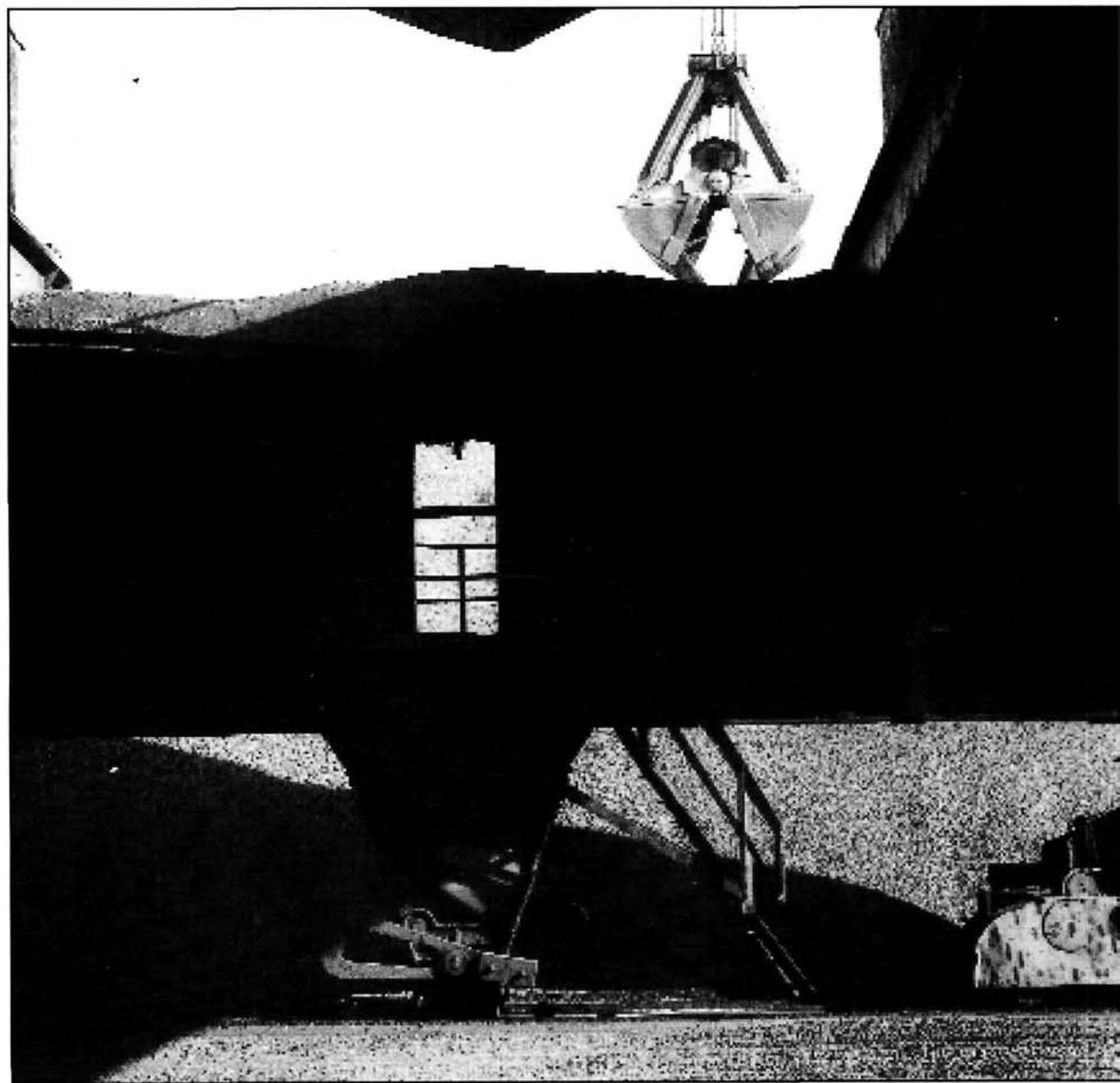
Entrando al infierno











1 Zombi-estalinismos

¿Quién teme al poscomunismo?

Gabriel Partos

Cinco años después del colapso del comunismo en Europa central y oriental, los partidos poscomunistas están volviendo al poder en la región. País tras país están haciendo lo que ninguno de sus predecesores pudo conseguir en cuarenta años: llegar al poder por las urnas en elecciones multi-partidistas auténticas. Y ello ocurre tres o cuatro años después de que estos partidos sufrieran humillantes derrotas electorales que llevaron a algunos observadores a predecir que los poscomunistas pasarían al limbo político.

Lituania inició el proceso a finales de 1992. Fue seguida por Polonia en septiembre de 1993 y por Hungría en mayo de 1994. Los poscomunistas búlgaros han confirmado esta tendencia con su aplastante victoria electoral en diciembre de 1994, aunque durante gran parte de 1993 y 1994 habían apoyado el Gobierno de tecnócratas de Lyuben Berov, prefiriendo ejercer su influencia indirectamente desde el Parlamento antes que asumir directamente las responsabilidades del mismo. En Eslovaquia, el pobre segundo lugar del Partido de la Izquierda Democrática en las elecciones de septiembre-octubre de 1994 oculta, de hecho, un amplio apoyo popular a políticas que se asocian con los poscomunistas. Incluso en Alemania, por lo menos en el Este, el Partido del Socialismo Democrático ha obtenido buenos resultados, aumentando el número de votos en cada elección.

El impacto regional de los recientes triunfos electorales de los poscomunistas es aún mayor, si se tiene en cuenta que más al sur, en los Balcanes, muchos de sus camaradas han retenido el poder tras el colapso de los regímenes comunistas. Han seguido manteniendo el control en Serbia y Montenegro y participan en coaliciones gubernamentales en Macedonia y Eslovenia. Aunque no es un partido

exactamente poscomunista, el gobernante Partido Social Demócrata de Rumania está dominado por antiguos miembros de la nomenklatura.

A comienzos de 1995, sólo tres de los doce Estados de Europa Central y Oriental –Albania, Croacia y la República Checa– no tenían en el Gobierno a partidos poscomunistas. Si se incluye en esta lista a los bálticos, hay que añadir a Estonia y Letonia, es decir, cinco de quince.

¿Nostalgia?

La principal razón del éxito de los poscomunistas han sido las dificultades asociadas a la transición de una economía planificada a otra de mercado. La producción ha caído en picado, la inflación se ha disparado y el paro ha alcanzado proporciones masivas. Amplios sectores de la sociedad han caído por debajo de la línea de pobreza. Estos indeseables desarrollos contrastan amargamente con las amplias esperanzas que alimentaban los pueblos de Europa Oriental de que “unirse a Occidente” era su pasaporte para la prosperidad y la libertad inmediatas. Incluso aquéllos que eran conscientes de las dificultades a las que tendría que hacer frente Europa Oriental no esperaban una crisis económica tan aguda y prolongada.

La frustración con el ritmo de las mejoras económicas ha creado lo que se ha llamado, con cierta exageración, una ola de nostalgia del pasado comunista. La gente se acuerda de cuando había seguridad en el trabajo, estabilidad en los precios y un mejor funcionamiento de la red de asistencia social y de la educación.

Estos recuerdos de un pasado mejor suelen pasar por alto algunos datos fundamentales, ignorando sobre todo que fue el agotamiento terminal de los regímenes comunistas lo que provocó la revolución de 1989. De hecho, algunos de los problemas que la opinión pública asocia con los remedios capitalistas aplicados en Europa Oriental ya se utilizaron en la última fase de los regímenes comunistas. La inflación galopante polaca ya causaba estragos a finales de los 80. La impresionante deuda externa de Polonia y Hungría se remonta a comienzos de la misma década. Más aún, fue una dirección comunista reformadora la que inició en Hungría la transición a la economía de mercado en 1988. Pero la tendencia a mirar al pasado con cristales de color rosa ha sido un factor esencial en la vuelta de los poscomunistas al poder.

Aunque los gobiernos no comunistas de comienzos de los 90 tuvieron que hacer frente a la poco grata tarea de gestionar una revolución económica, su propia incompetencia, arrogancia y diferencias internas contribuyeron en gran parte a sus duras derrotas. En Polonia, un sin número de partidos políticos y escisiones de Solidaridad produjeron cuatro gobiernos distintos en cuatro años. En Hungría, el intento de la coalición de centro-derecha de crear unos medios de comunicación progubernamentales, y su obsesión con la situación de las minorías étnicas húngaras fuera de sus fronteras acabaron alienando a un electorado que estaba más preocupado por cosas tan banales como su nivel de vida. Los escándalos de corrupción, especialmente los relacionados con el proceso de privatización, provocaron una furia contenida en toda la región.

Los partidos poscomunistas también fueron ayudados por la falta de competencia desde la izquierda. Los antiguos partidos socialistas y socialdemócratas que intentaron reconstruirse después de más de cuatro décadas no pudieron adaptarse a las realidades de los 90 con consignas y programas de los 40. Los partidos comunistas de

Europa del Este siguieron rápidamente el ejemplo de sus camaradas húngaros que, en 1989, habían reconstruido su partido de acuerdo con el modelo occidental, rebautizándose como socialistas, socialdemócratas o democráticos de izquierdas.

Los partidos poscomunistas se han beneficiado de la insatisfacción generalizada de los votantes. Pero su apoyo electoral no se ha limitado a un voto negativo de protesta. Más importante aún, han convencido a su electorado de su genuina conversión a las reglas democráticas. Y han encontrado algo positivo que expresar en términos electorales. La Alianza Democrática de Izquierdas de Polonia, que agrupa a los herederos del antiguo PC y a otros grupos similares, obtuvo el mayor número de votos en las elecciones de 1993, en gran parte porque prometió una transición al mercado más amable y suave. Y como los poscomunistas socialistas húngaros, que ganaron inesperadamente por una amplia mayoría las elecciones de 1994, su campaña electoral se basó en proyectar una imagen de eficacia tecnocrática. Ambos partidos han presumido de la cantidad de experiencia y cuadros que se encontraban en sus filas.

Consenso y lucha política

Desde su vuelta al poder, los nuevos socialdemócratas poscomunistas han buscado distanciarse del monopolio del poder que ostentaron los PCs intentando formar gobiernos de amplia coalición. Tienen varias razones para ello. Aunque su electorado ha votado a su favor en gran número, persisten desagradables recuerdos de las dictaduras de partido único. Los partidos poscomunistas querían demostrar, tanto en sus países como internacionalmente, su compromiso democrático y pro-mercado cortejando a aquellos partidos cuya razón de existencia era precisamente la defensa de estos principios.

Pero hay algo más que una simple cuestión de imagen en esta política de alianzas. La difícil lucha por levantar a sus economías sobre nuevas bases capitalistas han costado a varios gobiernos de centro-derecha su popularidad y las elecciones. Aunque la situación económica ha mejorado en los últimos años, los partidos poscomunistas que han llegado al poder no tienen garantías de que la recuperación sea lo suficientemente fuerte como para que influya a su favor en las próximas elecciones. Los socios de coalición pueden, en su caso, cargar con una parte del inevitable desgaste de estar en el gobierno.

El poscomunista Partido Democrático del Trabajo de Lituania fue el primero en este camino, llamando a la formación de un amplio gobierno de coalición tras su victoria electoral en noviembre de 1992, que fue suficiente pero no amplia. El movimiento nacionalista Sajudis, del presidente Vytautas Landsbergis, rechazó esta invitación. Sin embargo, el nuevo gobierno adquirió un tinte pluralista al incluir finalmente a un número importante de independientes.

En Polonia, la Alianza Democrática de Izquierdas es una coalición de cerca de 30 grupos, además del poscomunista Partido Socialdemócrata de la República de Polonia. Aunque es el mayor grupo parlamentario tras las elecciones de septiembre de 1993, necesita un socio de coalición. Sus líderes intentaron primero encontrarlo en la Unión de la Libertad, liberal, el mayor de los partidos surgidos de Solidaridad. Pero cuando ésta rechazó la propuesta, tuvieron que orientarse hacia el Partido Campesino que, a pesar de ser el socio menor de la coalición, obtuvo para su

dirigente, Waldemar Pawlak, el puesto de primer ministro. A cambio, la Alianza Democrática de Izquierdas controló las carteras económicas más importantes.

El Partido Socialista Húngaro, que triplicó su número de votos entre las elecciones de 1990 y las de 1994, obtuvo una confortable mayoría en el Parlamento. En términos del equilibrio de fuerzas parlamentario su único motivo para buscar una coalición era obtener una mayoría de dos tercios que pudiera proceder a reformar la Constitución. Los socialistas húngaros triunfaron donde habían fracasado los poscomunistas polacos y los Demócratas Libres –el partido de los disidentes anticomunistas– se aliaron con ellos.

Si la intención de los poscomunistas era la de manipular a sus socios, el desengaño no habría podido ser mayor. En Polonia, al menos, quien de verdad parece haber rentabilizado la alianza ha sido el Partido Campesino. El primer ministro Pawlak ha utilizado todos sus poderes para colocar en los puestos claves de la administración central y local a sus fieles, para promover los intereses de los agricultores y frenar el proceso de privatización. A los dos meses de estar en el poder había reemplazado a más de un tercio de los 100 altos cargos de la administración.

La Alianza Democrática de la Izquierda se vio desbordada. Su líder, Aleksander Kwasniewski, calificado de “primer ministro sin cartera”, se quejó abiertamente de que el 15% obtenido por el Partido Campesino en las elecciones se había convertido en un 90% del poder. El partido de Pawlak defendía una mezcla de políticas conservadoras, centralistas y proteccionistas, con el objetivo de beneficiar casi exclusivamente a su electorado rural.

Ante esta situación, la Alianza Democrática de la Izquierda renovó sus contactos con la Unión de la Libertad a finales de 1994. Las dos fracciones parlamentarias unieron sus votos para desalojar a Bogdan Pek del Comité de Privatizaciones del Parlamento, a quien apoyaba Pawlak contra el programa de los poscomunistas, que defendía mantener el ritmo de las privatizaciones. Aunque en noviembre de 1994 la coalición gubernamental renovó su compromiso de alianza, la cooperación de los poscomunistas con la Unión de la Libertad fue una clara advertencia a Pawlak de que podía ser sustituido como socio menor.

La Alianza y la Unión parecen tener mucho en común. Ambas fuerzas se oponían al borrador de Constitución de Walesa, que confería a la Presidencia considerables poderes ejecutivos, y no veían con buenos ojos la enorme influencia de la iglesia católica.

En Hungría, la alianza socialistas-liberales no ha sufrido las tensiones que en Polonia. Las diferencias han sido sobre temas menores. Y en cualquier caso la correlación de fuerzas era distinta porque los poscomunistas húngaros sí disponen de una mayoría suficiente que les permitiría gobernar en solitario. A pesar de tener tres veces menos diputados, los Demócratas Libres disponen de poder de veto en el Gobierno a través de uno de sus líderes, el Viceprimer ministro y ministro de Interior, Gabor Kuncze.

Retórica pro-mercado... pero sin prisas

Las victorias electorales de los partidos poscomunistas se han debido, no en pequeña medida, a su compromiso de continuar vigorosamente la transición a la economía de mercado, aunque prestando una mayor atención al gasto y los servicios sociales. En otras palabras, a introducir el capitalismo pero con rostro humano. ¿Puede aceptarse

como válido este programa viniendo de antiguos comunistas?

Muchos miembros de la antigua nomenklatura comunista, y sus asociados, tienen interés manifiesto en mantener las reformas que ha introducido la economía de mercado. Han sido ellos, en definitiva, el grupo social que más se ha beneficiado de ellas. Tienen los contactos y conexiones, acceso a capital y créditos, y a los permisos necesarios para empezar sus negocios, particularmente durante la fase inicial, en gran medida no regulada, de la privatización.

Hay una considerable superposición entre esta nomenklatura transformada en un sector de la clase capitalista y los partidos poscomunistas. Lo que supone una fuerte presión para que, una vez en el gobierno los partidos poscomunistas, se mantenga en la vía de la transición al mercado, incluso si deben enfrentarse a la oposición de los fuertes grupos sindicales que se encuentran en sus filas. Por otra parte, también hay un grupo de viejos burócratas que siguen gestionando las empresas del sector público y que no tienen el menor interés en ver cómo las privatizaciones les hacen perder su control. Este problema es especialmente grave en países donde la privatización casi no se ha iniciado, como Bulgaria o Rumanía.

En Lituania, la llegada al poder de los poscomunistas no ha supuesto ningún intento de cambiar la orientación de las reformas. Pero el gobierno de centro-derecha al que sustituyeron había aplicado una política de apoyo a la empresa privada y devolución de propiedades confiscadas por los comunistas al mismo tiempo que imponía el control de los precios, elevaba los salarios y pensiones y subsidiaba a las empresas no competitivas. Este popurrí de medidas populistas no fue suficiente para hacer popular al gobierno. En cambio, la política de austeridad del Partido Democrático del Trabajo ha producido algunos resultados palpables. La tasa anual de inflación ha caído del 1.163% en 1992 al 70% en 1994. El programa económico de ajuste de los poscomunistas obtuvo un voto de confianza en agosto de 1994, en un referéndum en el que la mayoría de la población votó en contra de las medidas populistas que propugnaba la Unión Patriótica, la oposición, para compensar la erosión de los ahorros de los lituanos a causa de la inflación.

En Polonia, la Alianza Democrática de Izquierdas ha buscado mantener la línea política de los cuatro anteriores gobiernos post Solidaridad. Se hizo con todos los ministerios económicos, incluido el de privatizaciones. Pero su orientación liberal pro-mercado se ha encontrado con el obstáculo del programa proteccionista del Partido Campesino. Pawlak bloqueó el programa de privatización en masa de 450 empresas —heredado del anterior gobierno— hasta octubre de 1994. Y cuando finalmente tuvo que ceder a las presiones de los poscomunistas, excluyó del paquete a toda una serie de pequeñas empresas.

La transición al mercado se ha retardado un poco en Polonia, debido fundamentalmente a las presiones del lobby sindical dentro de la Alianza y a divisiones en su seno entre fracciones de la dirección. Pero el principal obstáculo ha venido del Partido Campesino y las tácticas dilatorias de Pawlak, así como de sus medidas a favor de su base electoral rural. Los pagos compensatorios y los subsidios a la agricultura, especialmente al azúcar, dan una idea de esta orientación, hasta que finalmente hizo estallar la coalición.

En Hungría, la composición de la coalición ha sido más favorable a una aceleración de los ritmos de la reforma. Los Demócratas Libres no sólo no han

sido un obstáculo para los poscomunistas, sino el motor del programa de privatizaciones. Antes incluso de que se conocieran los resultados electorales que dieron la victoria al Partido Socialista, Lazlo Bekesi, su candidato a ocupar la cartera de Hacienda, declaró que sólo la aceptaría en un gobierno de coalición con los liberales. Su insistencia fue parte de una campaña de la fracción pro-mercado para reforzar su posición frente a las fuertes presiones de la poderosa fracción sindical del Partido Socialista.

Aunque las circunstancias políticas han sido favorables, los logros iniciales de la coalición socialista-liberal han sido escasos. El Plan Bekesi de ajuste no estuvo listo hasta la primavera de 1995. Y no se han acelerado hasta la fecha el ritmo de las privatizaciones. Los retrasos se han debido a la decisión del gobierno de fusionar dos organizaciones: la Agencia Estatal del Patrimonio y la Compañía Industrial Pública. El marasmo burocrático ha retrasado las privatizaciones hasta mediados de 1995.

La privatización también ha sido frenada por la reaparición de todo un sector de la nomenklatura a medio reformar. La vuelta a la administración de la generación de los 80 ha sorprendido a muchos observadores, aunque era de esperar que el primer ministro Gyula Horn quisiera tener a su alrededor a gente que conocía de mucho tiempo atrás en el aparato del antiguo régimen. Lo que ha resultado sorprendente es que entre ellos hubiera todo un grupo de antiguos comunistas no reformistas, más preocupados por mantener su control sobre la gestión del sector público que por su venta.

La integración en Occidente y el temor a Moscú

Continuidad en la orientación, aunque cambio de estilo y énfasis: éstas han sido las características de las políticas exteriores de los poscomunistas en el gobierno. Su objetivo fundamental, la integración en Occidente, es la misma que la de sus antecesores anticomunistas. Lituania, Polonia y Hungría quieren ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea y de la OTAN. Pero las realidades geopolíticas, sobre todo la proximidad con Rusia, y sus distintos niveles de desarrollo económico hacen que tengan posibilidades distintas.

Lituania es la más vulnerable a las presiones de Moscú, porque está en medio de la ruta de tránsito entre Rusia y el enclave ruso de Kaliningrad; también depende del petróleo ruso por entero. En el proceso de transición al mercado se ha quedado por detrás de Polonia y Hungría, que han sido miembros asociados de la Unión Europea desde 1992 y esperan ser miembros de pleno derecho para el 2000. El presidente Algidas Brazauskas ha intentado mejorar sus relaciones con Rusia poniendo en sordina la retórica anti-rusa del anterior gobierno del Sajudis. La normalización de relaciones con Moscú ha asegurado el suministro de petróleo ruso. Otro éxito ha tenido lugar a finales de 1993, cuando Vilna y Moscú se otorgaron el status de nación más favorecida, crucial para Lituania que ha visto disminuidas las tarifas de sus exportaciones a Rusia. Pero la ratificación del acuerdo fue condicionado por Moscú a la firma de otro que regulase el tránsito militar entre Lituania y Kaliningrad.

Las relaciones de Polonia con Rusia se han visto menos afectadas por el cambio de gobierno. En cualquier caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores —una de las tres

carteras que permanecieron en manos de Walesa mientras ocupó la presidencia—recayó inicialmente en Andrzej Olechowski, que no pertenecía a ninguno de los partidos de la coalición. El presidente Walesa tenía a su propio equipo de política exterior, que apoyó a Olechowski hasta su dimisión en enero de 1995.

La oposición de Rusia a la ampliación de la OTAN al Este ha enturbiado las relaciones de Moscú con Varsovia quizá más que con el resto de sus antiguos aliados del Pacto de Varsovia. Ello es debido a la fuerte insistencia polaca en integrarse en la OTAN y su mayor importancia estratégica, en tamaño y población, comparada con sus vecinos. Varsovia está también menos dispuesta que Budapest a contentar al Kremlin. En vísperas de la cumbre de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), en diciembre de 1994, en Budapest, rechazó una propuesta húngara de celebrar en Moscú una reunión de los países de Europa Central que asegurase a los rusos que su integración en la OTAN no suponía una amenaza a sus intereses estratégicos. Una señal del disgusto ruso fue el repetido aplazamiento de la visita del primer ministro Chernomyrdin a Polonia, a finales de 1994.

Polonia y Hungría han mostrado su frustración ante lo que consideran innecesarias precauciones de la UE y la OTAN en las negociaciones para su integración. Les gustaría que Bruselas expusiera claramente cuáles son sus condiciones para aceptar como miembros de pleno derecho a los antiguos enemigos del otro lado del Muro, estableciendo un calendario posterior para las negociaciones. Pero temen que ello sólo ocurra después de la Conferencia Intergubernamental de la UE en 1996. Lo que hará muy difícil su plena integración para el 2000.

El cambio de gobierno no ha disminuido los deseos húngaros de integrarse en Occidente. Por el contrario, el primer ministro Horn presume de haber tomado la decisión en septiembre de 1989 —como ministro de Exteriores del último gobierno comunista— de permitir que los refugiados de la RDA en Hungría pudieran dirigirse a la RFA vía Austria.

Además de la orientación hacia Occidente, la política exterior del gobierno poscomunista busca mejorar sus relaciones con sus vecinos y defender los intereses de las minorías húngaras en la región. Aunque estas preocupaciones corresponden a las del anterior gobierno, el equilibrio entre ellas y las prioridades son muy diferentes.

Una de las primeras visitas de Horn como primer ministro fue a Bratislava, y durante el verano de 1994, Budapest recibió por primera vez en muchos años a un ministro de Exteriores rumano. El objetivo del Gobierno húngaro es incluir en sus tratados bilaterales con sus vecinos las cláusulas de protección de las minorías que ya han aceptado como miembros de la CSCE y el Consejo de Europa. Si así lo hacen, Hungría está dispuesta a reconocer en los mismos tratados la inviolabilidad de las fronteras con Rumanía y Eslovaquia.

Conclusiones

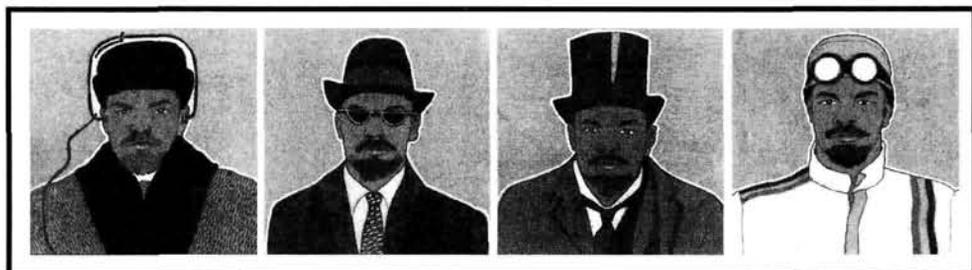
La experiencia de Lituania, Polonia y Hungría desde las victorias poscomunistas ha sido desigual. Quienes tenían que supusiera una vuelta al antiguo régimen, o por lo menos a sus prácticas, pueden respirar aliviados. Las advertencias de Walesa sobre el peligro de “recomunistización” de Polonia sólo eran una

maniobra electoral. Pero quienes soñaban que los resultados electorales produjeran una nueva situación bajo la dirección de gobiernos ilustrados de tecnócratas reformistas igualmente comprometidos con el mercado y la justicia social, estarán sin duda también desilusionados. La realidad ha traído una mezcla de continuidad y cambio; de proclamaciones de planes grandiosos desde el lodazal de la gestión diaria, como cualquier gobierno en las democracias liberales.

Los gobiernos poscomunistas no han intentado volver al pasado. No tienen la menor intención de darle la espalda a Occidente, (Bulgaria puede ser una excepción por el peso de la fracción pro-Moscú en el Partido Socialista). No ha habido intentos de situar a la prensa bajo control del gobierno. De hecho, en Hungría, la anterior administración de centro-derecha controlaba más que la actual poscomunista la prensa y la televisión. Pero las reformas económicas no han sido aplicadas con la velocidad y la consistencia que habían prometido las tecnocracias poscomunistas. Han sido frenadas por burócratas del viejo estilo y, en el caso de Polonia, por los socios campesinos.

El balance provisional de los gobiernos poscomunistas sugiere que la diferencia heredada que separaba a los poscomunistas del resto de las fuerzas políticas pro-mercado está desapareciendo rápidamente. La cooperación a ambos lados del espectro político ha sido notable. La división principal que separa el nuevo escenario político de Europa Central y Oriental es el nacionalismo extremista, la intolerancia y el autoritarismo, por un lado, y quienes defienden unos valores más liberales y pluralistas, por otro. Entre los partidos poscomunistas, los socialistas serbios son un ejemplo del primer bando, aunque hay que señalar que el Gobierno rumano es el resultado de la cooperación de poscomunistas y nacionalistas. El principal peligro a la estabilidad, la recuperación económica y los derechos humanos reside en el nacionalismo extremo y en las tendencias autoritarias, sean estas de origen anticomunista o poscomunista.

Los partidos poscomunistas de Lituania, Polonia y Hungría, así como de otros países, han adoptado un modelo de conducta democrática-liberal que les ha venido impuesto por los desarrollos de los últimos seis años. Hasta ahora sus éxitos han sido limitados, pero su gestión no ha sido muy diferente, o peor, que la de sus oponentes políticos. Pueden incluso recoger los beneficios de un cierto crecimiento económico, después de la terrible recesión sufrida a partir de 1994.



2 Zombi-estalinismos

Las elecciones rusas y la izquierda democrática

Alexander Buzgalin y Andrei Kolganov

Las elecciones presidenciales rusas se han desarrollado en un contexto de continua crisis socioeconómica. El PNB ha caído más de un 3% en el primer trimestre de 1996, a pesar de la reducción de la inflación. Está madurando una crisis de las finanzas estatales, aumenta la polarización social y siguen reduciéndose las rentas reales de la mayoría de la clase trabajadora. La caída de la producción puede ser mucho mayor que lo que señalan las estadísticas oficiales. Sólo el crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas y materias primas está contrapesando la recesión que sufren las industrias de maquinaria, la industria ligera y la alimenticia.

Corporativización de la sociedad

La principal característica de la vida social y económica en la Rusia de hoy es la lucha entre los distintos clanes corporativos. Estos clanes están interrelacionados con el mundo de la industria, las finanzas y la agricultura, y también con las élites provinciales y federales.

Algunos de estos clanes tienen su base en las finanzas, el mercado inmobiliario y el comercio: sectores en los que la especulación está muy desarrollada, particularmente en lo que se refiere a la reventa de materias primas, energía, metales no ferrosos y acero. La élite de estos clanes suele tener una orientación pro-occidental e intenta aplicar las recetas de los asesores del FMI. Sus intereses coinciden con el desarrollo del mercado hasta englobar a toda la economía rusa, a través de la privatización y la generalización de la propiedad privada. Tienen fuertes conexiones personales con la nueva élite gobernante a través de la corrupción y las antiguas relaciones familiares y sociales heredadas de la vieja nomenklatura.

Otros clanes tienen su origen en sectores industriales o agrícolas, algunas veces en el complejo militar-industrial. Su estilo de gestión es burocrático y paternalista. Son más fuertes en las ciudades provinciales del interior de Rusia que en Moscú o San Petersburgo.

Mientras los trabajadores de las empresas controladas por los clanes del primer tipo suelen estar relativamente bien pagados, los del segundo grupo están directamente en la más profunda miseria.

Una nueva estructura de clases en formación

Las nuevas clases sociales rusas no están todavía completamente formadas, ya que las relaciones económicas y sociales están todavía en proceso de transformación. Pero ya podemos identificar claramente la existencia de importantes grupos de gente extremadamente pobre y lumpenizada. Estas capas incluyen a ex-presos, gente que ha perdido su trabajo como consecuencia de las reformas neoliberales, un número cada vez mayor de personas sin hogar tras haber sido desalojadas de sus apartamentos con estafas, inválidos y ancianos con minúsculas pensiones. Toda esta gente carece de una conciencia de clase y puede apoyar cualquier política demagógica, sin importar que sea de ultraizquierda o ultraderecha, atraídas por sus consignas.

La clase obrera de la Rusia de hoy no es el proletariado tradicional, compuesto de obreros que venden libremente su fuerza de trabajo a los capitalistas. Son en una parte muy importante todavía una fuerza de trabajo semi-servil, controlada por la burocracia paternalista, los gestores de las empresas de quienes depende la concesión de viviendas y otras necesidades. Su conciencia de sí como clase sólo ha comenzado a desarrollarse.

Hay grandes diferencias en el seno de la clase obrera, producto de la mayor o menor capacidad de los diferentes clanes de mantener el nivel de vida de "sus" obreros. No existen casi sindicatos dignos de ese nombre y los niveles de auto-organización de los trabajadores son muy bajos. La inteligencia se debate en la contradicción entre su fe en abstractos valores liberal-democráticos como la única vía para acceder al estatus de una clase media de tipo occidental y el empobrecimiento de los intelectuales asalariados como resultado de la terapia de shock.

La llamada clase media, definida por sus ingresos, es alarmantemente pequeña. El grupo de quienes llegan a final de mes incluye a empleados de las empresas de propiedad extranjera y empresas mixtas, burócratas de alto nivel, asalariados especializados de los sectores financieros y comerciales, y miembros de las mafias. Este sector tiene una fuerte orientación pro-capitalista y pro-occidental.

Los llamados "nuevos rusos" no son una burguesía normal. Algunos son antiguos miembros de la nomenklatura que han conservado muchos rasgos de su anterior comportamiento socioeconómico y político. El segundo grupo de la nueva élite ha sido reclutado parcialmente en las estructuras comerciales y financieras y está en parte conectado al mundo del crimen organizado y la economía sumergida.

La sociedad rusa es testigo de un fuerte crecimiento de los sentimientos nacionalistas y chovinistas de gran potencia como resultado de una serie de factores. El más importante es la destrucción de la URSS y la "tercermundización" de Rusia, la lumpenización de la población y la falta de conciencia de clase, la tradición de paternalismo estatalista y subordinación a la autoridad.

Como consecuencia, los dos principales candidatos presidenciales, Boris Yeltsin y el comunista Gennadi Ziugánov hablan de restaurar un "Estado fuerte ruso", de acuerdo con las tradiciones nacionales. En los dos últimos años, Yeltsin y

Ziugánov, en principio oponentes políticos, han coincidido plenamente al respecto. Quizá no dándose la cara, pero al menos la espalda en todo lo que se refiere al reforzamiento del Estado ruso y el chovinismo de gran potencia.

En esta situación, hay escasa base económica, social o ideológica para el crecimiento de la izquierda democrática en Rusia. La clase trabajadora rusa se enfrenta a una serie de opciones muy malas. O apoyan a Yeltsin y la continuación de su política de acumulación primitiva burocrática o apoyan a la burocracia paternalista con la esperanza de que un nuevo "zar bueno" o "padrecito de todas las Rusias" les resuelva todos sus problemas.

Los candidatos de centro-izquierda

Mijail Gorbachov está intentando jugar el papel de un candidato centrista, proponiendo políticas social-demócratas de corte occidental. Su consigna típica es que todos tenemos una mano derecha y otra izquierda y que, por lo tanto, la sociedad también tiene que tener políticas y partidos de derechas y de izquierdas. A él le gustaría ser la cabeza que regulase a ambas "manos". Para los "demócratas", Gorbachov es demasiado socialista; para los socialistas es demasiado liberal. Por lo tanto, a pesar del elemento democrático real de su posición, no tendrá el apoyo ni de la derecha ni de la izquierda del espectro político ruso. Sólo consigue el apoyo de sectores de la inteligencia que disfrutaron de algunas ventajas en la primera etapa de la perestroika.

La popularidad de Gorbachov en occidente es mucho mayor que en Rusia, donde mucha gente no puede perdonarle la destrucción de la URSS. Para muchos comunistas ortodoxos, Gorbachov es el símbolo de la destrucción del Partido Comunista y el socialismo.

Otro candidato de centro-izquierda es Sviatoslav Fiodorov, el conocido cirujano oftalmológico. Es también director de un gran centro médico, dotado con equipos de alta tecnología y con algunos elementos de autogestión y propiedad social de los empleados. Su programa incluye el "socialismo corporativo", la convergencia entre capitalismo y socialismo a partir de cooperativas obreras y la regulación social del mercado. También hay una buena cantidad de populismo social en su programa. En el pasado ha defendido otras ideas. Hace dos años decía que Rusia necesitaba a "Cristo en uniforme de Pinochet". El elemento más positivo del programa de Fiodorov es su énfasis en el papel central del trabajo creativo en la construcción de la nueva Rusia, la necesidad de superar el trabajo asalariado y crear una situación en la que cada trabajador sea copropietario de los medios de producción y de los frutos de su trabajo. Asimismo, insiste en que el principal objetivo del desarrollo no es el capital o el dinero sino el desarrollo libre y armonioso de la personalidad, la felicidad de la gente corriente. Es popular entre la nueva generación de ingenieros y técnicos, pero no entre la mayoría de los rusos ordinarios.

Gennadi Ziugánov

El principal candidato de la oposición es Gennadi Ziugánov, líder del PCFR, el partido más grande de Rusia y el heredero reconocido del PCUS. Formalmente, Ziugánov es el candidato del "Frente Popular Patriótico". En realidad es sobre todo el representante de los comunistas ortodoxos y de los rusos de mayor edad, dominados por la nostalgia. En segundo lugar, es el candidato de diferentes

fuerzas nacionalistas y "estatistas", incluyendo los cosacos, creyentes ortodoxos y de la gente que ha perdido su prosperidad y autoestima en las reformas. En tercer lugar, y más importante, es el candidato de los clanes corporativistas industriales del segundo tipo, hegemonizados por los burócratas paternalistas.

Su programa es una mezcla de ideas socialdemócratas en la esfera económica y social con estatismo, nacionalismo y, en ocasiones, incluso valores cristianos ortodoxos en lo ideológico. Defiende una "economía de mercado regulada", la renacionalización de aquellas empresas que hayan sido privatizadas ilegalmente, y de la formación libre de los precios en la mayoría de la economía. Su programa incluye, asimismo, elementos de regulación selectiva y políticas industriales de corte occidental. Por supuesto, grandes cantidades de populismo y promesas de apoyo estatal y subsidios para las fuerzas políticas que le apoyan si es elegido presidente.

En la esfera política defiende explícitamente el mantenimiento de la democracia y la reducción de los poderes presidenciales. Pero estas promesas encajan mal con sus impulsos autocráticos y con su propio pasado en los aparatos burocráticos de la URSS.

En lo ideológico, Ziugánov mezcla toda una serie de lugares comunes sobre la necesidad de reavivar un Estado fuerte nacional como su objetivo central, ideas socialistas-narodnik (populistas), cristiano-ortodoxas y chovinismo gran ruso.

Las opciones de la Izquierda Democrática

Para la Izquierda Democrática, apoyar o no a Ziugánov es un gran problema. Desgraciadamente es la única alternativa real a Yeltsin. Las perspectivas de voto de Gorbachov son de 1-2% y las de Fiodorov 5-7%.

Los (poco convencidos) partidarios de Ziugánov en la Izquierda Democrática recalcan que es necesario impedir la reelección de Yeltsin, que puede arrastrar a Rusia a una crisis socioeconómica cada vez más grave; que es responsable de la guerra de Chechenia y que puede fácilmente volver a comenzar otra guerra "local". El mantenimiento de Yeltsin en el poder puede llevar a nuevos y sangrientos sacrificios de los trabajadores de Rusia.

Más aún, argumentan, una victoria de Ziugánov puede iniciar un giro a la izquierda y quizá a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores rusos. Una tercera razón es que, si Ziugánov gana, la gente de la calle tendrá la sensación de que pueden cambiar algo con su esfuerzo, que el poder del Estado tiene que ver algo, aunque sea mínimamente, con ellos. Mucha gente interpretaría una victoria del candidato de la izquierda como un giro a favor de sus intereses, que de no materializarse les dará derecho a movilizarse y exigir que tenga efectivamente lugar. Una victoria de Ziugánov podría iniciar una dinámica de radicalización que vaya más allá de lo que el propio Ziugánov tenga en mente.

Otros sectores de la Izquierda Democrática defienden que no se puede apoyar a Ziugánov. Apuntan al peligro de neo-stalinismo y el desarrollo de tendencias autoritarias y chovinistas gran-rusas. Existe el riesgo de que, después de un intervalo, Ziugánov se convierta en una parodia de Stalin, y que Rusia pierda los mínimos elementos de democracia que todavía disfruta. Las políticas de Ziugánov provocarán el descrédito del comunismo y el socialismo porque sus prioridades políticas reales tienen muy poco que ver con la mejora de las condiciones de vida de

los trabajadores. La estrategia de Ziugánov no se basa en la auto-organización de los trabajadores sino en el paternalismo burocrático de quienes son su principal apoyo social. Y finalmente, estos oponentes de la izquierda creen que Ziugánov en el poder preservará un cuasi-capitalismo de Estado burocrático y no elementos de socialismo. Y ello minará las posibilidades de una modernización socialista de Rusia.

¿Qué puede hacer la Izquierda Democrática rusa en esta situación? Primero, puede utilizar las elecciones para diseminar información y agitar en favor de las ideas socialistas. Los "Académicos por la Democracia y el Socialismo" y la "Unión de Internacionalistas" han dado algunos pasos concretos en este sentido, incluyendo manifestaciones, seminarios, entrevistas de radio y televisión. En segundo lugar, la izquierda puede agitar por el voto en contra de todos los candidatos derechistas y centristas en la primera vuelta. En la segunda vuelta por un voto contra Yeltsin o cualquier otro candidato derechista.

Para la Izquierda Democrática, por supuesto, la historia no se acaba en estas elecciones. Las urnas deben ser vistas como una etapa más en el proceso de lucha continua por elevar la conciencia y educar a un número de cuadros, en el proceso de construir una organización que refleje de verdad los intereses de los trabajadores de Rusia. Y se puede comenzar dirigiendo la lucha contra Yeltsin y los nomenklaturistas-capitalistas que gobiernan hoy el país.



3 Zombi-estalinismos

Cómo Yeltsin resucitó de entre los muertos

Renfrey Clarke

Boris Yeltsin puede presumir con todo derecho de haber conseguido casi lo imposible al haber obtenido el primer lugar en las elecciones presidenciales de 16 de junio de 1996. Es cierto que este resultado no se puede comparar con el que obtuvo en la primera vuelta de las elecciones de 1991, en las que barrió. Esta vez no tendrá más remedio que recurrir a una segunda vuelta, el 3 de julio, después de

haber obtenido el 34% de los votos frente al 32% del candidato del Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR), Gennadi Ziugánov. Pero hace apenas seis meses, las encuestas de opinión sólo le otorgaban una preferencia de voto del 4% y Ziugánov parecía tener la victoria en sus manos.

La suerte ha sido un elemento importante en la victoria de Yeltsin en la primera vuelta. Las primeras señales de un colapso financiero comenzaron a detectarse en la segunda semana de junio, como consecuencia de la peligrosa y desesperada política monetaria del gobierno. Pero, afortunadamente para Yeltsin, la crisis no estalló inmediatamente.

Otro golpe de suerte para Yeltsin fue el hecho de que la suma total de los salarios no pagados se mantuviera relativamente estable en marzo y abril gracias a grandes desembolsos del gobierno. Sólo en mayo comenzó a crecer de nuevo aceleradamente en un 19%. Su efecto no se había hecho sentir aún a mediados de junio, aunque habrá que esperar a ver qué efectos tiene cara a la segunda vuelta.

La ayuda del Estado

Otras razones de la victoria de Yeltsin son menos casuales. Como presidente en ejercicio, Yeltsin puede utilizar políticas estatales para reforzar su candidatura.

La política monetaria restrictiva aplicada a comienzos de año ha permitido que, tras el intervalo de tiempo necesario, la inflación haya sido relativamente baja durante la campaña electoral. Pero durante los últimos meses se han hecho numerosas promesas y se ha cedido a las reivindicaciones más acuciantes de los trabajadores, además de conceder subsidios para la industria y la agricultura y diseñar un mecanismo para restablecer el valor de las pensiones y los ahorros de la tercera edad, devorados por la inflación. Paralelamente, los trabajadores del sector público cuyos sueldos están fijados en el presupuesto han sido los primeros beneficiarios de las medidas para reducir la masa de salarios no devengados. Así se ha creado artificialmente la ilusión durante estos meses de que la estabilización económica por fin había llegado.

Yeltsin ha echado mano también directamente de los recursos del Estado para apoyar su campaña electoral. Su control de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión y la radio, ha desencadenado una auténtica avalancha de propaganda pro-Yeltsin. Todos los canales emitieron nuevos programas con un carrusel interminable de imágenes positivas de Yeltsin. Después de haberle visto en un baño de multitudes en esta o aquella provincia del interior, el espectador ruso sólo podía cambiar de canal para ver al presidente dando la mano a trabajadores o pensionistas iluminados de felicidad. Y, entre medio, entrevistas con un Yeltsin de cabello plateado y lleno de seguridad que respondía en tono moderado a unos periodistas almibarados. Todos los otros candidatos fueron literalmente ignorados. Y, en los últimos días, la programación consistió en la emisión de toda una serie de películas populares de fuerte contenido anticomunista y de documentales sobre las purgas y los campos de concentración estalinistas.

La victoria de Yeltsin también se basó en su gran habilidad para utilizar una serie de temas peligrosos. El cuerpo de oficiales crujió con un decreto presidencial ordenando la desaparición gradual del servicio militar obligatorio de aquí al año 2000. Pero logró la simpatía de los jóvenes y de sus padres. Los efectos electorales

de la guerra de Chechenia, que de acuerdo con las encuestas son la causa principal de rechazo de la administración Yeltsin, fueron neutralizados en parte con la importante concesión que supuso su reunión en Moscú con el dirigente de los rebeldes chechenos, Zelimkhan Yandarbiyen.

Pero a pesar de toda su habilidad despiadada, Yeltsin no hubiera podido quedar en primer lugar el 16 de junio y no se le hubiera regalado la victoria. A pesar de haber iniciado la campaña electoral con una gran ventaja, el PCFR pareció adoptar la actitud siguiente: "Yeltsin no puede ganar las elecciones, pero nosotros podemos perderlas". El resultado fue una cautela y una ambigüedad que, junto a graves errores estratégicos, acabaron ahogando una campaña incapaz de movilizar a nadie, dejando a muchos partidarios de Ziugánov perplejos y desmoralizados.

Ziugánov ha sido, en gran medida, personalmente invisible. Al comienzo de la campaña, sus estrategias electorales tomaron la decisión de no contratar anuncios pagados en la televisión, a pesar de que un gran número de rusos no tiene literalmente otro acceso regular de información. Los panfletos y pegatinas en los que tanto dinero gastó la campaña de Ziugánov no pueden, ni de lejos, competir con los programas especiales de televisión de Yeltsin. El puerta a puerta y las reuniones de pequeños grupos en las que el PCFR había depositado tantas esperanzas han sido seguramente muy efectivos, pero no lo suficiente como para contrarrestar la desventaja.

El fracaso de la campana del PCFR refleja, ante todo, sus deficiencias políticas. La peor de todas, su negativa a hacer un balance del pasado soviético. Ello ha dejado a Yeltsin un enorme campo para machacar con una dura campaña negativa, que ofrecía a los electores elegir entre las "reformas" y el gulag.

Más importante aún, no parece que la dirección del PCFR sea capaz de comprender qué tipo de partido necesita para derrotar a Yeltsin: uno que sea popular, democrático en sus estructuras y con sus raíces en las organizaciones y en la lucha de los trabajadores y los oprimidos.

El verdadero poder dentro del PCFR reside en varias facciones del antiguo aparato del partido-estado que se han mantenido enfrentadas a Yeltsin, así como en grupos concretos de gestores industriales, especialmente de las industrias militares y rurales. También tienen cierta influencia representantes de las administraciones locales. Los mecanismos de toma de decisión y participación desde la base están escasamente desarrollados.

El PCFR ofrece escaso atractivo para los militantes obreros. En sus cuatro años de historia, el partido nunca ha tenido una presencia importante o coordinada en el movimiento obrero.

El bloque nacionalista

Incapaz de atraer a los votantes en tanto que trabajadores, el PCFR ha intentado ganar las elecciones presidenciales a través de una amplia maniobra con los nacionalistas rusos. Ziugánov es formalmente no el candidato del PCFR sino de un Frente Popular Patriótico que incluye a media docena de organizaciones. En la práctica, nada les une más que la vaga aspiración de restaurar la "grandeza" de Rusia. El precio de mantener unida esta alianza ha sido desnudar a la campaña de Ziugánov de cualquier elemento definitorio propio, positivo... y progresista.

La alianza con unos nacionalistas cuyo "patriotismo" muchas veces es simplemente chovinismo gran-ruso ha impedido que Ziugánov haya podido explotar la mayor debilidad de Yeltsin: la guerra de Chechenia. Las encuestas de opinión sugieren que un llamamiento a la rápida retirada de las tropas federales, seguida de un referéndum de autodeterminación dentro de Chechenia, bajo supervisión internacional, hubiera sido muy popular entre los votantes rusos. Yeltsin es muy vulnerable en este tema. Pero también dentro del PCFR, por no hablar de sus aliados, las actitudes chovinistas han sido demasiado fuertes como para permitir colocar esta bomba bajo la campaña de Yeltsin.

De igual manera, la campaña de Ziugánov ha permitido a Yeltsin tener las manos libres con el tema del servicio militar obligatorio. El PCFR fue incapaz de enfrentarse al viejo principio nacionalista tradicional que exige un gran ejército de conscripción. El patético resultado es que Yeltsin, que ha sido quien ha enviado a los reclutas a Chechenia a luchar, tiene mayor credibilidad entre los jóvenes que el PCFR.

Incluso las desastrosas políticas económicas de Yeltsin no han servido para crear una polarización. Durante la campaña electoral, la plataforma económica de la coalición de Ziugánov ha estado en un segundo plano, sumida en la ambigüedad. La misma plataforma económica del PCFR no fue hecha pública hasta pocas semanas antes de las elecciones. Subrayaba la necesidad de que el Estado inter venga para relanzar el consumo y la inversión en la agricultura y las industrias de consumo. Esta concepción keynesiana ortodoxa no tiene nada que ver con el socialismo. A pesar de ello, se podía esperar que funcionase mejor que la caótica mezcla de populismo y thatcherismo monetarista que ha aplicado el gobierno. El retraso en la publicación del programa ha asegurado, sin embargo, que aún sus mejores propuestas no hayan tenido el menor eco.

Las preocupaciones del presidente

A pesar de todo, la primera vuelta de las elecciones puso de relieve toda una serie de fenómenos muy preocupantes para Yeltsin. Uno de ellos fue el resultado en la provincia de Kemerovo, en Siberia central. Tras la primera noche de recuento, Ziugánov había obtenido el 40% de los votos de la región y Yeltsin sólo el 24%.

La región de Kemerovo, con más de dos millones de electores, incluye las impresionantes minas de carbón de Kuzbass. En 1989 y 1991, los mineros de Kuzbass jugaron un papel decisivo en la gran huelga del carbón que permitió llegar al poder a Yeltsin. Los mineros —los trabajadores más militantes y mejor organizados de Rusia— fueron uno de los principales apoyos del presidente. A juzgar por los resultados del 16 de junio, ahora se encuentran entre sus oponentes.

Los resultados de la primera vuelta también confirman un dato significativo: allí donde hay grandes concentraciones de campesinos, el voto de Yeltsin es especialmente bajo. A pesar de las maniobras presidenciales sobre la "reforma agraria", la población rural de Rusia sigue siendo profundamente hostil al nuevo orden. El capitalismo ruso se encuentra así desprovisto de uno de los elementos esenciales en las coaliciones conservadoras occidentales: el apoyo de los campesinos y los habitantes de las pequeñas poblaciones.

Las perspectivas a medio plazo de la economía no son de estabilización sino de una grave y profunda crisis financiera. La probable victoria de Yeltsin en la segunda vuelta será un duro golpe para la clase trabajadora, pero seguirán sin resolver los problemas esenciales del capitalismo ruso. Las oportunidades y los desafíos que tiene enfrente la izquierda siguen siendo enormes.



4 Zombi-estalinismos

El PCFR se prepara para la derrota

Moscow News

Moscow News ha obtenido el documento "Posibles escenarios en la situación política rusa antes y después de las elecciones presidenciales", elaborado por analistas del Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR).

Uno de los códigos no escritos de las campañas electorales aconseja que todos los candidatos proclamen su seguridad en el triunfo. La posibilidad de la derrota es un escenario que se reserva de puertas adentro para los colaboradores más cercanos. Sin embargo, el PCFR va a hacer público su análisis de la situación en el país después de las elecciones presidenciales en el Congreso de las Fuerzas Nacionales Patrióticas a celebrar en Moscú el 8 de junio.

Yeltsin supera a Ziugánov

Según el documento, en los últimos meses "han tenido lugar importantes cambios desfavorables para el candidato de nuestro partido". Boris Yeltsin "ha hecho suyo nuestro programa de una mayor integración con Bielorrusia, Kazajastán y Kirguizia", ha anunciado "un inútil y demagógico plan para llegar a un acuerdo pacífico en Chechenia y está haciendo todo tipo de promesas falsas de mejorar la situación económica y social de toda la población. Gracias a ello ha hecho cambiar de opinión, atrayéndolos a su lado, a sectores importantes de altos funcionarios de Moscú y dirigentes regionales que antes dudaban a quién apoyar".

El memorándum admite que “la popularidad de nuestro candidato dejó de crecer a comienzos de marzo” en varias regiones de Rusia. Según Valentín Knish, primer secretario del Comité del PCFR de Khabarovsk, que asistió al pleno del Comité Central de mayo, “durante el último mes ha habido importantes cambios de tendencia en las encuestas, con Ziugánov ganando un 1% mientras que Yeltsin lo hace en un 9%”. En estas circunstancias “el candidato del actual régimen” es probable que venza.

La segunda parte del documento analiza los desafíos a los que tendrá que hacer frente el PCFR si Ziugánov pierde las elecciones, aunque estima que no será por un margen importante, de acuerdo con la mayoría de las encuestas de opinión. “De acuerdo con nuestras estimaciones, el actual presidente obtendrá no más del 52-55 % del voto en la segunda vuelta, incluso si se produce un fraude importante, mientras que nuestro candidato conseguirá no menos de un 40-45%, teniendo en cuenta el más que previsible fraude. Una victoria por tan pequeño margen no permitirá al régimen prohibir el PCFR y disolver la Duma pro-comunista inmediatamente después de las elecciones, por razones de política interior e internacional”.

No todos los dirigentes de la coalición nacional-patriótica comparten este optimismo. En la última sesión plenaria del Comité Central del PCFR, la dirección decidió elaborar los documentos necesarios para asegurar que el PCFR continúa sus actividades bajo otro nombre si es prohibido. Más aún, en numerosas ocasiones, los dirigentes comunistas han informado a los periodistas de que Yeltsin habría firmado ya toda una serie de decretos para prohibir el PCFR tras las elecciones y detener a sus líderes. Pero estas advertencias pueden estar orientadas a movilizar a sus partidarios en las elecciones presidenciales.

La crisis y las oportunidades de la izquierda

Los analistas del PCFR prevén una situación económica muy dura tras las elecciones en Rusia. “Una serie de campañas y actos irreflexivos y destructivos del régimen en el terreno de la política económica y social provocarán una dura crisis social, económica y financiera en otoño. Ya en agosto, el gobierno tendrá que devolver el dinero prestado por los bancos comerciales para financiar sus promesas populistas. Las subvenciones a la agricultura, la industria del carbón, la ciencia y la cultura desaparecerán de golpe. Muchas empresas, rentables hasta ese momento, tendrán que cerrar. De acuerdo con muchas estimaciones, el país sufrirá la peor cosecha de los últimos años”. Hay que señalar que numerosos ideólogos liberales y pro-mercado están de acuerdo con este análisis. Hace varios días, el ministro de Economía, Yevgeni Yasin, envió una carta al primer ministro, Víktor Chernomirdin, diciendo que sería “totalmente irreal” pagar todos los sueldos y pensiones atrasados. Las reservas de divisas del país pueden caer hasta 3.000 ó 4.000 millones de rublos, y el intento de obtener nuevos fondos para financiar el déficit presupuestario puede provocar una crisis financiera comparable al Martes Negro, cuando el rublo se depreció en picado frente al dólar.

“Un agudo deterioro de la situación puede empujar al presidente a lanzar una ofensiva contra la oposición. El régimen puede escoger el debate sobre el presupuesto de 1997 como un pretexto para lanzar una ofensiva contra sus oponentes. El presupuesto del año que viene será contrario a los intereses de las masas y es

muy probable que la Duma vote en su contra. El régimen podría entonces provocar una crisis de gobierno y disolver la Duma apoyándose en los poderes que le confiere la actual constitución semi-monárquica. Podrían convocarse nuevas elecciones legislativas en primavera de 1997. En una situación de grave deterioro social y económico, con una izquierda que ha obtenido el 40% de los votos, ésta podrá volver a ganar la iniciativa política a pesar de los esfuerzos del régimen”.

¿Una situación revolucionaria?

“Dándose cuenta de lo desesperado de la situación, las masas trabajadoras pueden recurrir a formas de protesta espontáneas, como huelgas u ocupaciones de empresas y oficinas. Todo ello aumentará el desorden y provocará diferencias entre las autoridades. Algunos partidarios poderosos del régimen intentarán usar la fuerza para disolver las manifestaciones. Pero no podrán obligar a la policía y al ejército a que actúen como verdugos de su propio pueblo. En estas circunstancias, nuestro partido tendrá una oportunidad real de llegar al poder a través de unas elecciones u otros medios, apoyado en el movimiento de protesta de masas. En una situación de desesperación total, nuestras consignas serán recibidas mucho mejor que ahora”.

A pesar de todos estos esfuerzos, el PCFR no ha sido capaz hasta el momento de organizar huelgas importantes. Sin embargo, los huelguistas cada vez más utilizan consignas antigubernamentales y antipresidenciales junto a sus reivindicaciones económicas. Cada vez son más probables huelgas bajo la bandera roja.

Los autores del documento advierten al partido para que “se prepare... para un posible fracaso en las próximas elecciones de 1996, evite divisiones internas y conserve fuerzas para futuras batallas”.

Conclusiones

Un documento de estas características no tiene nada de raro antes de las elecciones. Un análisis serio de la situación y la búsqueda de una línea correcta de actuación es una necesidad no sólo del PCFR sino también de Gennadi Ziugánov, quien podría perder su puesto de líder del partido si pierde las elecciones. El que pueda conservar su liderazgo en el partido y en la fracción comunista de la Duma depende de la cohesión interna de su círculo de colaboradores y de su capacidad de reacción frente a los nuevos acontecimientos políticos.

Paradójicamente, Yeltsin debería interesarse en la flexibilidad política de sus oponentes. Si el actual presidente mantiene su puesto, tendrá que establecer contactos con los dirigentes de la oposición. Le interesa, por lo tanto, conocer si tendrá que vérselas con el más menos respetable Ziugánov o con representantes de fuerzas mucho más oscuras e intolerantes.

Departamento político de *Moscow News*
6-12 de junio de 1996



5 Zombi-estalinismos

Sindicatos y nomenklatura en el giro poscomunista

G.Buster

¿Se está produciendo en Europa central y Oriental una “restauración de terciopelo”, como la ha calificado Adam Michnik? La vieja nomenklatura, en un ciclo político iniciado con su victoria en las elecciones legislativas lituanas de 1992, ha ido recuperando su control de los parlamentos, las presidencias y los aparatos del Estado por la vía de las urnas. El “giro poscomunista” ha sido de tal profundidad que ha devuelto a Walesa a los Astilleros Lenin –aunque ya no se llamen así y estén a punto de cerrar– y ha obligado a Valclav Klaus –modelo de primer ministro neoliberal del FMI– a llegar a un acuerdo pírrico con los nuevos socialdemócratas checos. Sólo Albania, Croacia, Estonia y Letonia han escapado hasta el momento de esta dinámica, cuyo escenario más trágico son las elecciones presidenciales rusas.

El “giro poscomunista” ha estado acompañado de un “giro pro-ruso” en los miembros europeos de la CEI –como consecuencia de la victoria de la izquierda poscomunista en las legislativas ucranianas y moldavas de 1994 y de Lukashenka en las presidenciales bielorrusas del mismo año–, que a su vez han reforzado las tendencias estatistas y nacionalistas en todo el espectro político ruso.

Es evidente que la causa primera del “giro poscomunista” son las consecuencias sociales de la “terapia de choque”. La transición al capitalismo, con una caída del PNB superior al 30% (40% si se incluye a las repúblicas de la antigua Yugoslavia), ha tenido en Europa del Este efectos económicos comparables a los de la II Guerra Mundial. El propio FMI reconoce que se tardará mucho tiempo en recuperar los niveles productivos anteriores a 1989. Cerca del 40% de la población de Europa del Este vive por debajo del umbral de la pobreza.

Pero la amplitud del giro encaja mal con la teoría neoliberal: el asentamiento de las instituciones democráticas, la generalización del mercado y, sobre todo, el desarrollo del sector privado de la economía debían ser las condiciones más favorables para que los intereses individuales de productores y consumidores se manifestaran, dotando de una base política a los partidos de la derecha neoliberal y anticomunista.

Los hechos han desmentido esta hipótesis. La recuperación económica empezaba a apuntar a finales de 1993 y comienzos de 1994, y, sin embargo, quien ha renta-

bilizado políticamente la nueva situación no ha sido la nueva burguesía sino la antigua nomenklatura, para defender sus intereses en el mercado. Para explicar esta contradicción, los teóricos neoliberales han tenido que recurrir bien al corporativismo y la capacidad de resistencia de la vieja nomenklatura, que estaría frenando el desarrollo lógico de la modernidad, o bien a la "excepcionalidad" del Este europeo, que lo condenaría para siempre a una vía histórica "anormal".

Pero si se observa lo que está ocurriendo en Europa Central y Oriental desde otra óptica, la del "desarrollo desigual y combinado" y la lucha de clases, lo que se descubre es que ha sido la vieja e "irracional" estructura de clase heredada del "socialismo real" la que ha servido de apoyo para el surgimiento de los nuevos intereses sociales en el mercado y no al revés. Lo que, a su vez, condiciona el abanico de partidos de las nuevas democracias y ha provocado los choques entre las presidencias —usualmente las primeras instituciones democráticas con nueva legitimidad y símbolo del cambio—, y los parlamentos, que debido al sistema proporcional adoptado tendían a reflejar los intereses "realmente existentes".

El mantenimiento del gasto social en los presupuestos estatales es la cuestión política prioritaria para la mayoría de la población. Pero, con la excepción de Polonia y Hungría, la proporción del gasto público en el PNB cayó entre 1989 y 1993 más del 10%, desarticulando toda la red asistencial del "socialismo real". El desarrollo de la nueva red "selectiva" puede seguirse por el peso de los "beneficios de la seguridad social" en los presupuestos y establece un mapa de los nuevos equilibrios de fuerzas sociales. Se pueden establecer cinco grupos: 1) Polonia y Hungría (20-18%); 2) Eslovaquia, Bulgaria y Lituania (16,5-15%); 3) República Checa y Albania (13%); 4) Estonia, Letonia y Rumanía (8%); y el resto, sobre todo en la CEI, donde el nuevo sistema es casi inexistente.

El "giro poscomunista" es fruto de una alianza temporal —que está condenada a romperse— entre sectores de la vieja nomenklatura que no han podido integrarse directamente en el mercado mundial como parte de la nueva burguesía y una base social compuesta por los perjudicados por la "terapia de choque", en especial un sector muy importante de la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales. Su programa pone en cuestión los métodos neoliberales, pero no sus objetivos finales, en la búsqueda imposible de un "capitalismo de rostro humano".

No es de extrañar, por lo tanto, que la satisfacción de la población con la nueva democracia haya caído en un 150% entre 1991 y 1995, de acuerdo con el Eurobarómetro. En Europa Central y del Este el porcentaje de personas no satisfechas es del 55% frente al 38% de quienes dicen estarlo. En Rusia, los porcentajes son del 86% y el 6%, respectivamente. E incluso en la República Checa la relación es 50% contra 46%. La economía de mercado está también perdiendo rápidamente su atractivo, aunque todavía es considerada la mejor opción en Europa Central (53%).

Pero en Rusia, el número de personas que rechazan las reformas alcanza ya el 65% frente a una aprobación del 19%.

La reconstrucción del movimiento sindical

A partir de 1992, el movimiento obrero de Europa Central y Oriental inició su recomposición en la resistencia contra las "terapias de choque", aglutinando la base social del "giro poscomunista", sin la que no se hubiera producido.

En Polonia, los trabajadores del complejo siderúrgico de Nowa Huta, dirigidos

por Solidaridad-80, una escisión radical de Solidaridad, eligieron comités de huelga, a los que se sumó el sindicato poscomunista OPZZ. Su objetivo era frenar el plan de reestructuración y el despido en dos fases de 25.000 trabajadores. El Gobierno se negó a negociar, pero el movimiento se extendió como una mancha de aceite. El día 13 de enero de 1993, Solidaridad convocó a una jornada de lucha nacional y el día 15 la OPZZ y Solidaridad-80. La división del movimiento sindical y la crisis del Gobierno Olszewski congelaron el movimiento durante unos meses, pero a finales de julio volvió a cobrar fuerza y a extenderse en el campo y en las minas de Alta Silesia. Los intentos de la Comisión Nacional de Solidaridad de frenar el movimiento terminaron con su expulsión de los comités de huelga, lo que no impidió que en algunas fábricas, como la de tractores Urss, fueran los delegados de Solidaridad quienes dirigieran la huelga.

Mientras Solidaridad buscaba negociar y apoyar al nuevo Gobierno Suchocka, su tendencia sindical llamada La Red —que agrupa a los delegados de las principales fábricas—, la OPZZ y Solidaridad-80 fueron radicalizando y extendiendo el conflicto, creando el 7 de agosto un Comité Intersindical, que pocos días más tarde elaboró una plataforma reivindicativa de 21 puntos. La respuesta del Gobierno fue proponer un “Pacto sobre las empresas públicas en proceso de transformación”, que buscaba integrar a los sindicatos en la gestión del plan de ajuste. Sólo Solidaridad llegó a firmarlo, el 18 de noviembre, con la amenaza de que el sindicato convocaría una huelga general si el Gobierno no cumplía las condiciones acordadas.

Seis meses más tarde, después de un paro general de casi un mes de la sanidad y enseñanza públicas y de un nuevo estallido en la región minera de Silesia, Solidaridad se vio ante la alternativa de justificar los incumplimientos del Gobierno Suchocka o convocar la huelga general que le exigía La Red, antes de que lo hicieran los otros sindicatos. Optó por una tercera salida: presentar, a través de su grupo parlamentario, una moción de censura que derribó, inesperadamente, al Gobierno Suchocka. Entre tanto, Solidaridad había pasado a ser el segundo sindicato a nivel de representatividad, superado por la OPZZ, que formaría un grupo propio de diputados en el nuevo Sejm, de mayoría poscomunista, mientras Solidaridad perdía el suyo.

En Rumanía, las organizaciones sindicales se reagruparon en dos bloques en enero de 1992, partidarios o no de una huelga general contra la política de ajuste del Gobierno Stolojan. La Confederación de Sindicatos Independientes (CNSIR), poscomunista —que aglutinaba a millón y medio de afiliados—, la Confederación Fratia, social-cristiana, y el Sindicato Alfa, demócrata-cristiano, abandonaron la Comisión Gubernamental de Arbitraje (CGA) para formar su propio Consejo Consultivo Sindical, que intentaría, sin éxito, organizar su propio partido político. Otras nueve organizaciones, representando un 15% de los trabajadores asalariados, se mantuvieron en la CGA. La huelga obtuvo importantes concesiones del Gobierno a nivel salarial, de mantenimiento de las pensiones y del gasto social.

La segunda oleada de huelgas, en 1993, estuvo precedida de una nueva reorganización sindical. La CNSIR y Fratia, junto con el sindicato de la energía Univers y otros de menor entidad, se fusionaron en la mayor central sindical de Europa del Este, con tres millones de afiliados. El Gobierno del FDSN de Iliescu

intentó organizar su propia central sindical, a partir de los mineros del Jiu, con el nombre de Alianza Rumana de Confederaciones Sindicales Democráticas (ARCSD), lo que a su vez provocó la creación de un tercer polo sindical, entorno a Alfa. La división sindical, el clientelismo gubernamental de la ARCSD y la infiltración generalizada de las direcciones sindicales por la seguridad del Estado no impidieron nuevas huelgas generales, iniciadas por los mineros, en julio y noviembre, que, a pesar de la dura represión, consiguieron arrancar importantes concesiones al Gobierno.

En Bulgaria, la Confederación de Sindicatos Independientes (CISB), poscomunista, se encontró en la transición con el surgimiento de un nuevo sindicato auténticamente independiente, Podkrepa. Su presión constante y continua en 1990 y 1991 fue contestada por el Gobierno de la UFD con una política de enfrentamiento frontal, con la exclusión de ambos sindicatos del Consejo de Parteneriado Social, un organismo de coordinación económico y social del Gobierno. Una cadena de huelgas continuas en 1992 movilizó a mineros, profesores, transportes y al sector sanitario contra la "terapia de choque". A finales de año, Podkrepa, con 600.000 afiliados, había superado en su nivel de representatividad al CISB.

En Hungría, República Checa y Eslovaquia, el movimiento sindical conservó casi intactas sus viejas estructuras, con una escasa influencia en la vida política del país, a pesar de algunos movimientos huelguísticos aislados. Sólo en Hungría, a nivel de empresa, hubo una cierta renovación, con la coordinación autónoma de los Comités de Fábricas. En el resto de Europa del Este, la actividad sindical fue muy escasa y se limitó, en la mayoría de los casos, a la conservación de parte del patrimonio del antiguo aparato comunista o fue absorbido por los movimientos nacionalistas de las minorías rusas en las nuevas repúblicas independientes, especialmente en los países Bálticos y Moldavia. En Lituania se constituyó un sindicato similar a Solidaridad, pero con mucha menos implantación social.

En la Federación Rusa, la política de pactos sociales y la cooptación de los sindicatos independientes, con la ayuda de las organizaciones sindicales internacionales se mantuvo hasta el verano de 1993, cuando una nueva ola de huelgas se extendió de las fábricas de los Urales a las minas de Rostov y a los estibadores del Distrito Marítimo del Pacífico, que pilló totalmente por sorpresa al Gobierno Gaidar. Esta vez, tras dos años de política de ajuste, la Federación de Sindicatos Independientes (FSIR, poscomunista) se encontró al frente de un movimiento unitario en todo el país. A pesar del conservadurismo de su burocracia, la FSIR se dejó presionar por la base, recogiendo las reivindicaciones sectoriales en una plataforma nacional, pero fue incapaz de reaccionar a una situación política dominada por el enfrentamiento entre Yeltsin y el Parlamento. La declaración del estado de excepción, y la amenaza directa de encarcelar a la dirección de la FSIR, acabaron con el movimiento.

En diciembre, fueron los dirigentes mineros, que habían mantenido una actitud pro-Yeltsin, los que iniciaron una huelga general en Vorkuta, que se extendió a otras regiones mineras, hasta conseguir la promesa pública del Gobierno de pago de los salarios y atrasos del sector. Al mismo tiempo, los trabajadores de la energía de Gazprom, la empresa más rentable de Rusia y con los salarios más altos, también iniciaron una serie de huelgas, con diversos resultados por regiones.

En Ucrania, el movimiento huelguístico estalló en la región rusófona del Donbas, el 7 de junio de 1993, sumando a las reivindicaciones salariales otras de tipo político y cultural. Su principal protagonista fue el Sindicato Independiente de Mineros (UIM), que ocupó los poderes locales y forzó una renovación de cuadros y dirigentes de la Federación de Sindicatos Independientes de Ucrania (FSIU, poscomunista). El movimiento superó rápidamente la región del Donbas y se extendió por el Sur y Este del país, creando una polarización política única en las antiguas repúblicas soviéticas: los cuadros intermedios y los dirigentes surgidos de la base construyeron un nuevo partido comunista, independiente tanto de la antigua nomenklatura nacional, agrupada en parte en el PSU, y de la nomenklatura industrial, que organizó sus propios partidos. En las elecciones legislativas de marzo de 1994, el nuevo PCU sería el partido más votado, cambiando el conjunto del espectro político ucraniano.

También en Bielorrusia, el verano del 93 fue testigo de la movilización sindical contra el plan de ajuste. En el otoño, en un giro político, la dirección de la FSIB, poscomunista, se alineó con el Frente Popular, nacionalista, en una campaña de recogida de firmas contra el Gobierno Kebich, heredero directo de la vieja nomenklatura nacional, que no dudó en rodear de tanquetas la sede del Soviet Supremo de Minsk ante la convocatoria de una manifestación de la FSIB. Pero la división política entre nacionalistas, pro-rusos y comunistas bloqueó en 1994 la capacidad de reacción de la FSIB.

Las estrategias de la nomenklatura neoliberal poscomunista

Las victorias electorales poscomunistas en Polonia y Hungría, que no se hubieran producido sin los movimientos sindicales descritos, situaron al frente de la política económica a los sectores neoliberales de la nomenklatura, los equipos de Marek Borowski, viceprimer ministro polaco responsable de economía, y de Lazlo Bekesi, ministro de Finanzas húngaro, que impusieron desde el primer día un programa muy distinto al defendido por los sindicatos.

En Polonia, el programa Borowski prometía aumentar el déficit presupuestario de 1994 "de manera temporal, pequeña y no inflacionaria", para hacer una política económica reactivadora que redujera el paro. Dada la necesidad de mantener los acuerdos con el FMI, sólo cabía aumentar la presión fiscal, casi inexistente sobre el sector privado de la economía, sacando a flote el inmenso sector gris que evadía sistemáticamente impuestos. Aun así, el crecimiento del déficit que provocaría esta misma política se estimaba alrededor del 1,5% del PNB.

Este programa económico fue inmediatamente criticado por los partidos de la oposición. En primer lugar, el carácter clientelista del aumento del déficit podía abrir una dinámica inflacionista difícil de controlar y la presión fiscal sobre el sector gris de la economía, dada la inexistencia de un sistema de inspección fiscal, podía empujarlo al mercado negro. En segundo lugar, el visto bueno del FMI era imprescindible para mantener el flujo crediticio del Banco Mundial y la cancelación de la deuda externa en su segunda fase, por valor de 8.000 millones de dólares. Los acuerdos firmados por los gobiernos pos-Solidaridad expiraban en

abril de 1994 y los aspectos concretos de la nueva orientación económica no podían esperar demasiado tiempo. El Gobierno Suchocka había aplazado el aumento de los precios de la energía durante la campaña electoral. Borowski se vio obligado a subirlos, pero por debajo del umbral estimado. Y un dilema parecido surgió con la importación de carne de cerdo, que fue gravada con un 15%.

La presión mas importante sobre el nuevo Gobierno Pawlak era la del sindicato poscomunista OPZZ. Con 61 diputados de los 171 de la AID, el sindicato desconfiaba abiertamente de la orientación neoliberal de los ministros económicos de la AID, y diseñó su propio programa. Éste incluía la abolición del impuesto sobre las subidas salariales en el sector público, la participación de los consejos de fábrica en el proceso de privatización y la escala móvil para pensiones y salarios. El día antes de la inauguración del Semj, la presidenta del sindicato, Ewa Szychalska, anunció la formación de un grupo parlamentario propio, paralelo al de la AID, con su propia disciplina en materia económica y social. Pero tras intensas presiones del ministro de Trabajo, Miller, abandonó su pretensión de formar grupo parlamentario propio y aceptó que sus reivindicaciones tendrían que "implementarse dentro de los márgenes fijados por los recursos económicos y presupuestarios del país".

En cualquier caso, el Banco Nacional funcionaba ahora como una entidad autónoma, con la responsabilidad de mantener un equilibrio en la política monetaria. Ello obligaba al Gobierno a encontrar los recursos necesarios aumentando la presión fiscal para financiar cualquier nuevo programa de gasto público. Pero la principal preocupación de Borowski era la oposición del Partido Campesino y de la OPZZ a los presupuestos de 1994.

Éstos habían sido negociados en el Ministerio de Finanzas entre el sector neoliberal de la AID y los técnicos de la Unión de la Libertad, el principal partido pos-Solidaridad. La presión clientelar dentro de la AID y el Partido Campesino se reflejaba en que más de un tercio del PNB sería redistribuido a través del presupuesto. El FMI, consciente de la lucha política que se desarrollaba, decidió, finalmente, dar su apoyo al plan, con la esperanza de establecer una relación de trabajo con los sectores neoliberales de la AID. Pero impuso un umbral tope para el déficit presupuestario del 4,1% del PNB. El presupuesto fue finalmente aprobado por el Parlamento, pero tras una crisis de Gobierno que obligó a Borowski a presentar su dimisión, acusado de haber apoyado políticamente la privatización especulativa de la Banca Slanski.

El programa Bekesi, en Hungría, comenzó presentando un balance muy pesimista sobre la situación económica, que hacía imposible cumplir las promesas electorales. La lucha contra el paro sólo se podía ganar con el crecimiento de un sector privado fuerte y declarando como principal prioridad frenar el crecimiento del paro. El presupuesto de 1994 fue reelaborado, con recortes de más de 50.000 millones de florines, aplicando un "presupuesto cero" en los gastos de cada ministerio. El sistema fiscal también fue reformado, con exenciones para la creación de empleo y una menor presión contributiva.

El seguro de desempleo, que constituye una parte muy importante del déficit presupuestario, fue reorientado de un sistema de compensaciones a otro de incentivos de creación de empleo. A pesar de defender la extensión de la educación, los

presupuestos del ministerio fueron recortados y la Universidad dejó de ser gratuita. El programa de privatizaciones fue también remodelado por completo. El objetivo era ahora forzar la reestructuración a través del control crediticio de la banca pública —a imagen de la República Checa—, que debería implicarse directamente en la gestión financiera de las empresas, forzando a la bancarrota a las irrecuperables. Un programa de infraestructuras, financiado con la venta de bonos de privatización y deuda municipal, debería permitir aliviar la carga inversora inicial del sector privado y aumentar la competitividad del público en proceso de privatización. Finalmente, el Gobierno impulsaría un pacto social de rentas salariales de cuatro años, a imagen del de Kreisky en Austria en los años setenta.

El problema de Bekesi fue también la resistencia de los diputados sindicales del PSH, aunque sin la fuerza de las movilizaciones del país vecino. Bekesi, a diferencia de Borowski, fue capaz de imponer un duro ajuste salarial en las negociaciones del pacto social, pero no de reducir sustancialmente el déficit presupuestario, como tampoco se había atrevido el anterior Gobierno conservador. A finales de 1994, la deuda pública húngara empezó a tener problemas de colocación graves, alcanzando sólo ventas del 21%, y la capacidad de financiación del Banco Central se vio sobrecargada. Las negociaciones con el FMI para 1995 anunciaban un inevitable aumento de la tensión social y una crisis en el PSH parecida a la que había vivido la AID polaca.

La estrategia de la nomenklatura industrial poscomunista

Tras la dimisión de Borowski, la AID recuperó la dirección de la política económica en abril de 1994, tras un caótico interregno en el que el Partido Campesino intentó aplicar su propio programa, chocando con el FMI y el propio Walesa. El nuevo ministro de Finanzas, Grzegorz Kolodko, preparó en poco más de un mes, con la ayuda de Stanislaw Gomulka, su "Estrategia para Polonia", un plan de tres años cuyo objetivo era un crecimiento acumulado del PIB en 1997 del 22%, combinando este relanzamiento de la economía polaca con el mantenimiento de la disciplina monetaria y una inflación del 9% en el mismo año.

Kolodko había insistido desde 1991 en que, aunque la política de estabilización era prioritaria, no existía una relación directa entre déficit fiscal e inflación. Sus conclusiones eran tres: 1) El equilibrio presupuestario es en gran medida endógeno. Las restricciones presupuestarias pueden tener un impacto estabilizador a corto plazo, pero el proceso acaba afectando negativamente al déficit presupuestario mientras exista un amplio sector público. 2) Los objetivos de reducción del déficit no pueden ser fijos, sino que debe tenerse en cuenta su impacto en la producción y el empleo reales. 3) La caída de la producción y el endeudamiento exterior tienen por sí mismos un impacto desestabilizador en la economía.

El punto de partida del Plan de Kolodko era un crecimiento en 1993 del 3,8% del PNB, gracias al sector privado (ya el 56% del PNB), las exportaciones y las inversiones. Se trataba de incorporar a esta tendencia al sector público, reformándolo en su gestión y permitiéndole recuperar competitividad para proyectarse en los mercados europeos y ruso, a través de un impulso definitivo del

programa de privatizaciones y de "comercialización", nombre de un proyecto de transformación de más de 1.500 empresas públicas en corporaciones, con autonomía total para actuar en el mercado.

La nomenklatura, recuperado el control del Gobierno, iba a terminar el proceso de privatización a su favor y a colocarse en los consejos de administración del nuevo sector público reformado, para abalanzarse sobre un mercado del que sólo esperaba beneficios. Kolodko había dado forma a unos intereses sociales que iban a utilizar las viejas teorías del "socialismo de mercado" para mostrar su capacidad de competencia en un mercado capitalista con escaso capital privado. Así, al neoliberalismo de la nomenklatura reconvertida en la privatización "espontánea", que había impuesto con Borowski su programa al conjunto de la AID, creando fuertes fricciones con el sector sindical de la OPZZ, se sobrepuso la "Estrategia para Polonia" de Kolodko, que exigía la estabilización y la disminución de la inflación como punto de partida, pero a través de una reducción del déficit fiscal con una mayor presión fiscal sobre un sector público competitivo, y no esquilmo, y un sector privado tratado en igualdad de condiciones, sin privilegios sustanciales. La nomenklatura industrial tenía ahora su propia ideología, compatible con una política de pactos sociales de tipo occidental con los sindicatos, ligando los aumentos salariales a la productividad y la participación de los sindicatos en la gestión de las empresas.

La "Estrategia para Polonia" pretendía cabalgar un tigre que haría terminar el año 1994 con un crecimiento del 4,7% del PNB. La recuperación parcial de las economías de la Unión Europea permitió aumentar las exportaciones de 21.000 millones de dólares en 1993 a 54.000 en 1994, mientras que las importaciones pasaban, en igual período, de 47.000 millones a 38.300. La estructura de las exportaciones –metalurgia (16,5%), textiles (13,2%) y minerales (11,2%)– permitía que el sector público se pudiese incorporar en condiciones de competitividad si se aplicaba una política industrial reestructuradora orientada a este fin y se mantenía el clima internacional a favor de Polonia del que habían disfrutado los gobiernos pos-Solidaridad.

El Partido Campesino no podían ver la menor ventaja en una privatización o una "comercialización" del sector público con la que perdía el control de una parte sustancial de la economía, sin obtener nada a cambio y debilitando la capacidad del Estado de subvencionar al sector agrícola, sus cooperativas y sus bancos. El "campesinismo" como ideología sólo podía mantenerse con transferencias sistemáticas del sector industrial al agrícola.

El Plan Lewandowski de privatizaciones había sido aprobado por el Parlamento en abril de 1993 y sus dos primeras fases firmadas por el Gobierno Suchocka. Faltaba la firma de la tercera fase, 105 empresas, para su puesta en práctica.

Pawlak recibió el proyecto en mayo de 1994, y exigió una revisión completa, excluyendo a 16 empresas, consideradas "demasiado estratégicas". Las presiones del FMI y de la AID fueron paralelas. Pawlak no tuvo más remedio que ceder. Los distintos programas de privatización habían afectado a unas 2.400 empresas, el 28% del sector público. El resto, pasaron a la fase de "comercialización" como Sociedades Unipersonales del Tesoro Público (SUTP). Sólo en el primer trimestre de 1994, se crearon 183 STUPs frente a sólo 19 en el mismo período en 1993.

Las discusiones preparatorias sobre el presupuesto de 1995 pusieron de relieve no sólo las contradicciones que existían entre el Partido Campesino y las nomenklaturas neoliberales e industriales del PSDRP, sino también entre éstas y la OPZZ. Kolodko no fue capaz de racionalizar el gasto público o limitarlo sustancialmente. Su plan había despertado demasiadas esperanzas en todo el electorado poscomunista. La convocatoria de las elecciones presidenciales, que ganaría el poscomunista Kwasniewski, trasladaría hacia el futuro estas contradicciones.

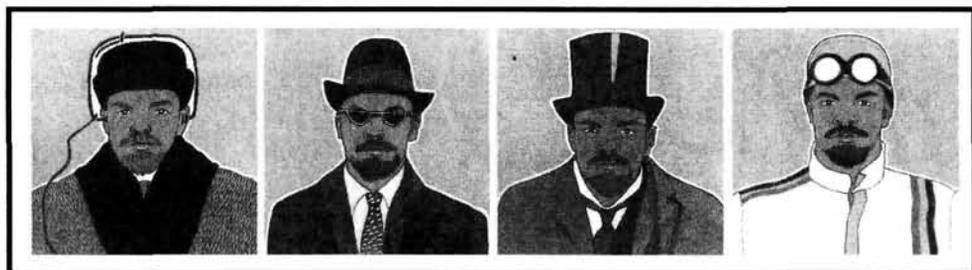
Conclusiones

La recomposición sindical de 1992-94, que agrupó la base social que permitió las victorias electorales poscomunistas, fue posible por la recuperación de un cierto nivel de autonomía de sectores importantes de la clase obrera de Europa Central y del Este, que se expresó en el rechazo de los pactos sociales que debían acompañar las políticas de ajuste neoliberales.

Los sectores de la vieja nomenklatura que no se habían integrado a la nueva burguesía gracias a la "privatización espontánea" reconstruyeron sus aparatos políticos a nivel local y central con un programa populista que se apoyaba en la lucha de los sindicatos. Pero su objetivo social era mantener su papel de mediadora social entre los trabajadores y el mercado mundial, regulando el funcionamiento del sector público, sin el que no puede beneficiarse de una nueva oleada de privatizaciones.

Los partidos poscomunistas, a pesar de su pretendida modernización socialdemócrata, han heredado todas las contradicciones del antiguo régimen, aunque ahora se proyecten en el mercado, como expresan los distintos intereses de la nomenklatura neoliberal y la industrial, la burocracia sindical y de las cooperativas y los trabajadores de las grandes fábricas del sector público.

Están condenados a oscilar entre el populismo y el corporativismo, sin encontrar un proyecto político propio. El "giro poscomunista", dada la gravedad de la crisis económica y social, sólo puede ser un momento de transición entre la división definitiva de la clase obrera entre sectores condenados a la marginación y otros integrados en un nuevo corporativismo por la aplicación del programa económico neoliberal o la gradual independencia política de los trabajadores. En cualquier caso, los partidos poscomunistas verán romper su difícil equilibrio interno y mermar su base social, anticipando su derrota electoral.



6 Zombi-estalinismos

De la "Declaración de Principios" de la Plataforma de Izquierdas del Partido Socialista Húngaro

En la situación presente, el ejercicio del poder no debe ser el único objetivo. Sería mejor concentrarse en iniciativas socialistas que refuercen a las capas medias y bajas de nuestra sociedad. Sólo de esta manera será posible garantizar una base real para una política económica alternativa, de manera que el ejercicio del poder por la dirección del partido pueda operar realmente como una proyección de la sociedad y no en el vacío. Hay que prestar especial atención al hecho de que los objetivos y prioridades de una futura política socialista no vienen determinados por los instrumentos a utilizar (la inflación o el déficit presupuestario), sino por la transformación de la concepción global de las relaciones sociales.

Las privatizaciones siguen siendo hoy una prioridad incuestionable. Los más importantes expertos económicos del PSH continúan exigiéndolas (incluidas las de la red eléctrica y la compañía estatal de hidrocarburos). La necesidad de las privatizaciones debe ser juzgada por su contribución a los objetivos de la economía nacional. Los casos son muy distintos: la concesión de créditos u otras acciones favorables, como la reducción de precios, a favor de las empresas públicas competitivas tiene efectos negativos inevitables en la privatización. Sin embargo, asegurar la libertad de acción de los nuevos empresarios privados tiene efectos positivos en la actual situación.

El nivel de éxito de las empresas no debe juzgarse esencialmente por los beneficios obtenidos por un pequeño número de propietarios. El éxito debe depender de cuánta gente obtiene un salario y asegura su nivel de vida en una empresa particular. Y sobre todo de en qué medida la actividad de una empresa dada contribuye al desarrollo de la estabilidad comparativa de toda la región en la que está. Especialmente negativo ha sido la desintegración de las cooperativas agrícolas e industriales y la privatización de servicios públicos y bancos usando dinero del Estado.

Un problema básico es cómo hacer que la economía nacional se integre en la región y en el sistema mundial, cómo adaptarla a las condiciones internacionales. Es evidente que el fracaso del sistema de socialismo de Estado se debió a muchos factores. El más importante, tras el agotamiento producido por la orientación

soviética hacia la industria pesada, fue que la dirección política fue incapaz de integrarse en la economía mundial y sus centros mas innovadores. Fue incapaz de construir un sistema alternativo socialista basado en un desarrollo democrático y socialista. La burocracia siguió siendo omnipotente y al frente del irreformable socialismo de Estado (en el que la productividad siguió siendo menor que la media europea). Al mismo tiempo, la incapacidad del sistema de cumplir sus objetivos se fue agravando con la crisis de las relaciones financieras entre Occidente y el Este, en la forma de una crisis del pago de la deuda exterior, sobre todo en los 80. Este proceso fue alentado por los poderes económicos occidentales con el objetivo de provocar el fracaso de un sistema político y social con el que tenían que competir. Un ejemplo fue la falta de inversiones en Europa del Este durante este período, mientras que se concedían créditos, que se acumulaban en enormes deudas.

A partir de la experiencia de los últimos años, es esencial que se reduzca la dependencia financiera, técnica y política de los centros del capital. Deben revisarse los mecanismos de pago de la deuda y necesitamos adoptar políticas que no estén en contradicción con el proceso de integración. Por el contrario, la auténtica pregunta no es "integrarse o no integrarse" sino cómo nos integramos. Un gran paso adelante puede ser la búsqueda de una mayor cooperación con los países que tienen un grado similar de desarrollo, lo que debe hacerse a pesar de las pobres relaciones que Hungría tiene con alguno de sus vecinos.

El hecho es que es posible construir con estos países una unión aduanera, con libre mercado y convertibilidad de las monedas. Sólo se podrá cooperar con países mas desarrollados cuando hayamos alcanzado un nivel de desarrollo superior nosotros mismos. Especialmente por lo que se refiere al empleo y la distribución de la renta, áreas en las que las consecuencias pueden ser muy negativas para los socios más débiles (como ha puesto de manifiesto la crisis de 1992 del sistema financiero europeo occidental). La integración de socios similares puede ayudar a crear bases más favorables para negociar con la UE o el FMI.

No podemos tener ilusiones. Somos conscientes de que el gobierno de coalición no ha sido capaz de frenar el deterioro del nivel de vida, la educación y la cultura. Sin embargo, hay esperanzas si se opera un giro en las líneas propuestas. Pero para ello es necesario nuevas formas de participación social y crecimiento económico.

Nuestra tarea más importante, dados los desarrollos capitalistas que nos rodean, es moderar las negativas consecuencias sociales que sufre la población, elevar el nivel cultural y mejorar la sanidad y los servicios sociales. Toda política que aumente las diferencias y la desigualdad social debe ser abandonada. Tenemos que reducir el peligroso foso que se abre entre la clase dominante de nuevos ricos y las amplias masas de la población, utilizando todos los instrumentos democráticos y constitucionales a nuestro alcance. Para lograrlo, necesitamos un movimiento democrático socialista de masas y un partido de masas que exprese los intereses del movimiento. Sin este factor histórico subjetivo no tenemos posibilidades en las próximas elecciones generales. Existe el peligro de que el nacionalismo populista en ascenso barra a una izquierda desacreditada. Nuestra principal tarea es restablecer la esperanza con un nuevo comunismo y perspectivas realistas para un nuevo desarrollo democrático socialista para el futuro.

10 de noviembre de 1995



7 Zombi-estalinismos

Solidarnosc, 15 años más tarde

Jan Malewski

[Producto de la huelga general del verano de 1980, el sindicato independiente y autogestionado Solidaridad había sido la expresión política de este inmenso movimiento de autoorganización social centrado en los bastiones industriales regionales. Movimiento cuyas fuentes hay que buscar, a la vez, en el hundimiento de un proyecto de desarrollo económico acelerado (basado en las bajas tasas de crédito en el mercado mundial a comienzos de los años 70), el inicio de una inversión de la curva del nivel de vida de la población consecutivo a ese fracaso y el sentimiento popular de que el derroche de los esfuerzos humanos que aparecía tenía por causa principal la incapacidad de las élites gobernantes y su voluntad de preservar a cualquier precio su posición social privilegiada. El fracaso de este modelo de desarrollo había desacreditado a la burocracia del Estado-partido y puesto en primer plano una oposición democrática intelectual que había conseguido tejer lazos con la vanguardia obrera tras la represión de las huelgas de junio de 1976.]

El modelo de sociedad que entonces había defendido Solidaridad se inspiraba de estos sentimientos y de las experiencias de autoorganización de los huelguistas. Se trataba de una sociedad solidaria e igualitaria. La experiencia de las huelgas llevadas a cabo en los bastiones industriales por las reivindicaciones de los sectores menos poderosos (salud, educación...) fue la traducción inmediata de esta aspiración. De una sociedad que garantizara la dignidad de los trabajadores a través de la autogestión de las empresas, según el modelo de los comités de huelga de agosto de 1990 y de los consejos obreros de 1956. De una sociedad que respetara las cualificaciones sin por ello permitir a los que las poseen colocarse por encima de los demás, simbolizada por la institución de los expertos en el seno del movimiento, cuyo papel era proporcionar consejos, sin la posibilidad de tomar decisiones directas. Este modelo era expresado en el lenguaje político de la oposición democrática cuyas corrientes dominantes, hubieran o no salido de la izquierda antiestalinista de Octubre de 1956 (el primer gran movimiento de autoorganización), rechazaba entonces las referencias marxistas, identificadas a su caricatura burocrática. Pero, a pesar de esta mediación y del uso de una terminología tan diferente como posible de la *novlengua* burocrática (Solidaridad

hablaba de *societalización* ^{1/} de la economía y de *República autogestionada* y no de *socialismo*), el modelo de sociedad defendido por Solidaridad en 1980-81 era en lo esencial el de una democratización radical del sistema social existente y no el de un derrocamiento de sus fundamentos. Se trataba de una puesta en cuestión del *socialismo real* en nombre de los valores que su propaganda transmitía, puesta en cuestión cada vez más radical a medida que el poder burocrático se demostraba incapaz de satisfacer las aspiraciones claramente expresadas por las masas. Pues se trataba, ni más ni menos, de exigir de los burócratas que aceptaran, no sólo poner en cuestión su poder –en las empresas y a nivel local primero y en el Estado a continuación– sino también, y sobre todo, su situación social privilegiada, que descendieran de su pedestal (por pequeño que fuera) para fundirse en la masa. Era, señálemoslo, una exigencia mucho más radical que la aparecida tras la derrota del movimiento, de una vuelta al redil del capitalismo.

Tras haber intentado frenar la dinámica de este movimiento, a través de un proyecto de reforma económica que intentaba encuadrar las decisiones de los consejos de autogestión mediante un conjunto de mecanismos mercantiles y el poder central del Estado –proyecto aceptado por los negociadores sindicales y rechazado por el primer Congreso de Solidaridad que impuso la primacía de las decisiones democráticas de la base– la dirección burocrática decidió romperlo imponiendo el estado de sitio. Su principal autor, el general Jaruzelski, ha escrito diez años más tarde: “Estábamos como hipnotizados por la convicción de que los órganos centrales de Solidaridad y sus expertos hacían lo que querían. Sobreestimábamos su capacidad de orientar y de manipular la organización. Un movimiento reivindicativo social y político tan poderoso se radicaliza por sí mismo. Más que ser dirigido por sus dirigentes, éstos eran empujados por aquel. Esto, por supuesto, no les justifica totalmente, pero es un hecho. En diciembre (1981) alcanzó su apogeo” ^{2/}

El golpe

El estado de guerra fue impuesto para detener esta dinámica. Sus autores habían intentado primero preservar las posibilidades de un futuro compromiso con quienes podían ser los portadores de la legitimidad del movimiento social, a la vez que decapitaban las estructuras y buscaban romper el lazo entre los dirigentes y los militantes de base, vehículo democrático del radicalismo del movimiento. La represión no fue ciega: fue masiva a nivel de las empresas para extraer a los militantes obreros de su medio social, obligarles a reciclarse o a emigrar y paralizar así el movimiento privándole de sus cuadros intermedios. Si Solidaridad pudo así preservar la continuidad de su dirección nacional y de sus apoyos intelectuales, a nivel de las empresas esta continuidad de cuadros y de experiencia política acumulada fue rota. Más que una organización de masas preservada en la clandestinidad, Solidaridad se convirtió al cabo de unos pocos años en una red de difusión de ideología a partir de sus centros intelectuales hacia una base obligada a un consumo pasivo.

El golpe del general Jaruzelski tuvo también otro impacto: fue muy masivamente percibido como la última prueba de que el cambio no era posible en el marco del sistema,

^{1/} El término polaco *uspoiecznienie* (que se traduce generalmente por *socialización*) está formado a partir del término *spoleczenstwo* (sociedad) y no tiene pues raíz común con *soeczalizm* (socialista). En nuestra opinión esta es la razón del éxito del vocablo.

^{2/} Wojciech Jaruzelski, “Stan wojenny dlaczego” ... “(El estado de guerra, porqué...)” *BGW*, Varsovia 1992, p.30.

que un movimiento de masas por más poderoso que fuera —y Solidaridad con sus diez millones de miembros había sido poderoso— no conseguiría humanizar el *socialismo realmente existente*. Al mismo tiempo, el formidable impulso de solidaridad que el ataque contra el sindicato polaco había levantado en el extranjero y que obligaba a los gobiernos occidentales a ponerse verbal y materialmente al lado de la oposición polaca contribuyó a dotar al capitalismo de virtudes humanistas en la imaginación popular. El terreno estaba así maduro para una idealización a escala de masas de la opción capitalista: los frenos de autolimitación ³ intelectual habían caído y las publicaciones clandestinas de Solidaridad podían consagrarse a *recuperar el retraso* inundando el movimiento de la prosa neoliberal justamente en voga en Occidente.

Fue en 1984-85, cuando en las empresas el movimiento sindical estaba en su momento más bajo, cuando se dibujó en el seno de los círculos dirigentes de Solidaridad clandestina una primera ruptura con el proyecto de República autogestionada. En el informe preparado entonces para Lech Walesa y titulado *Solidaridad cinco años después de agosto* ⁴, se plantea claramente, bajo el vocablo de reforma económica una vuelta a la economía de mercado, presentada como la “única economía natural”. En septiembre de 1985, la dirección provisional clandestina de Solidaridad hace público un documento titulado *Las reivindicaciones económicas de la TKK* que constituía una ruptura fundamental con las decisiones del primer congreso de Solidaridad. La TKK postulaba en él la introducción de un mercado de capitales y la privatización de las empresas así como la garantía de seguridad para las inversiones extranjeras en Polonia ⁵. Esta orientación económica era también la conclusión de la evolución de las posiciones de la mayoría de los dirigentes de Solidaridad hacia una solución de compromiso histórico con la burocracia, obtenida en frío, o como mucho con una movilización social limitada que debería servir para crear las condiciones de un acuerdo entre los dirigentes de la oposición y los de la burocracia. Iba a la par que una apertura cada vez más pronunciada de la economía polaca a la iniciativa privada, bajo la tutela del general Jaruzelski, él también sometido a la presión aplastante del endeudamiento exterior.

En 1988-89, cuando las movilizaciones sociales recomenzaban en las empresas y se volvían, naturalmente, hacia los símbolos de Solidaridad, la dirección del sindicato y la oposición intelectual se habían convencido en su mayoría de la superioridad del capitalismo. En cuanto a la base, renovada, del sindicato no tuvo ya la ocasión de vivir un movimiento de autoorganización similar al de 1980. Las estructuras sindicales legítimas estaban ahí, bastaba con llenarlas. Los dirigentes salían de la clandestinidad con la aureola de mártires y bastaba con reagruparse tras ellos. Los pocos disidentes históricos de la

³ Se ha admitido generalmente que la autolimitación —término planteado por Jacek Kuron en 1980— consistía, en primer lugar, en evitar formular reivindicaciones demasiado radicales en el terreno político (la cuestión del poder en particular). Es cierto pero parcial: la reflexión sobre la sociedad estaba también autolimitada. Leszek Balcerowicz, uno de los expertos económicos de Solidaridad desde 1980, luego ministro responsable de Economía en 1989-91, escribió más tarde lo siguiente: “En 1980 y durante los años siguientes, la versión autogestionaria de la reforma económica aparecía como el *summum* de las posibilidades. Yo mismo fui partidario de ello hasta un momento, sin tener sin embargo la ilusión de que se tratara de una solución menos buena que la economía mercantil privada” (L. Balcerowicz, “800dni-szk kontrolawany” “(800 días- el choque controlado)”. *BGW*, Varsovia 1992, p.146.

⁴ Cf. “Raport Polska 5 lat po Sierpniu (Informe sobre Polonia cinco años después de agosto)”. *MS*, Varsovia, 1985 (edición clandestina).

⁵ *Tygodnik Mazowszen*, n.141, 1985.

dirección de Solidaridad sufrían a la vez la represión del Estado y el ostracismo de sus antiguos compañeros. Si conseguían a pesar de todo hacerse oír, aparecían como divisores y por tanto debilitadores del movimiento.

Sin legitimidad

El equipo del general Jaruzelski, comprometido en una profunda reforma de mercado y en las primeras tentativas de privatización de la economía, tomó entonces conciencia de que sin legitimidad no conseguiría alcanzar sus objetivos ⁶. Era también la señal dada claramente por el FMI, que había tomado una parte activa en la elaboración del proyecto de restauración capitalista. Sólo la oposición política y social podía legitimar esta política a los ojos de las masas y proporcionar así la garantía de éxito exigida por Occidente. Bronislaw Geremek, uno de los principales expertos de Solidaridad, interviniente en las conversaciones con el régimen, que debían llevar a los acuerdos llamados de la “mesa redonda” en abril de 1989, cuenta que a partir de enero de ese mismo año la insistencia del régimen se desplazó del terreno económico al terreno político: “Ocurrió que las cuestiones económicas fueron apartadas del programa de las negociaciones, o, en cualquier caso, que debían jugar en él un papel secundario. Por el contrario, pasó a primer plano el establecimiento de una unión entre el registro de Solidaridad y la aceptación política de las elecciones”⁷.

En las elecciones parlamentarias parcialmente libres de junio de 1989, la dirección de Solidaridad había apoyado a los candidatos de los comités cívicos de Solidaridad, manteniendo deliberadamente una confusión entre el sindicato salido de la clandestinidad y una élite política en formación. El resultado de estas elecciones había perturbado un poco los proyectos salidos de la mesa redonda. Privado de toda legitimidad, el antiguo régimen del general Jaruzelski no podía ya pretender mantenerse con el apoyo crítico de una oposición salida de Solidaridad: tenía que abandonar. Los dirigentes de la oposición, tras algunas dudas, aceptaron tomar en sus manos el gobierno y lo utilizaron para establecer una democracia parlamentaria. Tomaron en sus manos con convicción la transformación de la sociedad bajo la égida del FMI. Habiéndose trasladado el centro de gravedad política hacia las instituciones estatales, el sindicato Solidaridad reconstituido pasó a un segundo plano, manteniendo un apoyo sin fisuras a una política que, en nombre de la necesaria ruptura con el pasado dictatorial, consistía también en una ruptura draconiana con las relaciones sociales pasadas.

Adam Michnik, uno de los más brillantes teóricos de la oposición de los años 1970-90, hoy a la cabeza del principal periódico liberal polaco, no pretende ocultarlo: “La mesa redonda fue precedida por dos olas de huelgas en las empresas, en la primavera y el verano de 1988. Los participantes en estas huelgas tenían derecho a considerar que fue gracias a ellos como venció el nuevo sistema. Sin embargo, fueron las primeras víctimas de la transformación. Los precios aumentaron brutalmente. Los salarios reales cayeron. Las grandes empresas no eficientes fueron condenadas a la reestructuración interna o a la quiebra. Sus trabajadores vieron el espectro de los despidos colectivos. Los agricultores se sintieron amenazados por la invasión de los productos extranjeros. La intelectualidad

⁶/ Cyril Smuga, “Pologne, les caisses sont vides”, en *Inprecor* n. 292, del 4-9-1989 (ed. francesa).

⁷/ Bronislaw Geremek & Jacek Zakowski, Geremek opowiada. *Zakowski pyta, Rok 1989 (Geremek cuenta, Zakowski pregunta, el año 1989)*, Plejada Varsovia 1990. p. 50.8).

fue golpeada por el final brutal del mecenazgo del Estado. Tras la gran euforia, hizo su aparición la gran desilusión. El estereotipo populista de la *revolución inacabada* y del *estado despedazado por los ladrones* fue una reacción a ello. En estas acusaciones absurdas había sin embargo un núcleo racional. La revolución mercantil y la privatización significaban inevitablemente un aumento brutal de las desigualdades sociales **18**.

Estereotipos populistas

En el seno de Solidaridad este estereotipo populista, por retomar los términos de Michnik, fue creciendo. Las direcciones sindicales sucesivas no encontraban como justificación al profundo descontento de sus adherentes más que el argumento del tiempo: un poco más de paciencia y el futuro será mejor. Luego, según pasaba el tiempo, los que acusaban a las corrientes liberales de haber protegido a los *comunistas* y de haber por ello *frenado las reformas* ocuparon el primer plano. Incapaz de comprender que la forma tomada por la victoria democrática era al mismo tiempo una derrota social de los trabajadores, razonando con estereotipos del antiguo régimen (en el que los dictadores y los privilegiados eran los mismos y en el que la libertad significaba también el fin de los privilegios indebidos que los burócratas se habían concedido fraudulentamente), el sindicato Solidaridad se comprometió en la lucha por la *descomunización*, exigiendo, al mismo tiempo, las cabezas de los miembros del antiguo partido (aunque hubieran roto con él y tomado la cabeza de la oposición desde hacía decenios), aún más privatizaciones, aún más mercado, en definitiva, aún más capitalismo. En nombre de esta ideología, la dirección de Solidaridad no ha dudado en dividir los movimientos huelguistas contra los aspectos más brutales de la política gubernamental, negándose a apoyarlos y dejando así el terreno libre al sindicato OPZZ (salido del movimiento sindical oficial de los años de declive de la dictadura) al que identificaba con el *comunismo* **19**. Esta deriva estaba por otra parte completada por un alineamiento creciente con los sectores más tradicionalistas y reaccionarios de la jerarquía católica polaca.

La victoria electoral en septiembre de 1993 de los partidos cuyas raíces se hundían en el antiguo régimen ha acelerado esta evolución. Estos partidos seguían la política neoliberal —con, hay que decirlo, una atención social más consecuente: los salarios reales han comenzado una lenta ascensión y el paro se ha reducido ligeramente— el enemigo podía por fin ser designado. Y, una vez más, Solidaridad se ha demostrado capaz de ponerse a la cabeza de los movimientos de resistencia social, de organizar las movilizaciones obreras y de obtener éxitos. Si hoy su fuerza no puede ser comparada con la de 1980, si ya no es el gran sindicato, siendo muy pequeña su influencia y su capacidad de movilización en el sector privado en plena expansión (donde los derechos sindicales son poco reales), continúa siendo dominante en las grandes empresas del sector público que le dan una imponente fuerza.

Ursus 1995

El movimiento huelguista de mayo de 1995 en la fábrica de tractores Ursus de Varsovia da fe de esta capacidad y lanza una cruda luz sobre la evolución política de los sectores más radicales del actual Solidaridad. Ursus fue el bastión de la resistencia obrera bajo el

18/Adam Michnik, "Teren zaminowany" "(Terreno minado)" en *Gazeta Woborczy* del 21 de noviembre de 1995, p.18.

19/ Cf. Nuestro artículo "Un été chaud" en *Inprecor*, n.359 del 25-09-92 (ed francesa).

antiguo régimen: en junio de 1976, los trabajadores de esta inmensa fábrica cortaron la vía de ferrocarril internacional París-Moscú, desvelando así a los ojos del mundo su revuelta. En 1980, fue también de ahí de donde partió, a comienzos de julio, el movimiento huelguista. Fue un obrero de Ursus, Zbigniew Bujak, durante los años 80 el dirigente nacional clandestino más emblemático de Solidaridad. La fábrica conoció durante los años 70 un *boom* de inversiones con la decisión gubernamental de hacer de ella el mayor constructor de tractores de Europa tras la compra de una licencia de Massy-Fergusson. Este inmenso lugar de trabajo no fue nunca totalmente acabado, pero con la descentralización del financiamiento de las inversiones, Ursus se encontró terriblemente endeudada durante los años 80. La terapia de choque neoliberal iba a hacer tocar a difuntos por Ursus igual que por las demás empresas públicas; Ursus que debía pagar al Estado un dividendo sobre el capital (¡pagable incluso en caso de déficit!) y un impuesto gigantesco sobre el aumento de los salarios, veía además cómo se rechazaba su acceso al crédito y había perdido sus mercados tradicionales en el Este, al no tener ya los campesinos medios para invertir. Esta política estaba apoyada por los dirigentes históricos de Solidaridad en la empresa, Z. Bujak y Zbigniew Janas. Es entonces cuando la dirección del sindicato local pasó a manos de una corriente radical. Su principal dirigente se convirtió en 1992 en director de la empresa con el apoyo de Solidaridad. La opción decidida entonces por la dirección y el sindicato fue mejorar el rendimiento de la empresa a la vez que hacía sentir a cada paso la mejora de los asalariados: los salarios volvieron a aumentar lentamente. Pero la fábrica, cuyas capacidades de producción son de 70.000 tractores por año, no vende sino una decena de miles.

En mayo de 1995, cuando el fantasma de la quiebra amenazaba una vez más, incapaz la empresa de hacer frente a las exigencias cada vez más urgentes de los acreedores (bancos y Estado), Solidaridad llamó a la huelga. Varias veces miles de manifestantes invadieron el centro de Varsovia. Como en 1976, los huelguistas cortaron la vía férrea internacional. Se les unieron los contingentes de mineros, siderúrgicos y trabajadores del sector de armamentos, también en huelga en ese momento. Se enfrentaron con la policía y las condenas de los medios de comunicación **/10**. Sus reivindicaciones eran las siguientes: aumento de los salarios, acceso de la empresa a un crédito barato, anulación de la deuda con el Estado y los seguros sociales, anulación del IVA que la empresa paga por los componentes de su producción. En definitiva, en esbozo y construido a partir

10/ El comentarista de *Gazeta Wyborcza* no dudó en escribir: "En una economía de mercado no hay razón para mantener una fábrica solo porque es grande e importante. Debe ser útil y garantizar los beneficios" (n. Del 27-28 de mayo de 1995). En cuanto a Zbigniew Janas, dirigente histórico de Solidaridad en Ursus, explicaba: "Incluso si el gobierno anulara las deudas, antes de uno o dos años, con este director y este jefe del sindicato las deudas crecerían de nuevo" (citado por *Gazeta Wyborcza* del 20-21 de mayo de 1995). El diputado socialdemócrata Zbigniew Siemiatkoski por su parte explicaba: "Ursus debería despertar la imaginación de mis colegas de la Alianza de la izquierda democrática (el bloque electoral de los socialdemócratas que agrupa también al sindicato OPZZ) que miraban la privatización sin simpatía. Basta con comparar lo que pasa en Ursus con la situación en la acerería privatizada Lucchine (antigua acerería Varsovia, otro bastión histórico de Solidaridad en la capital)" (citado por *Gazeta Wyborcza* del 2 de junio de 1995).

de la realidad económica de su propia empresa, un modelo de desarrollo económico alternativo al liberalismo en curso. Era sin embargo en el terreno ideológico en el que la huelga salía de lo normal.

El antisemitismo mezclado de anticomunismo apareció a la luz del día: la efigie del primer ministro miembro de la Socialdemocracia (SDRP-salido del ex Partido Obrero Unificado de Polonia, en el poder de 1944 a 1989), Jozef Oleksy adornado con una estrella de David fue quemado por los manifestantes; éstos en varias ocasiones insultaron a los ministros y antiguos dirigentes liberales de Solidaridad, tratándoles de ladrones, traidores y –ya puestos– de judíos, ¡proponiendo enviarles a las cámaras de gas!. Los discursos del dirigente de Solidaridad en Ursus, Zbigniew Wrzodak, retomaban un esquema conocido en otras épocas y bajo otros cielos: ataques contra la “finanza internacional” y la “oligarquía roja”, exigencia de “acreditar la producción polaca” y de “distribuir los beneficios a todos los polacos”, acusaciones de “crímenes contra Polonia” formuladas en contra de las élites. En una carta abierta dirigida al procurador general, Wrzodak escribía a propósito del ministro de Economía, el socialdemócrata y muy liberal Kolodko: “El desprecio manifiesto de Grzegorz Kolodko por los trabajadores que luchan por su supervivencia y la de sus familias, la arrogancia /11 señorial digna de un vagabundo enriquecido y de un simple bribón llevado a las cumbres del poder, su pretensión de “economista” cuando sus decisiones son dignas de un simple especulador /12, todo ello debe ser interpretado como una provocación pérfida que intenta producir una inevitable explosión social que escape a todo control y, como consecuencia, un baño de sangre en Polonia” /13.

Esta reaparición pública de lo que hay de peor en la tradición política polaca es un puro producto del desconcierto y la desmoralización de los trabajadores que no comprenden cómo lo que habían vivido como su victoria se les ha escapado de las manos. En unos años todas sus costumbres, todos sus conocimientos necesarios para moverse en la vida cotidiana, muchas de las referencias y valores que respetaban se han quedado obsoletos. Este terreno es particularmente fecundo para una interpretación policiaca de la historia y un encastillamiento en los pocos *valores estables*: la fe, la familia, la patria. Acogiendo en Ursus a Jan Olszewski, el candidato a la presidencia cuyo programa es la vez tradicionalista católico y favorable a una *descomunización* radical, antiguo Primer ministro cuyo gobierno cayó tras haber denunciado como agentes comunistas a varios responsables históricos de Solidaridad, entre ellos a Lech Walesa /14, Z. Wrzodak le presentó como víctima del “sistema de los comunistas y de sus agentes dirigido por monseñor Walesa” /15. Solidaridad de Ursus decidió en consecuencia otorgar su apoyo

11/ El término empleado en el texto original es una palabra del argot polaco tomado del yiddish (hotspan).

12/ El término empleado es una palabra tomada del yiddish.

13/ *Teraz Ursus* del 26 de mayo de 1995, boletín de Solidaridad en la empresa.

14/ Cf. Jan Malewski & Jaroslaw Wardega, “Guerre au sommet”, en *Inprecor* n. 257 del 17 julio de 1992. (ed francesa).

15/ Citado por *Gazeta Wyborcza* del 28 de agosto de 1995.

al candidato Olszewsk /16. Este candidato obtuvo así el mayor número de votos en el seno del congreso de Solidaridad de la región de Varsovia (42,7%) /17, derrotando incluso a Lech Walesa. La dirección de Solidaridad no es tan extremista. Ha intentado obtener una candidatura de unidad de la derecha tradicionalista (reclamando para ello la mediación de la jerarquía católica) antes de optar finalmente por el apoyo a Lech Walesa en la campaña presidencial.

Una visión corporativa

Ha tomado sus distancias con las manifestaciones más estridentes de antisemitismo e intentado construir una alternativa programática. Ha presentado así un proyecto de Constitución centrado alrededor de la *descomunización*, de la privatización mediante distribución generalizada de los títulos de propiedad y de una estructural estatal corporativa (el presupuesto debería así ser adoptado por una comisión tripartita de sindicatos obreros, sindicatos campesinos y representantes de los patronos). Un proyecto de ley sobre la privatización y la reprivatización (¡esta última debería permitir dotar a los propietarios expropiados tras 1945 y a sus descendientes el 10% de los títulos!) fue también elaborada. Apunta a distribuir el conjunto de la propiedad a todos los polacos adultos así como otro proyecto de ley que quería hacer el sistema de impuestos “profamiliar” y un proyecto de reforma de los seguros sociales (gestión tripartita: patronos, sindicatos, representantes de los usuarios). El conjunto de estos proyectos proviene de una visión corporativa del capitalismo polaco y de una concepción de la sociedad fundada en el catolicismo más tradicional y un nacionalismo estrecho. Por otra parte, en agosto de 1995, el presidente del sindicato, Marian Krzaklewski, no dudó en anunciar que Solidaridad organizaría una marcha sobre Varsovia –siguiendo el ejemplo de la marcha sobre Roma– si la ley sobre la comercialización de las empresas que acababa de ser votada en la Dieta era aplicada. Le reprochaba en efecto poner freno a la “verdadera privatización” /18. En el VII Congreso, en junio de 1995, se decidió que Solidaridad debe ser no sólo un sindicato sino también, en alianza con los partidos políticos de derechas, un gran movimiento social anticomunista con el objetivo de apartar a la izquierda del poder. En consecuencia, Marian Krzaklewski, elegido a la cabeza del sindicato por tercera vez, hizo elegir a la dirección a Zbigniew Wrzodak de Ursus /19. Lech Walesa, que tras una pelea con Solidaridad había reanudado sus lazos con su dirección, fue muy aplaudido cuando afirmó: “Nuestra revolución solidarista se ha parado a mitad del camino... De los sueños de un Estado amigable y justo, rico y estable no queda gran cosa. (...) Un grupo estrecho de gente se enriquece y tiene en sus manos la mayoría de los puestos clave. Los demás –que son una

16/ En la primera vuelta de la elección presidencial Jan Olszewski ha obtenido el 6,87% de los votos expresados, llegando en cuarta posición.

17/ Según *Gazeta Wyborcza* del 19 de octubre de 1995.

18/ *Gazeta Wyborcza* del 9 de agosto de 1995.

19/ Luego la presencia de Wrzodak a la cabeza del sindicato ha sido puesta en cuestión bajo la influencia de Lech Walesa, que no le encuentra “presentable” (cf. *Gazeta Wyborcza* del 11 de diciembre de 1995).

aplastante mayoría— se empobrecen y deben satisfacerse con la migajas caídas de la mesa de los dueños. Esto es el capitalismo cuando es construido por las manos de los antiguos comunistas”. E hizo un llamamiento a “una coalición de las fuerzas capaces de llevar a cabo las reformas”/20. En Octubre, tras un referéndum interno, la dirección de Solidaridad decidió comprometer al sindicato en la campaña de Lech Walesa /21. Este compromiso parece ir más allá de la campaña electoral.

Al anuncio de la victoria del candidato socialdemócrata Aleksander Kwasniewski, el presidente de Solidaridad, Marian Krzaklewski, ha hablado de un nuevo reparto de Polonia. En los días siguientes, el sindicato ha organizado una campaña masiva con el objetivo de anular el escrutinio, consiguiendo reunir más de 600.000 firmas. Marian Krzaklewski ha anunciado ya la puesta en pie de un “movimiento social alrededor del eje de Solidaridad-Lech Walesa” cuyo objetivo sería derrocar al Gobierno socialdemócrata antes de las elecciones parlamentarias, apoyándose en los referéndums previstos para el año próximo sobre el proyecto de ley de privatización generalizada de la economía (conforme al proyecto elaborado por Solidaridad), que Lech Walesa ha hecho adoptar poco antes de su salida de la presidencia, y sobre la nueva Constitución. En fin —y no es quizá una referencia anodina vistos los lazos que Lech Walesa ha sabido tejer con la dirección del ejército— comentando su derrota Lech Walesa ha citado al mariscal Jozef Pilsudski, artesano de la independencia de Polonia en 1918 y fundador de un Estado fuerte en Polonia como consecuencia de un golpe militar apoyado por los sindicatos en 1926: “ser vencido y no ceder, es una victoria. Vencer y dormirse en los laureles, es una derrota”. Luego ha dado a entender que podría aún presentarse a una elección ,“quizá antes de plazo”.

Solidaridad da la espalda resueltamente así a toda movilización de los trabajadores en unidad con los demás sindicatos para consagrarse a un conflicto fundamentalmente ideológico. Toma la responsabilidad de dividir duraderamente a la clase obrera polaca cuando ésta está a la defensiva tras las graves derrotas sufridas desde 1981. Si el antiguo régimen polaco mereciera el sobrenombre del “país de la gran mentira” (con el que Anton Ciliga había designado a la URSS estalinista), decididamente el cambio de régimen no ha hecho desaparecer la mentira.

INPRECOR nº 399/ Febrero de 1996/ París

Traducción: Alberto Nadal

20/ Citado del *Gazeta Wyborcza* del 9 de junio de 1995.

21/ Walesa ha obtenido el 62% de los votos de los delegados del Congreso contra el 23% de Olszewski y el 10% para la presidente de la banca nacional, Hanna Gronkiewicz-Waltz, cf. *Gazeta Wyborcza* del 19 de octubre de 1995.



1936

El problema de los órganos de poder en la revolución española

Andreu Nin

[Este artículo fue publicado en francés en el nº 1 (único), de julio de 1937, Revue internationale du POUM, Barcelona-París. En la Fundación Pablo Iglesias, de Madrid, pueden consultarse las fotocopias de un ejemplar íntegro. El artículo está fechado por su autor en Barcelona, el 19 de mayo de 1937. Como es sabido, Nin fue "desaparecido" por la policía estalinista el 15 de junio.

Este artículo, hasta ahora inédito en castellano, contiene la más dura crítica a Trotsky y al trotskismo realizada por Nin.

Nos fue enviado por un colaborador cuyas referencias no encontramos en nuestro archivo, por lo cual le pedimos disculpas. Hemos respetado sus notas a pie de página al texto de Nin.

A continuación de ese texto, publicamos la contribución que Pierre Broué presentó al Congreso Internacional sobre la Guerra Civil Española que tuvo lugar en 1977 en la Universidad de Montreal.]

Nada es más antimarxista que aplicar a todos los acontecimientos y a todas las situaciones revolucionarias un esquema preparado de antemano y válido para todos los casos y todas las latitudes. Los seudomarxistas que recurren a este procedimiento, en lugar de partir de las situaciones concretas para elaborar la táctica más adecuada, pretenden someterla al esquema, especie de panacea universal que, cuando se administra, produce resultados completamente negativos. Tal fue el caso de la Internacional Comunista durante el famoso *tercer período* cuya política preparó la victoria del fascismo en Alemania. Tal es el caso de los trotskistas **1/**, cuyas maravillosas fórmulas se han demostrado en la práctica absolutamente estériles. Trotsky posee también su panacea universal, pero no ha llegado a constituir en ninguna parte un núcleo más o menos importante, ni a ejercer ninguna influencia sensible en ningún país.

Los marxistas *puros* que nos han llegado aquí y que, con la irresponsabilidad que les confiere el privilegio de no tener ninguna responsabilidad, se consagran a examinar con lupa los documentos y resoluciones del POUM, en búsqueda de errores y desviaciones, estos marxistas *puros* también tienen su esquema: la revolución rusa y el leninismo, pero se guardan bien de tener en cuenta las particularidades específicas de nuestra revolución y de que el leninismo no consiste en la repetición mecánica de algunas fórmulas, ni en aplicarlas a todas las situaciones, sino en estudiar la realidad viva con la ayuda del método

1/ Este es el único artículo en el que Nin polemiza con los trotskistas, y puede considerarse por lo tanto como la réplica de Nin a las durísimas críticas de Trotsky. La posición del POUM respecto a la cuestión Trotsky fue siempre la de solidaridad frente a la persecución política de que era objeto el militante revolucionario, pero también de absoluta oposición a su ingerencia política en las cuestiones españolas y la táctica propugnada por el POUM.

marxista. La experiencia de la revolución de 1848 y de la Comuna de París ayudaron eficazmente a Marx y Lenin a elaborar su táctica revolucionaria, pero tanto uno como otro aplicaron las lecciones de esta experiencia a cada situación concreta y las adaptaron a las condiciones de lugar y tiempo en correlación con las fuerzas existentes. La revolución rusa encierra inapreciables enseñanzas para el proletariado internacional; pero sería un procedimiento absolutamente extraño al marxismo el de trasladar mecánicamente a España la experiencia rusa, tal y como pretenden los desgraciados adeptos de Trotsky que, sin raíces ni prestigio en nuestro movimiento obrero, se esfuerzan en vano en desacreditar a la vanguardia revolucionaria española.

La experiencia rusa y la realidad española

Uno de los problemas más importantes que se plantean a nuestra revolución es incontestablemente el de los órganos de poder. ¿Es necesario decir que los celosos guardianes del *marxismo puro* —púdicas vestales que rehuyen todo contacto con la *vil realidad*— se han apresurado a aplicar *el patrón ruso* a la revolución española y a ofrecernos la fórmula salvadora?

El esquema no puede ser más simple: “En Rusia, con la creación de los soviets apareció la dualidad de poderes. De un lado los soviets; del otro el Gobierno Provisional. La lucha entre los dos poderes se terminó mediante la eliminación del Gobierno Provisional y la conquista del poder por los soviets. Ergo, la premisa indispensable para la victoria de la revolución proletaria es la existencia de la dualidad de poderes. En julio, en todas las poblaciones, aparecieron unos comités unidos por un Comité Central de Milicias, que constituían el embrión del poder revolucionario frente al Gobierno de la Generalidad. A la supresión de estos comités, el POUM debía responder con una vasta campaña de agitación con el objetivo de reconstituirlos.”

No puede negarse que la existencia de la dualidad de poderes es un factor de extraordinaria importancia en la revolución y que, en 1917, jugó en Rusia un papel decisivo. La dualidad de poderes apareció como resultado de la existencia de unos soviets que, de los simples comités de huelga que eran al principio, se convirtieron a causa de circunstancias particulares y específicamente rusas, en órganos embrionarios del poder proletario. ¿En qué consistían fundamentalmente estas condiciones particulares y específicas? En que el proletariado ruso, que no había pasado por una etapa de democracia burguesa, no poseía ninguna organización de masas, y por lo tanto, una tradición de ese tipo. Los soviets fueron los órganos creados por la revolución, en los que los trabajadores se agrupaban, y que se convirtieron automáticamente en un instrumento de expresión de sus aspiraciones. El dilema “soviets o sindicatos” no podía plantearse porque estos últimos, en realidad, no comenzaron a organizarse sino tras la revolución de febrero.

El papel de los sindicatos en España

En España la situación concreta es muy diferente. Los sindicatos gozan de un gran prestigio y una gran autoridad entre los trabajadores; existen desde hace muchos años, tienen una tradición y son considerados por la clase obrera como sus instru-

mentos naturales de organización. Por otra parte, los sindicatos de nuestro país no tienen, como en otras partes, un carácter puramente corporativo; no se han limitado jamás a la lucha por reivindicaciones inmediatas, sino que son organizaciones de tipo auténticamente político.

Esta circunstancia explica en gran medida que la revolución no haya creado organismos específicos dotados de vitalidad suficiente para convertirse en órganos de poder. Por costumbre y tradición, el obrero de nuestro país se dirige al sindicato tanto en las situaciones normales como en los momentos extraordinarios.

¿Esto es bueno o malo? Es en todo caso una realidad, y el marxismo digno de este nombre debe juzgar no según sus deseos y desde un punto de vista subjetivo, sino según la realidad concreta. El marxismo actúa con lo que es y no según lo que quisiera que fuese.

Los Comités Revolucionarios y el Comité Central de Milicias

“Sin embargo –se nos objetará– durante las jornadas de julio se constituyeron Comités Revolucionarios en todas las poblaciones.” En efecto, pero los comités, que, lejos de ser organismos estrictamente proletarios, eran órganos del Frente Popular, ¿podían jugar el papel de los soviets? ¿Se ha olvidado que *todos* los partidos y organizaciones antifascistas, desde Acción Catalana, netamente burguesa y conservadora, hasta la FAI y el POUM, formaban parte de esos comités? El Comité Central de Milicias, formado sobre esas mismas bases, no podía ser el embrión del poder revolucionario frente al Gobierno de la Generalidad, dado que no era un organismo proletario, sino de *unidad antifascista*, una especie de gobierno ampliado de la Generalidad. No existía pues la dualidad de poderes ¹², sino dos organismos análogos por su constitución social y su espíritu. Podría hablarse de dualidad de poderes si el Comité Central de Milicias y el Gobierno de la Generalidad hubiesen tenido una composición social diferente. ¿Pero cómo podían oponerse si tanto uno como otro eran, en el fondo, equivalentes?

²¹ La contundencia de esta afirmación de Nin, en mayo del 37, es de una importancia extraordinaria. La negación de que la insurrección revolucionaria de julio de 1936 hubiera conducido a una dualidad de poderes, que es un lugar común en la historiografía académica, aunque cuenta con pocas pero notables excepciones entre los más destacados líderes de la época [vgr.: Tarradellas, Azaña], confiere al pensamiento político de Nin un interés excepcional. Y es la clave que nos permite entender la réplica de Nin a las críticas de Trotsky. Para Nin no hay dualidad de poderes, y el Comité Central de Milicias Antifascistas no es el embrión del poder proletario, sino un organismo de colaboración de clases. Por lo tanto, en un desarrollo coherente de esta tesis, la participación de Nin en el Gobierno de la Generalidad no es una *traición*, ni significa que se inicie un proceso de colaboración con el Estado republicano para reforzar el poder burgués (como afirman los trotskistas), sino la continuidad de la participación del POUM en el Comité Central de Milicias Antifascistas. También los bordiguistas (véase el número 1 de *Balance*) negaban que el 19 de julio del 36 se hubiese constituido en España una situación de doble poder. Para una ampliación sobre el tema cfr. BROUÉ, Pierre: “Los órganos de poder revolucionario: ensayo metodológico”, en VV.AA.: *Metodología histórica de la guerra y la revolución españolas*, Fontamara, Barcelona, 1980.

Conviene señalar por fin que, incluso en los momentos de mayor esplendor de los comités, los sindicatos continuaron jugando un papel preponderante. No era el Comité Central de Milicias, sino los Comités de las Centrales sindicales quienes trataban, en primer lugar, las cuestiones más importantes.

La posición del POUM ante el problema de los órganos de poder

El POUM no dejó de comprender, sin embargo, desde el primer momento que la creación de órganos proletarios destinados a reemplazar los de los poderes burgueses podía tener una inmensa influencia sobre el desarrollo progresivo de la revolución. A este efecto, opuso al Parlamento, que republicanos y estalinistas pretendían resucitar, la Asamblea Constituyente de los Comités de Obreros, Campesinos y Combatientes. Pero la consigna no caló entre las masas obreras. El POUM intentó más tarde, con un resultado semejante, que la consigna fuera más precisa formulándola de la siguiente forma: "Congreso de delegados de los sindicatos obreros, de las organizaciones campesinas y de los combatientes". El término de "asamblea" fue reemplazado por el de "congreso", más comprensible para los trabajadores, y la representación obrera surgía directamente de las organizaciones sindicales, es decir, de los organismos ya existentes. La consigna siguió teniendo el carácter de *consigna de propaganda*, y no se implantó entre las masas.

¿Por qué, a pesar de todo, —se nos objeta— el partido no hizo prácticamente nada para crear comités? Porque, dado que las masas obreras no experimentaron la necesidad de su creación, se hubiera convertido en una tentativa estéril, sin trascendencia alguna. Por otra parte, quienes se sirven de tal argumento olvidan que los bolcheviques —cuya actividad nos ofrecen constantemente como ejemplo a imitar servilmente— no crearon los soviets. Su gran mérito histórico consistió precisamente en partir de una realidad concreta, los soviets ya existentes —que habían sido creados espontáneamente por los trabajadores por primera vez en 1905— para convertirlos en instrumentos de insurrección primero, y en órganos de poder acto seguido. Y a quienes nos acusan de no tener una orientación fija sobre esto, hemos de hacerles observar que la táctica no puede ser inmutable ni rectilínea, sino dialéctica —es decir, que es necesario adaptarse a la realidad cambiante— y a invitarles a estudiar cuidadosamente la actividad bolchevique en 1917, a fin de que se persuadan de que el partido bolchevique no se limitó a repetir constantemente una misma consigna, sino que cambió varias veces sus consignas según las circunstancias.

Los Comités de Defensa de la Revolución

Las jornadas de mayo en Barcelona han hecho revivir ciertos organismos que, durante estos últimos meses, habían jugado un cierto papel en la capital catalana y en algunas localidades importantes: los Comités de Defensa. Se trata de organismos principalmente de tipo técnico-militar, formados por los sindicatos de la

CNT. Son éstos, en realidad, quienes han dirigido la lucha **3**, y quienes constituían, en cada barrio, el centro de atracción y organización de los obreros revolucionarios. Partiendo de lo que es, nuestro partido preconizó la ampliación de estos organismos para su transformación en Comités de Defensa de la Revolución formados por los representantes de todas las organizaciones revolucionarias. El POUM propuso su creación no solamente en los barrios, sino en todos los lugares de trabajo, y la constitución de un Comité Central encargado de coordinar la acción de todos los comités de base. Su iniciativa no tuvo un resultado práctico inmediato. Nuestros militantes actuaron en estrecho contacto con los Comités de Defensa existentes, pero no llegaron a crear un solo comité que estuviese en armonía con nuestra concepción.

Actualmente, el partido continúa repitiendo la misma consigna y da instrucciones concretas a todas sus secciones para que la difundan y dirijan todos sus esfuerzos en hacerla realidad. ¿Tendrá éxito nuestro objetivo? La experiencia lo dirá; pero en todo caso, no renunciamos a lanzar consignas que se adapten mejor a la realidad concreta de cada momento, y en caso necesario a relegar a un segundo plano la de los comités si las circunstancias exigen momentáneamente otra, para situarla de nuevo en primer plano cuando las circunstancias varíen. Tal fue el caso de la consigna lanzada con ocasión de una reciente crisis del Gobierno de Cataluña, "formación de un Gobierno constituido por todos los representantes de todas las organizaciones obreras", gobierno al cual se le asignaba como misión principal la convocatoria de un congreso de delegados de los sindicatos, las organizaciones campesinas y los combatientes; tal fue también el caso de la consigna "constitución de un gobierno CNT-UGT", preconizado con ocasión de la formación del gobierno contrarrevolucionario de Negrín, paralelamente al de la creación de Comités de Defensa de la Revolución.

¿La existencia previa de la dualidad de poderes es indispensable para la victoria proletaria?

Para terminar, queremos someter a un rápido examen la tesis según la cual la premisa indispensable para la victoria proletaria es la existencia de la dualidad de poderes.

Apresurémonos a declarar que nos negamos a otorgar la cualidad de *dogma de fe* a esta tesis. La creación de comités, soviets, u otros organismos revolucionarios de masas, y la dualidad de poderes resultante, constituye un instrumento poderoso y muy eficaz en manos de los trabajadores; pero tenemos la absoluta convicción de que la conquista del poder político por el proletariado, en nuestro país, es posible sin que existan previamente los órganos del poder. ¿Puede negarse, quizás, la posibilidad de que en un momento determinado la clase obrera, después de una

3/ En la historiografía sobre la Guerra Civil española existe un vacío casi absoluto sobre los Comités de Defensa, existentes en cada barrio de Barcelona. Como muy acertadamente afirmaba Nin fueron éstos los que organizaron la lucha callejera en mayo de 1937. Son estos Comités de Defensa los que explican el alzamiento *espontáneo* de la ciudad de Barcelona, si por *espontaneidad* entendemos que las barricadas y la movilización obrera se produjo sin orden alguno de los órganos de dirección cenetistas.

insurrección victoriosa **4**, tome el poder y se constituya un gobierno compuesto por representantes de organizaciones revolucionarias, que hubieran tomado el mando de la insurrección? ¿Deberíamos entonces rechazar, por fidelidad estúpida a un esquema abstracto, el formar parte de ese gobierno? ¿Ese gobierno no sería un gobierno obrero y revolucionario? Y si esta hipótesis, perfectamente factible, se realizara, la creación de órganos adecuados de poder se plantearía como un problema posterior a la conquista de éste por el proletariado.

Estas son, sucintamente expuestas, algunas reflexiones que nuestra realidad revolucionaria nos sugiere sobre el problema de los órganos de poder. Sabemos de antemano que no dejarán satisfechos a los amigos de resolver todos los problemas con ayuda de una receta sabiamente elaborada, buena para todos los casos. Pero el marxismo, que no es un dogma, sino un método para la acción, rechaza las fórmulas para actuar sobre la realidad viva y mutable. Lo fundamental es la estrategia revolucionaria; en cuanto a la táctica, hay que adaptarla a la realidad. Evidentemente, esto es más difícil que repetir mecánicamente una fórmula.

Barcelona, 19 mayo 1937.

4/ Nin parece haber abandonado definitivamente la tesis de que existía la posibilidad de una toma del poder no violenta, tan obstinadamente defendida por la dirección del POUM hasta las Jornadas de Mayo: "Habíamos incluso afirmado que la clase obrera podía tomar el poder sin necesidad de recurrir a la insurrección armada" (NIN, Andrés: El significado y alcance de las Jornadas de Mayo frente a la contrarrevolución. Manifiesto escrito por Nin, pero suscrito por el Comité Central del POUM y distribuido profusamente en Barcelona, tras los Hechos de Mayo).

La dualidad de poderes en la España republicana a comienzos de la Guerra Civil

Pierre Broué

Toda revolución tiene importantes implicaciones en el terreno del Estado. Mientras que una revolución política deja en lo esencial subsistir el antiguo aparato del Estado, reformado y modernizado, incluso a través de las formas de transición, una revolución social implica más que una modificación profunda, la destrucción del antiguo aparato de Estado correspondiente a la dominación social derrocada, y la construcción de un Estado de nuevo tipo basado en las fuerzas sociales que han realizado la revolución en su beneficio. Tal es la enseñanza de las revoluciones burguesas de los siglos XVII al XIX.

El siglo XIX vio el comienzo de las revoluciones proletarias. En Rusia, el antiguo aparato del estado zarista fue derrocado, y fueron los soviets (consejos) de diputados obreros, campesinos y soldados los que asumieron localmente el poder y se convirtieron en el armazón del Estado obrero en el que los marxistas ven la "dictadura del proletariado". En Alemania, fue una red cerrada de consejos de obreros y de soldados (*Arbeiter und Soldatenräte*) lo que la punta de lanza de la contrarrevolución, los *cuerpos-francos*, debieron abatir para restaurar con la República de Weimar la sociedad burguesa de libre empresa amenazada en aquel momento. Tras la I Guerra Mundial, tanto en Hungría como en Italia, o en Austria y Polonia en 1919, en Alemania de nuevo en 1923 y también en la segunda revolución china, surgieron de nuevo organismos de tipo *soviético*, es decir, elegidos en el marco de las unidades de producción, producto a menudo de comités de huelga y a veces de "comités de acción" resultantes de acuerdos unitarios entre organizaciones obreras, asumiendo de cualquier forma la totalidad del poder frente al Estado contra el que se dirigía el movimiento proletario que representaban.

De hecho, hacia 1930, parece que a pesar de la afloración de soviets en la prensa de la Internacional comunista y de sus secciones, el movimiento *soviético* estaba en reflujo. La palabra —y el fenómeno— serán en adelante ligados en el espíritu de todos a la política bolchevique y a la revolución rusa. Por otra parte, como señalaba Trotsky, los soviets de Rusia habían sido prácticamente reconocidos, adoptados y propagados por el conjunto de los partidos obreros, incluso cuando estos últimos no eran partidarios de una revolución que les atribuyera todo el poder. Ahora bien, tras la revolución rusa, no ocurrió lo mismo, y los adversarios de una revolución de tipo bolchevique se guardaban bien de cualquier iniciativa que pudiera facilitar la aparición o la reaparición de soviets.

Nadie pone en duda la aparición y la existencia —durante un tiempo limitado— en la España *republicana*, es decir en la zona en la que fue vencido el levantamiento militar, de ciertos organismos de poder revolucionario, distintos indudablemente del poder constitucional. Pero las divergencias aparecen en cuanto se trata de

interpretarlos: organismos temporales, nacidos de las necesidades estratégicas de una guerra civil, desarrollo excepcional en suma del Estado republicano en circunstancias excepcionales, como piensan aquellos para los que la revolución desencadenada por el "golpe" fue una revolución democrática, o, al contrario, elementos prefiguradores de un nuevo tipo de poder cercano al modelo "soviético", como piensan quienes ven en la revolución una revolución obrera y campesina llevada a cabo no sólo contra el ejército insurrecto, sino contra el conjunto de las clases poseedoras españolas, incluida la burguesía. Divergencias importantes, como puede verse, puesto que marcan dos interpretaciones radicalmente opuestas de la propia revolución española.

Aunque hayamos indicado ya nuestra opinión sobre esta cuestión en las diferentes obras que hemos dedicado a la revolución y a la guerra de España, nos esforzaremos por tratar este problema en sí mismo, utilizando de la forma más sistemática posible elementos aportados por otros autores. Tras haber recordado brevemente la historia de la construcción de la dualidad de poderes, nos esforzaremos por extraer los rasgos esenciales de esta construcción a través de los organismos regionales de poder revolucionario antes de analizar los factores y de enumerar las etapas de su liquidación.

Dualidad o autonomización de los poderes

Llegado a Barcelona el 5 de agosto de 1936, el excelente observador Franz Borkenau anotaba en su diario inmediatamente que podían generalizarse las observaciones hechas la víspera al cruzar la frontera: "El doble régimen entre la administración ordinaria y los comités que he descubierto allí existe también en Barcelona y parece existir en toda España" /1.

El día 22, tras haber anotado que en Barcelona se hablaba de Valencia como de "la ciudad en la que los trabajadores están en el poder" y que parecía existir en Levante "una especie de dictadura del proletariado local", rectificaba ligeramente su juicio: "En el plano constitucional, Valencia puede casi ser hoy una república soviética independiente. Socialmente, sin embargo, es menos *soviética* que Barcelona" /2.

El 25 de agosto, finalmente, a su llegada a Madrid, anotaba que la capital española daba la impresión de una "ciudad en tiempo de guerra, pero menos que una ciudad en una revolución social": "Aquí el elemento gubernamental es mucho más visible (...). En Madrid un permiso de residencia de la policía ordinaria basta: sería inútil en Barcelona. No existe siquiera en Madrid comité político central" /3.

Estas anotaciones en vivo, admirablemente matizadas, permiten retener como punto de partida de nuestro estudio la apreciación global dada por otro conocedor de la realidad revolucionaria española, Burnett Bolloten: "El Gobierno de José Giral poseía el poder nominal, pero no el poder mismo, pues este último estaba dividido en innumerables fragmentos, diseminado en miles de ciudades y pueblos

1/ Franz Borkenau, *The Spanish Cockpit*, p. 76

2/ *Ibidem*, p. 115

3/ *Ibidem*, p. 124

en los que comités revolucionarios habían establecido su control sobre las oficinas de correos y telégrafos, las estaciones de radio, las comunicaciones telefónicas, organizado patrullas de policía y tribunales, el control de las carreteras y fronteras, los transportes y el reavituallamiento, y creado unidades de milicia para el frente. En definitiva, en ninguna parte de España ejercía el gobierno de José Giral autoridad real” /4.

Y resulta muy tentador seguir aquí, sobre la base de este análisis, al trotskista M. Grandizo Munis cuando escribía a propósito de lo anterior: “La situación tras el 19 de julio puede caracterizarse por una atomización inacabada del poder político en manos del proletariado y de los campesinos. Empleo el término de atomización porque el de *dualidad* es insuficiente para dar una imagen exacta del reparto real de las fuerzas. Dualidad implica dos poderes en conflicto, rivales, y capacidad y voluntad de combate por una y otra parte. No era el caso del poder burgués...” /5.

Es el mismo autor quien, para designar los comités que recubrían el territorio de la España *republicana* tras el 19 de julio propuso el sugerente término de comités-gobierno. Nunca sin duda, ni siquiera durante la revolución rusa, se había asistido a tal floración de órganos de poder revolucionario de hecho, que atacaran de forma simultánea a las clases poseedoras (propietarios terratenientes y capitalistas) y a las columnas de su régimen, la Iglesia y el Ejército. Ningún partido, ninguna organización, llamó a su constitución, pero todos los militantes organizados en todos los partidos obreros y los sindicatos, así como una masa considerable de trabajadores inorganizados, participaron en su creación y les reconocieron como su dirección.

En las primeras horas del levantamiento militar, en el movimiento de la organización de la resistencia, aparecieron en todas partes, en las fábricas, en los barrios, los pueblos, los cuarteles y los navíos de guerra, y en los servicios públicos. Cada comité, en su dominio propio, era la única autoridad, la única ley, la encarnación de la voluntad común. ¿Cómo eran designados? Indudablemente, en la base eran elegidos —aunque fuera por aclamación— sin distinción de pertenencia política, sobre la base de la confianza de que gozaban los candidatos, con la preocupación, sin embargo, de representar correctamente todas las tendencias que combatían con las armas en la mano el levantamiento de los generales.

La liquidación de los focos facciosos, el necesario *terror* contra los grandes propietarios o capitalistas considerados como los verdaderos responsables del *pronunciamiento*, la liquidación de la Iglesia católica como fuerza económico-social y como aparato, la toma de las fábricas y de las grandes fincas y su explotación —muy a menudo de forma colectiva— fueron obra suya, igual que la organización del combate armado a lo largo de los frentes que se dibujaban, a través de las columnas, constituidas rápidamente, de las milicias de partidos y sindicatos.

No fue sino en el escalón inmediatamente superior y en primer lugar el de las ciudades más importantes, donde la constitución de los comités-gobierno rompió con la práctica de la democracia directa. Allí, los comités fueron en su mayor parte resultado de negociaciones y de acuerdos entre organizaciones, sindicatos y

4/ Burnett Bolloten *The Grand Camouflage*, p. 42

5/ G. Munis, *Jalones de derrota: promesa de victoria*, p. 244

partidos, que concluían bien en una representación paritaria de todas, bien en una representación proporcional en función de una evaluación de las relaciones de fuerza y de la influencia respectiva de cada una. Frecuentemente, los comités locales así constituidos resultaban de la suma –eventualmente en número que les daba la mayoría– de los representantes de los sindicatos, UGT y sobretodo CNT, a los de los partidos políticos miembros del Frente Popular, unos y otros designados por sus respectivos estados mayores.

Sin poner en duda la autoridad ni siquiera la representatividad de tales comités resultantes de acuerdos entre organizaciones, hay que admitir que aquí la influencia de las burocracias de los partidos y sindicatos se hacía sentir más que en los comités de base y marcaba una clara diferenciación en relación al esquema *soviético*. Excepciones conocidas obligan sin embargo a matizar esto. En Lérida, controlada por el POUM, el poder pertenecía a una Junta de sindicatos (CNT, UGT, y FOUS, controlada por el POUM), y las organizaciones burguesas republicanas estaban excluidas de ella. En Fraga, en Aragón, feudo de la CNT, el comité estaba estructurado sobre la base de delegados de los centros de producción, es decir, sobre una base propiamente *soviética*...

Fijémonos, sin embargo, en este hecho capital: ninguna organización obrera, partido o sindicato, llamó a la constitución de los comités-gobierno, ni a la designación de organismos locales, regionales o de un organismo nacional que emanara de ellos. El único partido que, en aquella época, se reclamaba abiertamente del ejemplo bolchevique y del modelo soviético, el POUM, se contentaba con subrayar, por la boca de Andrés Nin, que era la tradición de organización, ya antigua del proletariado español, que le diferenciaba del proletariado ruso de 1917, lo que explicaba la no aparición de soviets. La intervención de los estados mayores de los partidos y sindicatos, considerada así como normal por todas las corrientes, jugará un papel más considerable aún en el nacimiento de los poderes revolucionarios regionales que constituyeron los primeros elementos de la dualidad de poderes propiamente dicha.

El nacimiento de los poderes revolucionarios regionales

La historia de la dualidad de poder en la España republicana debe ser comprendida verticalmente. Tras una duración oscilante entre unos días y algunas semanas, fueron construidos, en efecto, por encima de los comités-gobierno unos organismos de poder, reconocidos por ellos y que extendían su autoridad a regiones enteras. Los historiadores se han complacido frecuentemente en subrayar un aspecto real de las circunstancias y condiciones de su aparición, subrayando que se basan a menudo, si no en el *cantonismo* –la expresión es demasiado polémica– al menos en el particularismo, incluso el separatismo que caracteriza una España nación inacabada. Sin descuidar este aspecto real, no lo colocaremos en el centro de las explicaciones propuestas para el desarrollo concreto de estos organismos.

La originalidad de Cataluña, que acababa de recobrar su vieja identidad con el

término de “Generalidad” fue reconocida por la constitución republicana, y disponía incluso, con su *consejo* de un verdadero gobierno. El presidente de la Generalidad, el catalanista Lluys Companys gozaba de una indudable popularidad, y era él quien, en Cataluña, encarnaba el poder del Estado tradicional –o si se prefiere, constitucional– frente a los comités-gobierno y, al menos en Barcelona, a la todopoderosa CNT cuyos militantes habían conseguido, con las armas en la mano, la victoria sobre los generales insurrectos.

El 20 de julio, a primeras horas de la tarde, tras la derrota definitiva de los insurrectos, el presidente tomaba la iniciativa de un gesto hacia los vencedores. Envío emisarios a la asamblea local de la federación de la CNT, a fin de invitar a los responsables a una reunión. A la delegación cenetista –García Oliver, Durruti y Santillán, entre otros– el presidente declara entonces:

“Vosotros habéis vencido, y todo está en vuestro poder. Si no tenéis necesidad de mí, o si no me queréis como presidente de Cataluña, decídmelo ahora y me convertiré en un soldado más en la lucha contra el fascismo (...). Si creéis, al contrario, que en este puesto (...) puedo, con los hombres de mi partido, mi nombre y mi prestigio (...) ser útil en esta lucha, podéis contar conmigo” /6.

Según su propio relato, los delegados de la CNT se contentaron con tomar nota, pero aceptaron, sin embargo, la propuesta que les hizo inmediatamente después, de unirse, en la habitación contigua donde esperaban, convocados él mismo, los dirigentes de las demás organizaciones obreras (UGT, PSUC y POUM) y republicanas (Izquierda Republicana, Unión Republicana, Unión de Rabassaires). A todos estos interlocutores, propone entonces la formación de un comité de milicias que tendría según él por tarea la de “orientar toda la vida de Cataluña” y “organizar las fuerzas armadas para combatir a los fascistas”.

La propuesta pareció aceptable para todos, y, en primer lugar, a la mayoría de los dirigentes de la CNT. La decisión no será, sin embargo, tomada formalmente más que al día siguiente, a la salida de una asamblea general extraordinaria de la CNT. A pesar de la oposición manifestada por García Oliver, la CNT y la FAI se pronunciaron por la “colaboración y la democracia”, decidieron mantener a Companys en la presidencia y sostenerle, y aceptaron la constitución de un comité de milicias en el que estarán representados por igual la corriente libertaria (CNT y FAI), la corriente marxista (PSUC y POUM) y la corriente republicana. Así nació el Comité Central de las Milicias antifascistas de Cataluña, constituido gracias a los buenos oficios del presidente Companys, reconocido por el conjunto de los comités-gobierno como el verdadero gobierno revolucionario de Cataluña, y temido en virtud de ello por todos los adversarios de la revolución que seguía su curso...

El Comité Ejecutivo Popular del Levante

El desarrollo de los acontecimientos en Valencia fue sensiblemente diferente debido a un largo período de incertidumbre a propósito la actitud de la guarnición, mandada por un oficial masón, el general Martínez Monje, que se pronunciaba a favor de la República, pero que exigía el fin de la huelga general –decretada el 19 siguiendo la

6/ In Peirats, *La CNT en la revolución española*, p. 162

convocatoria de la CNT y el cese del bloqueo de los cuarteles emprendido de forma preventiva. El 21 de julio, los representantes del comité de huelga CNT-UGT entraban en el comité revolucionario del Frente Popular al que habían pedido, que, para no molestarles, fuera rebautizado como Comité Ejecutivo Popular.

Pero los cuarteles permanecían cerrados y los oficiales aparentemente divididos. El gobernador civil, un republicano, rechazaba cualquier presión sobre la guarnición, cualquier armamento de los obreros. Pronto recibió un refuerzo importante, con el envío por parte del gobierno de Madrid de una Junta delegada dirigida por Carlos Esplá y Martínez Barrio, que se planteaba como garante de la lealtad de los jefes militares, exigía la vuelta al orden, la vuelta al trabajo, el fin del bloqueo de los cuarteles y la disolución del comité ejecutivo popular. Tras muchas peripecias –la llegada al puerto de navíos de guerra leales, el fracaso de una expedición sobre Teruel en el curso de la cual los guardias civiles, en mayoría por decisión de la Junta, masacran a los milicianos obreros y se pasan al enemigo, motines en los cuarteles seguidos de distribución de armas– el Comité ejecutivo popular decidía finalmente el 31 de julio lanzar el asalto contra los cuarteles. Caídos estos, Madrid llamó a la Junta delegada y reemplazó al gobernador civil por un oficial que, desde el comienzo, había colaborado con el Comité ejecutivo.

El Comité ejecutivo popular aparecía pues como un poder revolucionario regional nuevo, que se había impuesto tras un largo conflicto con el gobierno. Como el comité central de Cataluña, estaba formado por representantes de los partidos del Frente Popular, del POUM y representantes de los sindicatos, UGT y CNT así como de la FAI. En aquel momento era el verdadero gobierno revolucionario y actuaba como tal, al menos en Valencia y sus alrededores, incluso si su autoridad seguía siendo nominal sobre el resto de la provincia.

El Consejo de Defensa de Aragón

Situación diferente también en Aragón. En Zaragoza, el principal dirigente de la CNT, Miguel Abos, había confiado en el gobernador Vera Coronel y en el jefe de la guarnición, el general Cabanellas, ambos masones como él, y había persuadido a sus camaradas –al contrario de lo que ocurrió en Cataluña– de no tomar contra el ejército iniciativa alguna. La respuesta obrera, una huelga general que el Ejército aplastó en diez días, fue demasiado tardía. Casi todo Aragón cayó en unos días en manos de los rebeldes.

Su reconquista parcial –pues Zaragoza permanecerá en manos nacionalistas– fue durante los meses del verano obra de las columnas de milicianos salidas de Cataluña, y en particular las de la CNT, cuyo papel en la colectivización de la agricultura y la liquidación de los grandes propietarios es conocido: una *ocupación militar* por tropas obreras venidas de Cataluña, que no dejó de tener dificultades.

No fue sino en septiembre de 1936 cuando el comité regional consiguió reunir en Bujaraloz una asamblea que reunía a los delegados de su organización de Aragón y los de las columnas de la CNT que se encontraban allí. Les propuso la constitución de un organismo regional de poder, el cual, como consecuencia de la negativa de los socialistas y de los republicanos, no comprenderá finalmente más que anarquistas: el Consejo de Defensa de Aragón, presidido por el anarquista

Joaquín Ascaso, que tuvo por sede Fraga a partir del 15 de octubre y extendía su autoridad a toda la zona *republicana* de Aragón. Esta decisión, inspirada sin duda alguna por Durruti, condujo, como subraya César M. Lorenzo en una excelente fórmula, a que “lo que los libertarios catalanes no habían osado hacer, es decir, a tomar todo el poder, los libertarios aragoneses lo intentarían”⁷.

Otros organismos regionales de poder

En Asturias, la astucia del coronel Aranda, también reputado *republicano*, había permitido a los militares alzados conservar Oviedo e inmovilizar en su sede fuerzas obreras considerables. Hacia fines de julio, en la zona minera, en Sama de Langreo, se constituía bajo el impulso de los dirigentes socialistas asturianos un Comité Provincial que integraba a representantes de las demás formaciones antifascistas, CNT y FAI incluidas. Al mismo tiempo, y con una composición poco más o menos idéntica, se forma el Comité de guerra de Gijón, claramente orientado, en este caso, por los anarquistas que predominaban en este bastión industrial. La paradoja es aquí la dualidad de poderes entre dos organismos casi idénticos, ambos de carácter revolucionario, dos poderes regionales del *segundo poder*. Coexistieron, sin embargo, de forma pacífica, incluso cuando, a partir de septiembre, el comité Provincial se instala, como el comité de guerra, en Gijón...

En Santander y la provincia, el poder era ejercido, desde finales de julio, por el comité del Frente Popular ampliado a representantes de la CNT y de la FAI. Fenómeno casi único, las milicias, aquí, estaban constituidas sobre una base unitaria, fundiéndose en las mismas unidades milicianas anarquistas, socialistas o comunistas.

En Málaga, los obreros se adelantaron incendiando y luego tomando los cuarteles. La autoridad revolucionaria pertenecían en primer lugar a un comité de defensa CNT-UGT, luego a un comité de salvación pública formado de representantes de los partidos y de los sindicatos y con una influencia anarquista predominante. Subsistía en Málaga una municipalidad –depurada–, un consejo provincial sin autoridad, y un gobernador civil sin poder.

Un caso particular: el País Vasco

El País Vasco constituye desde muchos puntos de vista una excepción notable. Allí, donde subsistía una importante influencia de la Iglesia, donde se pensaba generalmente que los nacionalistas vascos, conservadores, iban a inclinarse del lado de la rebelión igual que los suyos en Navarra, no se daba un ascenso revolucionario comparable al de Cataluña o de Levante, incluso Asturias; no había comités-gobierno salvo en los pueblos mineros. El gobernador civil, miembro de la Unión Republicana, conserva toda su autoridad con el apoyo del Comité de Frente Popular que hace de él su presidente.

Para integrar a la CNT –cuyo papel había sido decisivo en las batallas contra los cuarteles– y a los nacionalistas vascos –que han dudado bastante tiempo– se constituyó, a fines de julio, un Comisariado de defensa de Vizcaya presidido por

⁷ César M. Lorenzo, *Les Anarchistes espagnols et le Pouvoir*, p. 149

un miembro de Izquierda Republicana. La adhesión a la república del Partido Nacionalista Vasco, el comienzo de las negociaciones con Madrid por un estatuto de autonomía, condujeron a la disolución simultánea del comité de Frente Popular y del comisariado de defensa. En su lugar, era constituida una Junta de defensa, a mediados de agosto, en la que —caso único— partidos y sindicatos obreros estaban en minoría frente a los representantes de la Izquierda y de la Unión Republicana, y sobretodo del Partido Nacionalista Vasco, que conseguía en ella la parte del león. La Junta estaba presidida por el gobernador civil Echevarria Novoa, siempre el mismo.

En esta región —la única en que, como subraya César M. Lorenzo, no hubo ninguna colectivización de fábrica o de propiedad agrícola— ⁸, la reacción al levantamiento militar condujo así a un gobierno regional de Frente Popular ampliado notablemente por la derecha y cuyo centro de gravedad tendería a desplazarse hacia los elementos política y socialmente conservadores del Partido Nacionalista Vasco al que únicamente el centralismo limitado de los generales había acabado por lanzar al campo republicano....

Caracteres contradictorios de estos organismos

Casi no hay dificultades en ponerse de acuerdo en la afirmación de que los organismos de poder contruidos inmediatamente después del pronunciamiento a escala regional, el Comité Central de Cataluña, el Comité Ejecutivo Popular de Valencia, etc, eran organismos de poder revolucionario, si se prefiere, gobiernos revolucionarios. Pero también es necesario decir porqué.

Pensamos, por nuestra parte, que estos organismos eran organismos de poder revolucionario porque eran reconocidos por los comités-gobierno locales, los comités de obreros, de campesinos, los comités de guerra de las milicias, los consejos de gestión de las empresas, y , de una cierta forma, emanaban de ellos. También porque se veían llevados a coordinar las actividades y las iniciativas de los comités-gobierno y de las milicias, a centralizar, prever, organizar. Constituían o proporcionaban el mando de las milicias, esbozaban la concentración de las fuerzas militares o su reparto en los frentes, coordinaban al menos las operaciones militares, tomaban a su cargo los problemas de reavituallamiento, de equipamiento y de armamento de las milicias, que superaban evidentemente el horizonte local. Tenían que unificar las actividades de control y de represión, arreglar los problemas más urgentes de la *justicia* así como de la *policía*, zanjar los conflictos de autoridad, en definitiva, responder a las exigencias del momento conforme a la aspiraciones de las masas que les apoyaban y esperaban precisamente de ellos la realización de esas tareas. El Comité central de Cataluña y el Comité ejecutivo popular de Levante organizaron ambos un Consejo de Economía. Estos, y los demás comités regionales, constituyeron mandos y estados mayores de milicias, repartían a los especialistas militares, instalaban patrullas de control, comisiones de seguridad, tribunales revolucionarios. Eran a la vez legislativo y ejecutivo,

⁸/ *Ibidem*, p. 167

pero, ésto, evidentemente, en el marco revolucionario puesto en pie por el movimiento de las masas en respuesta al levantamiento militar, y las medidas que tomaban iban en el sentido de la consolidación, incluso de la administración y la organización, de las conquistas de julio de 1936.

Por otra parte, es aquí donde residían las raíces de su autoridad y consiguientemente de su poder: eran arrastrados por el movimiento de las masas que esperaba de ellos la realización de sus aspiraciones, y era precisamente esta realización lo que les servía de programa. Una prueba clara de ello es que independientemente de la composición política de estos comités, de la *mayoría parlamentaria* dominante eventualmente en su seno, fue siempre, en estos meses de julio y de agosto de 1936, la política exigida por las tropas de la organización obrera más poderosa la que reflejaron en sus decisiones e iniciativas: el Comité central de las milicias antifascistas de Cataluña hizo la política de los milicianos de la CNT, de los obreros organizados en sus empresas colectivizadas en Barcelona o en Lérida, no de quien era eventualmente su secretario general y portavoz, el catalanista Jaume Miravittles, hombre de confianza de Companys.

Así se explican las tentativas esbozadas en un primer momento a partir del aparato del estado republicano de suprimir o restringir el campo de acción de estos comités regionales: la tentativa de la Junta delegada en Valencia de disolver el Comité ejecutivo, la de la Generalidad de Cataluña de constituir en agosto un consejo ampliado al PSUC y la UGT y que constituiría un poder realmente en competencia –iniciativa que la CNT detendrá mediante un verdadero ultimátum... Así se explican, en la fase siguiente, la humildad y la tenacidad con la que el poder constitucional continuaba decretando y sancionando de hecho con su “legalidad” las iniciativas tomadas al margen, incluso en su contra, por los organismos de poder revolucionarios: después de todo, ¿no decretó Companys la formación de las milicias que montaban ya la guardia ante su despacho y filtraban a sus visitantes?.

Así se explica también, sin duda, que un revolucionario tan experto como Andrés Nin pudiera creer y afirmar que la “dictadura del proletariado” se había pura y simplemente realizado en España, sin soviets, bajo la forma específica del gobierno de los comités-gobierno, de las organizaciones obreras y del comité central, llegando a negar la dualidad de poderes que la supervivencia del *consejo* y del *presidente* de la Generalidad, aunque parecieran un adorno hacía difícilmente negable....

El “vínculo” con la República

Si nos atenemos únicamente a las formas exteriores, había con toda evidencia dualidad de poderes incluso si, durante los meses del verano de 1936, se trataba de una dualidad muy desigual. Ya hemos visto que el gobierno central era totalmente impotente, que se veía reducido, para recordar su existencia –como señala ferozmente Munis– a vestir a sus miembros con el mono de los milicianos y a pasearlos por los parajes del frente. Pero hay más, pues la dualidad de poder se traducía en el seno mismo de los organismos que constituían el “segundo poder”.

La muy simple –y muy frágil– supervivencia del gobierno de la República, –la

historia demostrará que constituía un factor decisivo— se tradujo, en primer lugar, en la composición misma de los organismos regionales de poder revolucionario. Estos comprendían en todas partes —salvo inicialmente en Aragón— a representantes de los partidos republicanos burgueses, sin ninguna base de masas, ninguna fuerza organizada real, una débil existencia —cuando existían— en las fábricas, los pueblos, las columnas. La presencia de los delegados de estos partidos en todos los comités regionales junto a los de los partidos socialista y comunista, en primer lugar, constituye el recuerdo, la continuidad con la República bajo la forma de la política del Frente Popular, constituida, como se sabe, con la garantía del mantenimiento de la propiedad privada y de las instituciones legales.

El Estado tradicional, el *primer poder*, se mantenía igualmente —aunque en punteado— en la permanencia —incluso mediante cambio de individuos— de representantes del poder ejecutivo, en particular de los gobernadores civiles. Ciertamente tuvo que dar marcha atrás, un poco en todas partes —salvo en el País Vasco— y renunciar a imponer, en Valencia o en Málaga, a los gobernadores republicanos que hasta el final habían intentado evitar el armamento de los obreros y que se habían dedicado más a prevenir la revolución que a combatir a los generales. Pero el gobierno designó entonces a otros gobernadores, elegidos con cuidado precisamente entre los hombres más representativos del nuevo poder, militares como el coronel Arin en Levante, pero más a menudo en otras partes representantes socialistas como Francisco Rodríguez en Málaga, Belarmino Tomás en Asturias.... No eran ciertamente en aquel momento, como gobernadores civiles, más que simples fantoches, y generalmente responsables que nada distinguía de sus camaradas miembros de los mismos comités. De hecho, encarnan la continuidad y la legitimidad, la permanencia al menos teórica de las instituciones del *primer poder*, apaciguan y domestican a sus irreductibles adversarios, crean las condiciones de una futura contra-ofensiva: estaban allí sencillamente para días mejores y circunstancias favorables, siendo lo esencial que estuvieran allí.

En fin, y claramente, ¿no estaba el principal límite del poder de los organismos regionales del *segundo poder* precisamente en que no eran sino poderes regionales? Franz Borkenau lo señaló enseguida: en Madrid, no había ni siquiera lo que había en todas partes, un comité político central. En la capital, en efecto, ningún comité, ni de Frente Popular ampliado, ni siquiera de Frente Popular estricto, ningún organismo que pudiera, incluso aparentemente, competir con el gobierno legal. Ningún partido, ningún sindicato, tomó la iniciativa en este sentido. El PC y la CNT, en la vanguardia sin embargo en los hechos, como escribía Cesar M. Lorenzo, “han dirigido Madrid, su defensa y los asuntos civiles bajo la cobertura de un gobierno reducido a funciones representativas” /9.

Tal situación, responsable de la mayor parte de los desórdenes, puesto que cada organización constituía de alguna forma un Estado dentro del Estado con sus propias instituciones, no puede evidentemente explicarse por el carácter propio de la situación política y militar en Madrid, aunque se hayan hecho tentativas en ese

9/ *Ibidem*, p. 210

sentido, sino sólo por la política de las organizaciones obreras concernidas, que obligadas a tomar el poder conjuntamente en Barcelona, Valencia, Gijón o Málaga, se negaban a hacerlo en Madrid porque ello hubiera significado el establecimiento de un *segundo poder* a nivel nacional, en otros términos, el desarrollo final de una revolución que no habían querido, un final que no querían a ningún precio. César M. Lorenzo escribe del Comité central de las milicias de Cataluña que era un *gobierno revolucionario camuflado*. Es probablemente eso lo que los dirigentes anarquista creyeron construir, pero no lo que construyeron.

En último análisis, los organismos regionales de poder revolucionario fueron levantados por las organizaciones obreras, partidos y sindicatos, bajo la doble presión del peligro fascista y del ascenso de masas que exigían de ellos que tomaran el poder. Obligados a tomarlo, evitaron tomarlo totalmente, preservando en la cúspide a los hombres y las instituciones del gobierno central así como de la Generalidad, guardando a su lado a los hombres de los partidos republicanos que les aseguraban mediante su presencia que el paso decisivo no había sido franqueado, limitándose a un nivel regional en el que la situación militar podía servir de justificación, facilitando ante todo su posibilidad de retroceder y de no franquear el paso que no querían franquear, el de la ruptura con la burguesía y su legalidad, el marco mismo en el que se inscribía la política de Frente Popular.

Solo así se puede explicar que los organismos regionales de "segundo poder", los gobiernos de los comités-gobierno pero que no emanaban de ellos, sino de los estados mayores de los partidos, gobiernos de las organizaciones obreras ampliados a individualidades que representaban a partidos burgueses fantasmagóricos, pudieran a la vez ser considerados como gobiernos *soviéticos* y como organismos de colaboración que preparaban el restablecimiento del poder republicano.

La liquidación de los poderes revolucionarios

De hecho, la liquidación de los poderes revolucionarios comenzó algunas semanas después de su aparición, y fue realizada por medios puramente políticos.

Los meses del verano de 1936 fueron los de la explotación por los nacionalistas de sus éxitos logrados durante el pronunciamiento. Las milicias obreras y campesinas mal armadas, mal equipadas, sin dirección, encajaron golpe tras golpe, sucediéndose las desbandadas más espectaculares y los actos del más puro heroísmo. Los nacionalistas recibieron la importante ayuda de los gobiernos de Hitler y de Mussolini, mientras se ponía en marcha la "no intervención" que aislaría al gobierno y, sobre todo, a los combatientes del campo *republicano*.

Es de este contexto del que los partidarios del mantenimiento a cualquier precio del Estado tradicional sacaban sus argumentos para la realización de su política amenazada un momento por la explosión revolucionaria de julio. El principal de ellos era sacado de la situación militar: era necesario un gobierno único, que goce de una autoridad real, capaz de dirigir, de organizar, de centralizar, un gobierno obedecido. A decir verdad, el argumento es en sí mismo irrefutable, aunque no dé respuesta a la cuestión de saber qué tipo de gobierno y qué tipo de Estado eran

necesarios para la victoria militar frente a los generales rebeldes. Pero ningún partido ni reagrupamiento propusieron una solución nueva, y al no ser contestada la existencia al menos teórica del Estado y de sus instituciones por nadie, este argumento jugaba a favor de la restauración, apoyándose en una situación dramática y expresando una necesidad vital.

El otro argumento, menos sólido sin embargo de lo que parece a primera vista, parece haber jugado un papel decisivo puesto que ha sido repetido con insistencia hasta en las filas –y sobre todo en la cúspide– de la extrema izquierda anarquista. Es el del contexto internacional, de la necesidad, a fin de poder ganar el apoyo de las *democracias* capitalistas, de preservar al menos las apariencias de la legalidad y de la continuidad constitucionales, de guardar los signos exteriores de una democracia parlamentaria y el beneficio moral de la “legitimidad” frente a unos *rebeldes*.

El conjunto de los partidos del Frente Popular, desde la Izquierda Republicana, el único, señala B. Bolloten, que intenta disimular el contenido y la amplitud del movimiento revolucionario de julio de 1936, hasta el Partido Comunista pasando por el Partido Socialista, se pronunciaban por un gobierno de tipo tradicional, conservando las instituciones republicanas, el presidente –y Manuel Azaña como presidente–, las Cortes, reconstituyendo el encuadramiento administrativo, comenzando por los gobernadores, pero también un ejército y una policía de tipo tradicional. La nueva correlación de fuerzas política exigía solamente que este gobierno fuera un gobierno de Frente Popular, pero que además de los partidos obreros, socialista y comunista, predominantes en él, que el primero asegurase su dirección, y que los representantes de los partidos republicanos burgueses formaran parte de él, en razón, por supuesto, de su *lealismo*, pero sobre todo de la necesidad de preservar, para el extranjero, la fachada republicana y constitucional del régimen. Es –lo han señalado numerosos observadores– en este sentido en que iba a presionar con fuerza, a partir de septiembre, el Gobierno de la Unión Soviética, que acaba de enviar a Madrid a su primer embajador, Marcel Rosenberg, y se preparaba para mandar armas y municiones, consejeros y técnicos. Así los partidos adheridos al Frente Popular encontraban poderosos argumentos en la situación militar para aplicar la política que era la suya y que la respuesta obrera y campesina de julio de 1936 había desbordado ampliamente....

Francisco Largo Caballero formó Gobierno el 4 de septiembre, sucediendo a José Giral. Partido Socialista y Partido Comunista ocupaban en él los puestos clave, y le conferían la autoridad de que disponían entre la clase obrera. Ni la CNT ni la FAI formaban parte de él por el momento, aunque las negociaciones sobre esta cuestión hubieran comenzado hacía días y fueran a prolongarse aún durante semanas. El primer paso, el paso decisivo, se había llevado a cabo: se ponía en pie un gobierno central que gozaba de la simpatía y del apoyo de amplios sectores, a menudo mayoritarios, de trabajadores, un gobierno al que no se podía tratar de forma despectiva, ni barrer de un manotazo, y aún menos combatir con las armas so pena de aparecer como alguien que divide gravemente en el momento de supremo peligro: el lugar dejado prácticamente vacío en tiempos del Dr. Giral, no lo ocuparon los revolucionarios, pero el gobierno que lo tomó en sus manos no tendrá la misma inexistencia.

El desarrollo de los acontecimientos políticos en Catalunya proporcionará la prueba de que la situación había cambiado. Mientras que el precedente 3 de agosto, una simple amenaza de la CNT y de la FAI había bastado para impedir a Companys constituir un gobierno de la Generalidad que comprendiera al PSUC y la UGT, a partir de septiembre, los dirigentes de las dos organizaciones piensan y escriben: "No podíamos luchar contra el gobierno que iba a constituirse puesto que toda lucha y toda oposición constituían un debilitamiento". Tras largos debates a puerta cerrada, el congreso de la CNT de Cataluña se decidió a favor de la entrada de sus representantes en el nuevo gobierno, cuya composición fue publicada el 27 de septiembre. Por un artificio un poco pueril —concesión al amor propio y a la fidelidad a los principios de los anarquistas— se le bautizó como Consejo de la Generalidad. El hecho nuevo era que en él estaban, al lado de los partidos del Frente Popular, formaciones revolucionarias, la CNT —aprobada por la FAI— y el POUM, que se negaba a cortarse de la CNT. De un día para otro el Comité central de las milicias antifascistas de Catalunya, todopoderoso poder revolucionario hasta aquel momento, se disolvió: ¿no son los mismos hombres, las mismas organizaciones que le constituían quienes forman el consejo? Esto era lo que en todo caso respondían firmemente, frente a las acusaciones provenientes de la extrema izquierda, los hombres que, tanto en la CNT como en el POUM, se unían así a la "colaboración gubernamental" radicalmente contraria a sus principios.

Esta fue sin embargo la etapa decisiva, el cambio cualitativo. La subordinación de los demás poderes regionales, el consejo de Asturias, el comité de Levante, donde el Partido Comunista y sobretudo el Partido Socialista jugaban un papel decisivo, no planteaba el mismo problema que en Catalunya, donde la hegemonía de la CNT en la calle y las empresas seguía siendo indiscutible. ¿Qué peso podían tener en los debates internos de la central anarcosindicalista los argumentos de los responsables catalanes de la CNT en favor de una Junta de defensa CNT-UGT, de hecho un *gobierno obrero* en ruptura con los partidos burgueses republicanos, cuando habían hecho prevalecer en su feudo catalán una solución completamente diferente?. Al campeón anarquista de la colaboración, Horacio Prieto, le era fácil ridiculizar a los militantes que hicieron del título —de la denominación— del *gobierno* una condición sine qua non de la colaboración de los anarquistas. El peligro corrido por Madrid hizo el resto, y, el 4 de noviembre de 1936, cuatro responsables de la CNT se convirtieron en ministros en el gobierno central de la República: el nuevo ministro de Justicia era García Oliver, hasta entonces abogado de la *toma del poder* por la CNT. Menos de un mes después, los irreductibles libertarios de Aragón seguían la corriente, y el veterano libertario Joaquín Ascaso continuaba presidiendo el Consejo de Aragón, en el que tomarán asiento consejeros del PS y del PC, así como de los partidos republicanos, pero en calidad ya de *gobernador general* de la provincia...

El único *poder regional* que subsistía era precisamente el que no tenía ningún carácter revolucionario. Tras el voto del estatuto de autonomía del País Vasco por las Cortes a propuesta del Gobierno de Largo Caballero, la Junta de defensa dejó su sitio al Gobierno provisional de Euskadi, que presidía el dirigente nacionalista vasco Aguirre, elegido por los alcaldes y consejeros municipales: la CNT no

participaba en él. Aquí no había necesidad de su prestigio ni de su autoridad en el gobierno, en una región en la que el movimiento revolucionario no había hecho sino aflorar.

La liquidación de la autoridad de los comités-gobierno sale del marco de este estudio. Su estructura, a base de acuerdos entre organizaciones, la facilitó considerablemente. Fue en efecto en lo esencial obra, en el seno de los organismos ejecutivos, en las coaliciones de tipo *Frente Popular ampliado* de los responsables de los partidos obreros más susceptibles de obtenerla sin dolor y convertirla en una *autoliquidación*: fue Andrés Nin, miembro del Consejo de la Generalidad, quien se desplazó en persona a Lérida para obtener el alineamiento de sus camaradas del POUM y la desaparición de los organismos revolucionarios. El marco nacional necesario estaba reconstituido con la ayuda de las organizaciones del Frente Popular: el Gobierno de Largo Caballero iba a poder restaurar un Estado de tipo tradicional, aunque retocado y un poco modernizado, poniendo así un término a la dualidad de poderes en la España *republicana*.

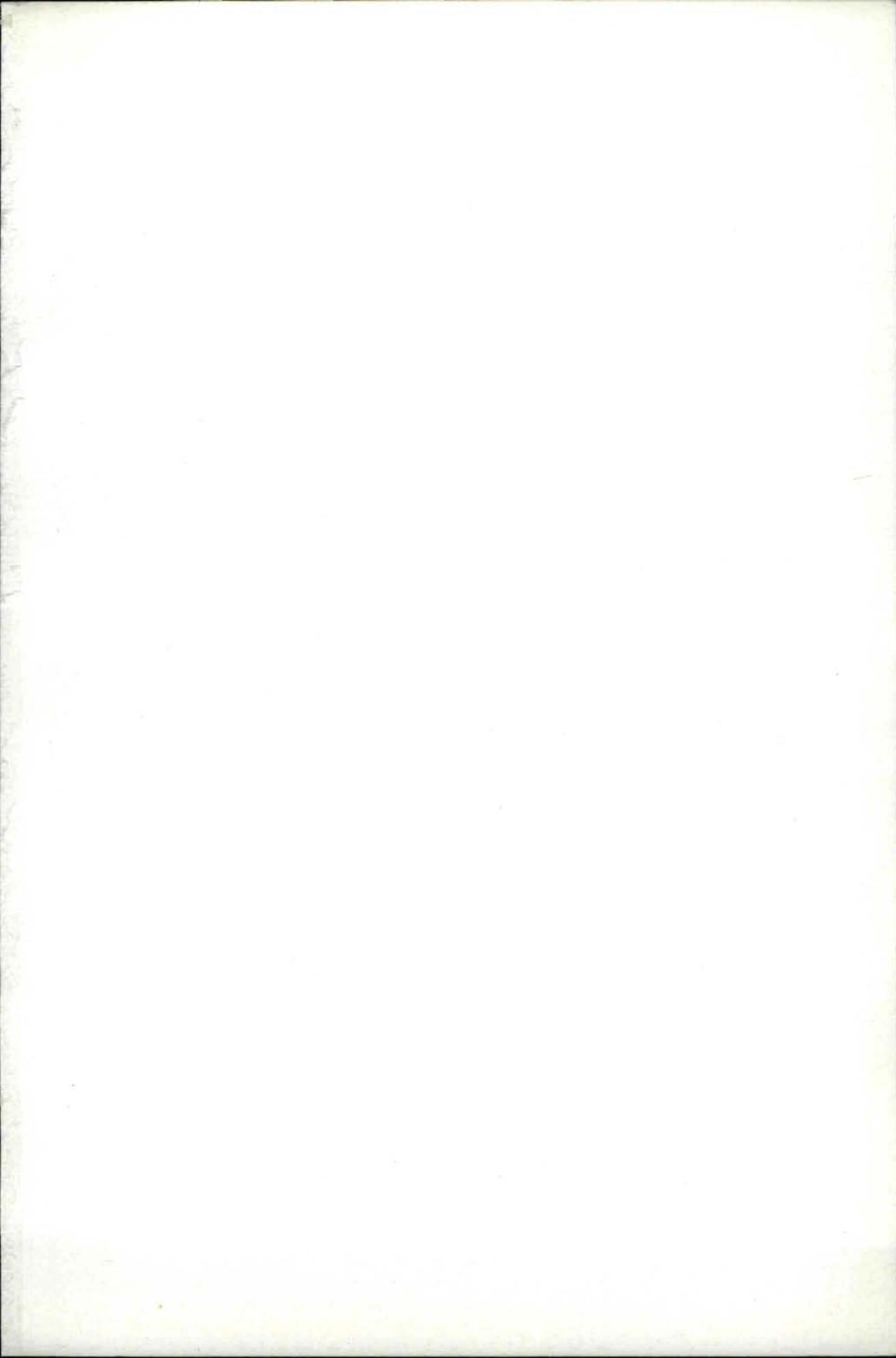
Sin embargo no fue esta última la que ganó la guerra. Pero eso es otra historia....

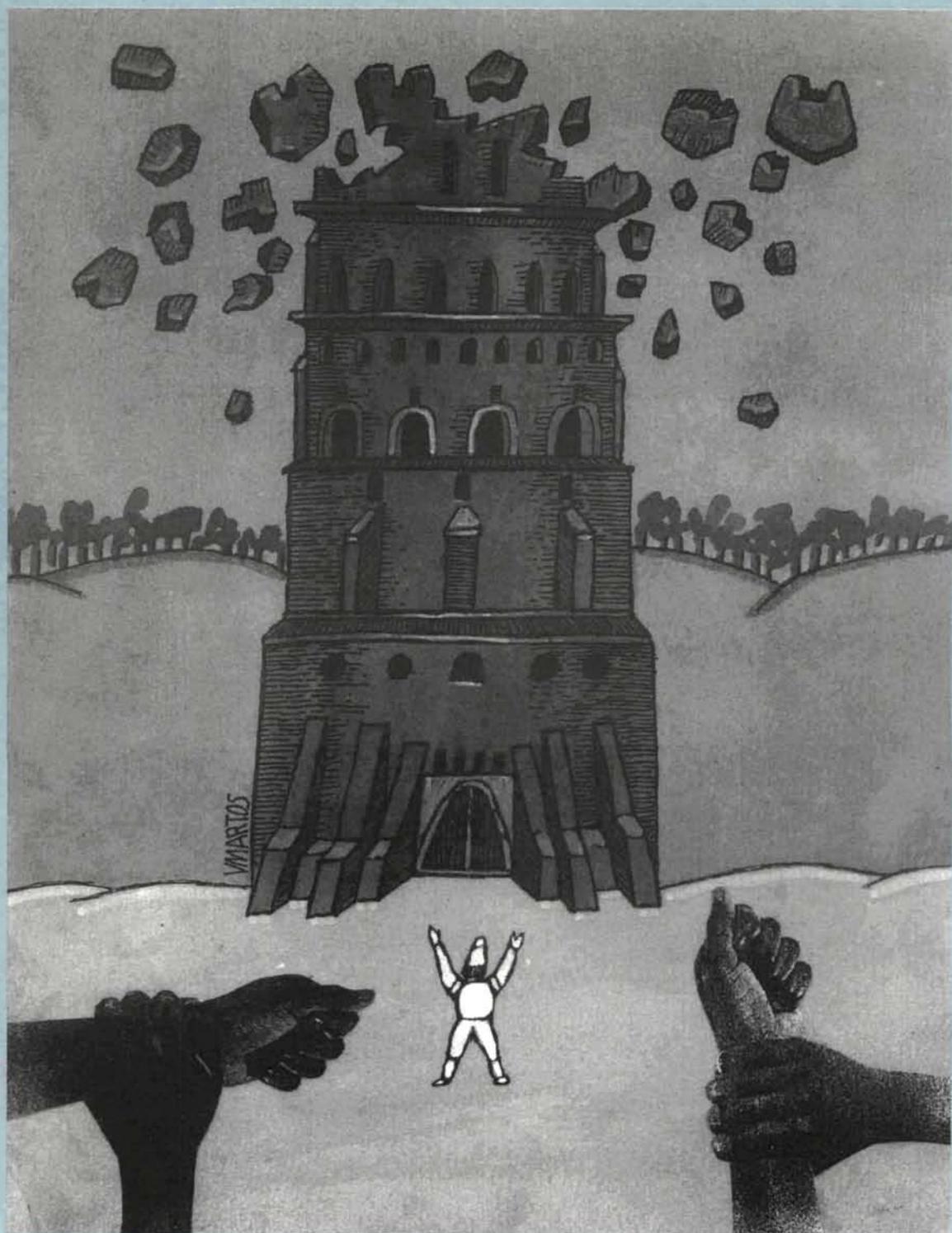
Traducción: Alberto Nadal



VMARTOS







*“... un viento sur que lleva
colmillos, girasoles, alfabetos
y una pila de Volta con avispas ahogadas”.*

Federico García Lorca Poeta en Nueva York